**ACTA 36-2020**

**JUNTA ADMINISTRADORA DEL FONDO DE JUBILACIONES Y PENSIONES DEL PODER JUDICIAL. -** San José, a las ocho horas del nueve de noviembre de dos mil veinte.

Sesión ordinaria con asistencia de los másteres Carlos Montero Zúñiga y Mauricio Villalta Fallas, de las licenciadas Ingrid Moya Aguilar y Ana Lucrecia Ruiz Rojas y del licenciado Arnoldo Hernández Solano. Asiste a la presente sesión el integrante suplente doctor Juan Carlos Segura Solís, en sustitución del integrante máster Miguel Ovares Chavarría.

Asimismo, asiste en calidad de invitado el MPM. Oslean Mora Valdez, como colaborador de la Junta en temas administrativos de conformidad con el permiso con goce de salario otorgado por el Consejo Superior en sesión N° 75-2020 del 28 de julio de 2020, artículo XVII.

**ARTÍCULO I**

**Documento N° 1024-2020**

Se entra en el pleno de la sesión y por unanimidad, se aprueba el orden del día de la presente agenda elaborada por la Secretaría General de la Corte. **Se declara acuerdo firme**.

## ARTÍCULO II

**Documento N° 1024-2020**

Por unanimidad se aprueba el acta N° 34-2020 de la sesión celebrada el lunes 26 de octubre de 2020. **Se declara acuerdo firme.**

**ARTÍCULO III**

**Documento N° 1022-20.**

El Técnico en Comunicaciones Judiciales, de la Secretaría General de la Corte Diego Andrés Mendoza Ramírez deja constancia en el sistema SICE que al ser las ocho horas once minutos del veintidós de octubre del dos mil veinte, notificó la resolución 61-2020, de las diez horas cincuenta y dos minutos del diecinueve de octubre del dos mil veinte, a la señora María Esther Jiménez Barletta, relativo al acuerdo de la Junta Administradora del Fondo de Jubilaciones y Pensiones del Poder Judicial, en sesión N° 33-2020 celebrada el 12 de octubre de 2020, artículo III, que dice:

“En sesión de Consejo Superior N° 53-12 celebrada el 29 de mayo de 2020, artículo LV, en lo conducente, se aclaró a la Auditoría, que el criterio utilizado por este Consejo para determinar la fecha de rige del beneficio de pensión, lo es a partir del día siguiente del deceso, cuando este haya sido solicitado dentro de los dos primeros meses y si se presenta en fecha posterior a esta, y si no se da ese supuesto, este empezaría a regir a partir de la fecha en que presentó de forma completa los documentos respectivos.

Posteriormente, esta Junta, en sesión N° 29-20 celebrada el 31 de agosto del 2020, artículo VII, comunicó a la señora María Esther Jiménez Barletta, mediante resolución de las trece horas diez minutos del veinticuatro de setiembre del dos mil veinte, la siguiente parte dispositiva:

“**Se acordó: 1.)** Tener por rendido el criterio vertido por el licenciado Fernando Lara Gamboa y con base en él revocar el acuerdo tomado por esta Junta Administradora en la sesión N° 8-2020 celebrada el 16 de marzo de 2020, artículo XI. **2.)** Con base en el criterio anterior, otorgar el beneficio de pensión a favor de laseñora María Esther Jiménez Barletta, cónyuge sobreviviente del causante Alfonso Chaves Ramírez, por un monto de **¢**7,403,090,79 (siete millones cuatrocientos tres mil noventa colones con setenta y nueve céntimos) equivalente al 80% del monto bruto de jubilación que devengaba el causante, a partir del 4 de setiembre de 2019, fecha en que fue presentada la gestión ante la Dirección de Gestión Humana. **3.)** La Dirección de Gestión Humana revisará y ajustará el monto del beneficio con los aumentos por costo de vida que correspondan. **4.)** Solicitar a laDirección de Gestión Humana y al Macroproceso Financiero Contable proceda a incluir a la señora Jiménez Barletta en el Sistema SIGA FJP para el pago correspondiente del beneficio de pensión a la brevedad, dado el tiempo transcurrido para la resolución final de este acuerdo.

La Dirección de Gestión Humana y el Macroproceso Financiero Contable, tomarán nota para lo que a cada uno le corresponde.”

- 0 -

Asimismo, esta Junta Administradora del Fondo de Jubilaciones y Pensiones del Poder Judicial, en la sesión N° 31-2020 celebrada el 21 de setiembre del 2020, artículo XXII, dispuso:

“En sesión N° 30-2020 celebrada el 07 de setiembre del 2020, artículo XXXV, se tomó el acuerdo, cuya parte dispositiva literalmente dice:

**“Se acordó: 1.)** Tomar nota de la comunicación realizada por la Secretaría General de la Corte. **2.)** Aclarar que la gestión anterior se resolvió en Sesión extraordinaria 29-2020, artículo VII, donde se tuvo por rendido el informe presentado por el licenciado Fernando Lara Gamboa y con base en él se revocó el acuerdo tomado en la sesión N° 8-2020 celebrada el 16 de marzo de 2020, artículo XI, y en su defecto se otorgó la pensión a la señora María Ester Jiménez Barletta en un 80% del monto que le hubiera correspondido al causante. En razón de lo anterior, se deberá proceder archivar el asunto pendiente.

La Secretaría General de la Corte tomará nota para lo de su cargo**.”**

- 0 -

El licenciado Senel Briones Castillo, Abogado de Procuraduría, mediante oficio N° ADPb-6593-2020 del 16 de setiembre de 2020, remitió lo siguiente:

“Mediante la presente me permito saludarlos y a la vez, siguiendo instrucciones de la Procuradora Adriana Fallas Martínez, hacer de su conocimiento el proceso de amparo de legalidad formulado contra el Estado (Junta Administradora del Fondo de Jubilaciones y Pensiones del Poder Judicial).

El amparo de legalidad es interpuesto por la señora **María Esther Jiménez Barletta** para que se resuelva la solicitud que fue presentada en fecha **4 de septiembre de 2019, referida a una pensión por muerte,** y que a la fecha de su demanda la parte actora indica que no se ha resuelto.

Este amparo es comunicado mediante resolución de las 15 horas y 1 minutos del 4 de septiembre de 2020 y corresponde al expediente n°. **20-004048-1027-CA - 2**. Como es de su conocimiento, de resolverse las pretensiones de la parte actora, dentro del plazo de **quince días** conferido por el Tribunal Procesal Contencioso Administrativo, el asunto podrá ser archivado sin condenatoria en costas, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 35 del Código Procesal Contencioso Administrativo.

El traslado de demanda nos fue debidamente notificado el 16 de septiembre de 2020, por lo que, el lapso temporal supra citado vence el 7 de agosto de 2020, para poder alegar cumplimiento de conducta omisiva.

Adjunto copia simple de traslado, escrito de demanda y pruebas aportadas por la parte actora.

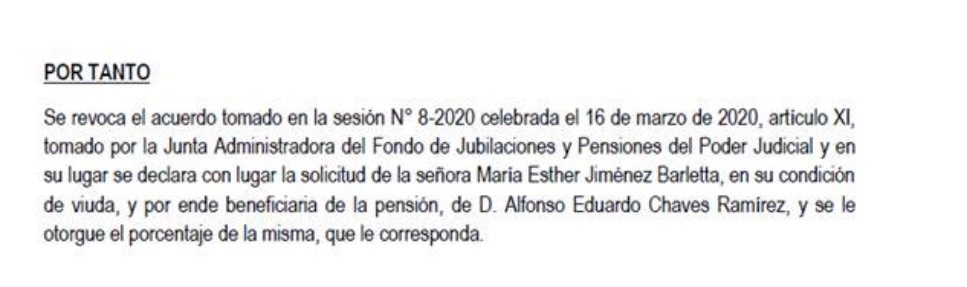
(Documentos)

…”

- 0 -

En virtud de lo anterior, el señor Oslean Mora Valdez, mediante correo del 17 de setiembre de 2020, comunicó:

El caso de la señora Jimenez Barleta, me parece que fue conocido en la sesión del 07 de septiembre del 2020, *no tengo la redacción final de ese acuerdo*, sin embargo me parece que se había aceptado el criterio jurídico de don Fernando Lara (adjunto), en el cual incluso se brindaba un borrador de respuesta y lo que quedaría es proceder con la comunicación respectiva:



De tal forma, para la atención del recurso de amparo remitido por doña Ana Lucrecia, salvo criterio en contrario, lo que correspondería es obtener la redacción del acuerdo en firme y proceder con la comunicación respectiva a las partes involucradas.”

- 0 -

**Por unanimidad se acordó: 1.)** Tener por presentado el oficio N° ADPb-6593-2020 del 16 de setiembre de 2020, suscrito por el licenciado Senel Briones Castillo, Abogado de la Procuraduría General de la República, mediante el que hace de conocimiento de esta Junta Administradora del proceso de amparo de legalidad formulado contra el Estado (Junta Administradora del Fondo de Jubilaciones y Pensiones del Poder Judicial), interpuesto por la señora María Esther Jiménez Barletta. **2.)** Hacer de conocimiento de la Procuraduría General de la República que la solicitud de pensión de la señora Jiménez Barletta fue resuelta a su favor en la sesión extraordinaria N° 29-2020, celebrada el 31 de agosto de 2020, artículo VII. **3.)** Solicitar a la Dirección de Gestión Humana y al Macroproceso Financiero Contable procedan a la brevedad con la aprobación en el SIGA FJP, para el pago del beneficio de pensión desde la fecha en que fue aprobado por esta Junta Administradora. **4.)** Comisionar al MPM. Oslean Mora Valdez, encargado de apoyo administrativo de la Junta Administradora del Fondo de Jubilaciones y Pensiones del Poder Judicial, para que coordine con el licenciado Fernando Lara Gamboa, para que nos colabore con la contestación al Tribunal Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda del Segundo Circuito Judicial de San José, expediente N° 20-004048-1027-CA. **Se declara acuerdo firme.**”

- 0 -

La señora María Esther Jiménez Barletta, en correo electrónico de 29 de setiembre de 2020, presentó la siguiente gestión:

“La suscrita MARÍA ESTHER JIMÉNEZ BARLETTA, (…) , conocida en autos como SOLICITANTE, por éste medio con el debido respeto me doy por notificada en este acto de la resolución número 52-2020 emitida a las 13:10 horas del 24 de setiembre de 2020 e interpongo RECURSO DE REVOCATORIA CON APELACIÓN EN SUBSIDIO, en caso de que se considere procedente, en contra de dicha resolución donde se incluye el artículo VII, acuerdo tomado en sesión número 29-20 celebrada el 31 de agosto de 2020, con base en lo siguiente:

**NOTIFICACIÓN:**

Tal y como se puede observar en escrito que presenté el 30 de abril de 2020, indiqué que recibiría notificaciones en el fax: 2224-1922, subsidiariamente en el correo electrónico : [rchavesj@yahoo.com](mailto:rchavesj@yahoo.com), sin explicación válida la resolución recurrida me fue notificada en otro correo electrónico que NO se encuentra como el señalado para recibir las notificaciones.

**PROCEDENCIA DE AMBOS RECURSOS:**

* Nos encontramos frente a una resolución recurrible ya que es un acto administrativo final y que emana del jerarca.
* Al NO existir reglamentación vigente que regule este procedimiento administrativo en específico, debe regirse según lo dispone la Ley General de la Administración Pública (LGAP).

**FUNDAMENTACIÓN DEL RECURSO:**

* La resolución recurrida indica en su acuerdo número 2: “…equivalente al 80% del monto bruto de jubilación que devengaba el causante, a partir del 4 de setiembre de 2019, fecha en que fue presentada la gestión ante la Dirección de Gestión Humana…” (subrayado no es del original).-
* En la página de internet del Fondo de Jubilaciones y Pensiones de Poder Judicial se indica en el trámite para solicitud de pensión, derivada de la muerte de quien fuera servidor (a) judicial o jubilado (a) judicial que : “… el Consejo Superior en sesión N° 53-12 celebrada el 29 de mayo de 2012, artículo LV, acordó que la fecha de rige del beneficio de pensión será el día siguiente del deceso, cuando este haya sido solicitado dentro de los primeros meses y si se presenta en fecha posterior a ésta, empezará a regir a partir de la fecha en que presentó de forma completa los documentos respectivos…”
* Mi esposo, ALFONSO EDUARDO CHAVES RAMÍREZ, falleció el 11 de agosto de 2019, según consta en autos.
* La solicitud de Pensión por muerte fue presentada a la Dirección de Gestión Humana del Poder Judicial el 4 de septiembre de 2019, es decir, VEINTICUATRO días después de acaecido el fallecimiento.
* Según lo indicado, presenté la solicitud de pensión por muerte dentro de los dos primeros meses contados a partir del fallecimiento del funcionario judicial, razón por la que la fecha en la que debe regir el beneficio de pensión para mi persona debe ser el día siguiente del deceso, según lo establecido por el Consejo Superior del Poder Judicial y que se encuentra señalado en el formulario que consta en la página de internet de la institución y NO la fecha que se presentó la gestión.

**PRUEBAS**

* Las que constan en autos

**PRETENCIÓN**

En vista de lo expuesto solicito que:

Se admita este recurso de revocatoria, se declare con lugar, se revoque y deje sin efectos el acuerdo tomado por la Junta Administradora del Fondo de Jubilaciones y Pensiones del Poder Judicial en el artículo VII de la sesión número 29-20 celebrada el 31 de agosto de 2020, que se incluye en la resolución número 52-2020 celebrada a las13:10 horas del 24 de septiembre de 2020, ÚNICAMENTE en lo que se refiere a la fecha en la que comienzo a recibir la jubilación de mi esposo, ALFONSO EDUARDO CHAVES RAMÍREZ, ya que se indica que es a partir del 4 de septiembre de 2019, fecha en que fue presentada la gestión ante la Dirección de Gestión Humana, cuando en realidad debería ser a partir del día siguiente de su fallecimiento, 12 de agosto de 2019, según se estableció en sesión 53-12 celebrada el 29 de mayo de 2012, artículo LV y se indica en: <https://pjenlinea2.poder-judicial.go.cr/SIGAFJP.INT.UserInterface/frmSolicitudPensión.aspx>

En todo lo demás se mantenga incólume la resolución y se consolide mi derecho a recibir la pensión de mi esposo ya que se acepta y comparte el reconocimiento del mismo que se me otorgó en la resolución recurrida.

En caso de que su autoridad considere que el pronunciamiento se encuentra dictado conforme a derecho, se tenga por presentado el recurso de apelación y se remita al superior para que lo conozca y emita pronunciamiento.

**FUDAMENTO DE DERECHO**

Artículos 128 a 130, 134, 136, 214 a 217, 221, 224, 229, 239, 240.1, 243, 245, 247. 256, 308 inciso 1.a, 334, 335, 342, 343, 344 inciso 2, 345 inciso 1, 346 a 352, 356 y concordantes de la Ley General de la Administración Pública.

228 inciso a, 229, 239 y concordantes de la Ley Orgánica del Poder Judicial.

**NOTIFICACIONES**

Seguiré recibiendo notificaciones (…)

- 0 -

**Se acordó por unanimidad:** **1.)** Tener por conocida la gestión de la señora María Esther Jiménez Barletta, presentada mediante correo electrónico del 29 de setiembre de 2020, mediante el cual interpone Recurso de Revocatoria con Apelación en Subsidio, en contra de la resolución donde se incluye el artículo VII, acuerdo tomado en sesión número 29-2020 celebrada el 31 de agosto de 2020 por la fecha de rige del beneficio de pensión. **2.)** Hacer de conocimiento de la señora Jiménez Barletta, que esta Junta Administradora en sesión N° 22 del 29 de junio de 2020, artículo V, tomó el acuerdo para que la fecha de rige del beneficio sea a partir de la presentación de la gestión cuando se realiza posterior a 15 días hábiles después al fallecimiento de la persona causante, como lo es el caso que nos ocupa, razón por la cual el acuerdo se encuentra ajustado a derecho y que el tiempo de dos meses que la señora Jiménez Barletta indica en su recurso, corresponde a un periodo anterior que había sido aprobado por el Consejo Superior, en sesión N° 53-12 celebrada el 29 de mayo de 2012, artículo LV, el cual con la entrada en funcionamiento de la Junta Administradora, queda sin efecto. **Se declara acuerdo firme**.”

- 0 -

Mediante correo electrónico de 23 de octubre de 2020, el licenciado Rodrigo Chaves J. Abogado y Notario, remite Recurso de Reconsideración de la señora María Esther Jiménez Barletta, pensionada judicial, que dice:

“La suscrita MARÍA ESTHER JIMÉNEZ BARLETTA, mayor, viuda una vez, Pensionada, vecina de Curridabat, Lomas de Ayarco, Condominio Tierras del Este y portadora de la cédula de identidad: [Valor], conocida en autos como SOLICITANTE, por éste medio y con el debido respeto interpongo RECURSO DE REVOCATORIA CON APELACIÓN EN SUBSIDIO en contra de la resolución número 61-2020 emitida por este despacho a las 10:52 horas del 19 de octubre de 2020, donde se incluye el artículo III, acuerdo tomado en sesión número 33-2020 celebrada el 12 de octubre de 2020, con base en lo siguiente:

•.La resolución recurrida indica: “…2.) Hacer de conocimiento de la señora Jiménez Barletta, que esta Junta Administradora en sesión N°22 del 29 de junio de 2020, artículo V, tomó el acuerdo para que la fecha de rige del beneficio (sic) sea a partir de la presentación de la gestión cuando se realiza posterior a 15 días hábiles después al (sic) fallecimiento de la persona causante, como lo es el caso que nos ocupa, razón por la cual el acuerdo se encuentra ajustado a derecho y que el tiempo de dos meses que la señora Jiménez Barletta indica en su recurso, corresponde a un periodo anterior que había sido aprobado por el Consejo Superior, en sesión N°53-12 celebrada el 29 de mayo de 2012, artículo LV, el cual con la entrada en funcionamiento de la Junta Administradora, que sin efecto…”

•.La Junta Administradora del Fondo de Jubilaciones y Pensiones del Poder Judicial (JAFJP) comenzó a prestar funciones a partir de inicio del año 2020 y durante varios meses puso en práctica la regla que había aprobado el Consejo Superior citado en la resolución recurrida.

•..Cuando presenté la solicitud de pensión -4 de septiembre de 2019- se encontraba firme y en vigencia el acuerdo del Consejo Superior, en sesión N°53-12 celebrada el 29 de mayo de 2012, artículo LV, donde se establecía que: “…la fecha de rige del beneficio (sic) de pensión será el día siguiente del deceso, cuando este haya sido solicitado dentro de los dos primeros meses…” y así se especifica en el formulario que hay que acceder y enviar por medio de la página de internet del Poder Judicial (https://pjenlinea2.poder-judicial.go.cr/SIGAFJP.INT.UserInterface/frmSolicitudPension.aspx).

• Es importante señalar que al día de hoy el formulario todavía indica que la fecha de inicio del beneficio de la pensión se regula por el acuerdo del Consejo Superior, en sesión N°53-12 celebrada el 29 de mayo de 2012, artículo LV.

• NO es viable dar carácter retroactivo al acuerdo que tomó la JAFJP en junio de 2020, que me perjudica ya que afecta una situación jurídica consolidada. Tampoco se puede dejar de lado que en la información que brinda el Poder Judicial para la solicitud de pensión derivada de la muerte de quien fuera servidor(a) o jubilado(a) judicial, todavía se indica que la fecha en la que inicia el beneficio será el día siguiente del deceso, cuando este haya sido solicitado dentro de los dos primeros meses, es decir, todavía se mantiene el acuerdo del Consejo Superior, en sesión N°53-12 celebrada el 29 de mayo de 2012, artículo LV como el preponderante, situación que NO se puede pasar por alto ya que la administración está brindando información incorrecta que podría llevar al administrado a caer en un error y a ver perjudicados sus intereses en razón de lo que ha sido provocado por la misma administración.

**PRUEBAS**

• Página de internet del Poder Judicial donde se accede a los requisitos, formularios y donde se remite la información inicial del trámite de solicitud de pensión: https://pjenlinea2.poder-judicial.go.cr/SIGAFJP.INT.UserInterface/frmSolicitudPension.aspx

**PRETENSIÓN**

En vista de lo expuesto solicito que:

-Se admita este recurso de revocatoria, se declare con lugar, se revoque y dejen sin efecto los acuerdos tomados por la Junta Administradora del Fondo de Jubilaciones y Pensiones del Poder Judicial en el artículo VII de la Sesión número 29-20 celebrada el 31 de agosto de 2020, que se incluye en la resolución número 52-2020 celebrada a las 13:10 horas del 24 de septiembre de 2020 y en el artículo III de la Sesión número 33-2020 celebrada el 12 de octubre de 2020, que se incluye en la resolución número 61-2020 celebrada a las 10:52 horas del 19 de octubre de 2020, ÚNICAMENTE en lo que se refiere a la fecha en la que comienzo a recibir la jubilación de mi esposo, ALFONSO EDUARDO CHAVES RAMÍREZ, ya que se pretende aplicar de forma retroactiva, por ende ilegítima e ilegal, la modificación de una regla que además NO se encuentra actualizada en la página de internet del Poder Judicial donde se accede y se envía el formulario correspondiente para iniciar el trámite de solicitud de pensión. El beneficio debe otorgárseme a partir del 12 de agosto de 2020, aplicando el acuerdo del Consejo Superior, en sesión N°53-12 celebrada el 29 de mayo de 2012, artículo LV, que se encontraba vigente y en aplicación al momento en que presenté la solicitud y que todavía es el que se cita en la página del Poder Judicial como parte de la normativa que rige este procedimiento (https://pjenlinea2.poder-judicial.go.cr/SIGAFJP.INT.UserInterface/frmSolicitudPension.aspx).

-En caso de que su autoridad considere que el pronunciamiento se encuentra dictado conforme a derecho, se tenga por presentado el recurso de apelación y se remita al superior para que lo conozca y emita pronunciamiento.

-Si se considera que el pronunciamiento se encuentra dictado conforme a derecho, se tenga por presentado el recurso de apelación y se remita al superior para que lo conozca y emita pronunciamiento.

**FUNDAMENTO DE DERECHO**

**Artículos:**

- 128 a 130, 134, 136, 214 a 217, 221, 224, 229, 239, 240.1, 243, 245, 247, 256, 308 inciso 1.a, 334, 335, 342, 343, 344 inciso 2, 345 inciso 1, 346 a 352, 356 y concordantes de la Ley General de la Administración Pública.

- 228 inciso a, 229, 239 y concordantes de la Ley Orgánica del Poder Judicial.

- Artículo 34 de la Constitución Política de la República de Costa Rica.

**NOTIFICACIONES**

Seguiré oyendo notificaciones en el correo electrónico: rchavesj@yahoo.com, subsidiariamente en el fax: 2224-1922.

San José, 22 de octubre de 2020.”

-0-

Una vez analizada la gestión anterior, **se acordó por unanimidad: 1.)** Tener por rendido el correo electrónico del 23 de octubre de 2020, remitido por el licenciado Rodrigo Chaves Jiménez, Abogado y Notario, mediante el que presenta Recurso de Reconsideración de la señora María Esther Jiménez Barletta, pensionada judicial. **2.)** Considerando los argumentos señalados y de un mejor análisis del que se desprende que al momento de solicitud de pensión de la señora Jiménez Barletta, no se encontraba aprobado el acto administrativo tomado por esta Junta en sesión N°22 del 29 de junio de 2020, artículo V, se acuerda modificar la fecha rige del beneficio de pensión, para que sea a partir del 12 de agosto de 2019. **3.)** Hacer el acuerdo de conocimiento de la Dirección de Gestión Humana y del Macroproceso Financiero Contable para lo que a cada uno corresponda. **Se declara acuerdo firme**.

## ARTÍCULO IV

**Documento N° 1001-2020.**

En oficio número 3706-DE-2020 del 15 de octubre de 2020, la máster Ana Eugenia Romero Jenkins, Directora Ejecutiva, remitió el siguiente informe:

“Para conocimiento y lo que a bien estime resolver la Junta Administradora del Fondo de Jubilaciones y Pensiones del Poder Judicial, traslado oficio N° PEN-1313-2020 con fecha 8 de octubre en curso, suscrito por el señor Róger Porras Rojas, Gerente General de Popular Pensiones del Banco Popular, mediante el que plantea solicitud de colaboración para que se les faciliten un medio de consulta automatizado donde se pueda verificar que una persona está jubilada o un contacto al que se pueda solicitar dicha confirmación, para los efectos de acceder a los recursos del fondo Régimen Obligatorio de Pensiones Complementarias (ROP).”

-0-

Seguidamente se transcribe el oficio número PEN-1313-2020, del 8 de octubre de 2020, suscrito por el licenciado Róger Porras Rojas, Gerente General de Popular Pensiones S.A., que dice:

“Como es de conocimiento, dentro de los requisitos para acceder a los recursos del fondo Régimen Obligatorio de Pensiones Complementarias (ROP), se encuentra establecido que el afiliado o beneficiario debe presentar ante la Operadora de Pensiones la certificación original de pensionado, según lo indicado el artículo número 26 del Reglamento de Beneficios del Régimen de Capitalización Individual (RBRCI), el cual detalla lo siguiente:

*Artículo 26. Solicitud de la pensión complementaria*

*La solicitud de pensión complementaria presentada por el afiliado o beneficiario deberá contener los siguientes documentos:*

*(...)*

*c. Certificación original y en buen estado emitida por el Régimen Básico donde conste que es pensionado de ese Régimen, cuando se opte por la pensión complementaria del ROP. En el caso de beneficiarios, la certificación deberá indicar los porcentajes de beneficio que corresponde a cada uno.*

En razón de lo anterior, con la finalidad de incorporar controles adicionales en la gestión de retiro de nuestros afiliados, debido al incremento de trámites como resultado de la aprobación de la Ley 9906 *Ley para resguardar el derecho de los trabajadores a retirar los recursos de la pensión complementaria (Reforma a la Ley 7983*), me permito solicitar respetuosamente su colaboración para que nos faciliten un medio de consulta automatizado donde se pueda verificar que la persona está pensionada, o un contacto al que se pueda solicitar dicha confirmación.

Adicionalmente, si es posible establecer un canal al cual se pueda solicitar las certificaciones de los afiliados que desean hacer el trámite de retiro del ROP, y que las mismas sean remitidas directamente a la OPC.

(…).”

-0-

**Se acordó por unanimidad:** **1.)** Tener por conocido el oficio N° 3706-DE-2020 del 15 de octubre de 2020, suscrito por la máster Ana Eugenia Romero Jenkins, Directora Ejecutiva, mediante el que remite el oficio N° PEN-1313-2020, del 8 de octubre de 2020, suscrito por el licenciado Róger Porras Rojas, Gerente General de Popular Pensiones S.A. en el que solicita la colaboración para facilitar un medio de consulta automatizado donde se pueda verificar que una persona está pensionada. **2.)** Solicitar al Macroproceso Financiero Contable que realice las gestiones con Popular Pensiones, con el fin de que se brinde el acceso solicitado como actualmente se realiza con el Régimen de Invalidez, Vejez y Muerte y el Ministerio de Trabajo, mediante la suscripción de un convenio, el que deberá incorporar los lineamientos necesarios para la protección de datos sensibles. **Se declara acuerdo firme**.

## ARTÍCULO V

**Documento N° 1037-20**

El máster Oslean Mora Valdez, Encargado de Apoyo Administrativo de la Junta Administradora del Fondo de Jubilaciones y Pensiones del Poder Judicial, mediante correo electrónico de 26 de octubre de 2020, remitió lo siguiente:

“Estimados miembros de Junta Administradora, en atención al acuerdo tomado en sesión N°. 16-2020, articulo XII del 18 de mayo 2020 y reasignado a la Licda. Karol Monge Molina en sesión 31-2020 del 21 de septiembre 2020, me permito remitir el criterio legal sobre el procedimiento a seguir para los casos de jubilados por incapacidad absoluta o permanente.

Al respecto es importante destacar que en la sesión 34-2020 se recibió el criterio jurídico original solicitado a la Dirección Jurídica del Poder Judicial y en la sesión del día de hoy (art. 8 sesión 35-2020) se recibe el listado de personas jubiladas con la condición de incapacidad absoluta y permanente, en razón de lo cual todos estos elementos podrán ser analizados en conjunto para la toma de decisión correspondiente que mejor convenga.

Espero la información les sea de utilidad.”



- 0 -

En sesión del Consejo Superior N° 22-19 celebrada el 12 de marzo de 2019, artículo XXIII, se dispuso –entre otros- *“Solicitar a la Dirección Ejecutiva que remita un informe de la situación actual del grupo de trabajadores independientes indicados en la lista citada en el informe N° 155-TE-2019, los cuales se le están realizando los estudios de trabajo social.”*

En la sesión N° 16-2020 celebrada el 18 de mayo del 2020, artículo XII, se tomó nota del acuerdo del Consejo Superior de sesión N° 28-2020 celebrada el 26 de marzo de 2020, artículo XIII y siendo que el estudio que antecede corresponde al cruce de bases de datos del III Trimestre del año 2018, considera esta Junta que lo oportuno es solicitar al Departamento Financiero Contable el Informe de Cruce de Bases de Datos con la CCSS del I Trimestre de 2020, con el fin de tomar decisiones más ajustadas respecto de estos casos. Con base en el artículo 233 de la Ley Orgánica del Poder Judicial solicitar criterio a la Dirección Jurídica, referente a cuál sería el trámite a seguir en atención a los trabajadores separados por incapacidad absoluta y permanente que están realizando actividades o labores remunerativas.”

Posteriormente, en la sesión N° 30-2020 celebrada el 7 de setiembre del 2020, artículo XXXIII, se informó a la Dirección Jurídica y al Departamento Financiero Contable, que esta Junta Administradora dejó sin efecto lo solicitado en sesión número 16-2020 celebrada el 18 de mayo del 2020, artículo XI, por lo que no es necesario que remitan los informes solicitados en la citada sesión

Asimismo, en la sesión N° 31-2020 celebrada el 21 de setiembre del 2020, artículo XLV, se tomó nota de la comunicación que hace la Secretaría General de la Corte. Además, se aclaró a la Secretaría General de la Corte que en sesión N° 30-2020, artículo XXX, se dejó sin efecto la solicitud a la Dirección Jurídica del informe solicitado en la sesión N° 16-2020 celebrada el 18 de mayo del 2020, artículo XII, por haber perdido interés esta Junta en el tema. En cuanto al informe del Macroproceso Financiero Contable en esta misma sesión se conoció el cruce de base de datos del IV Trimestre del año 2019 y queda a la espera del informe actualizado al año 2020. En cuanto al criterio jurídico se queda a la espera del asignado a la máster Karol Monge Molina, asesora externa, solicitado en el artículo XXX, de esta misma sesión.”

Seguidamente, en la sesión N° 31-2020 celebrada el 21 de setiembre del 2020, artículo XXX, en virtud de que no se tiene criterio solicitado a la Dirección Jurídica, se contrató a una asesoría jurídica externa con el fin de que aclare si el espíritu de la norma puede suspenderse con base en la resolución de la Sala Constitucional aplicada en recurso de amparo al licenciado Eddie Alvarado Vargas. en el término de 10 días hábiles. En ese momento, se comisionó a Oslean Mora Valdez, para coordinar con la Máster Karol Monge Molina.

En sesión N° 32-2020 celebrada el 05 de octubre del 2020, artículo VI, se tuvo por conocido el oficio N° 3299-DE-2020 del 15 de setiembre de 2020, suscrito por la máster Ana Eugenia Romero Jenkins, Directora Ejecutiva, referente a las personas jubiladas por incapacidad absoluta y permanente que aparecen en los cruces de bases de datos de la Caja Costarricense del Seguro Social. Asimismo, se tuvo por conocido el oficio Nº DJ-AJ-C-639-2020 del 28 de setiembre de 2020, suscrito por la máster Argili Gómez Siu, Directora Jurídica interina, mediante el que emite criterio relacionado con las personas jubiladas por incapacidad absoluta y permanente y que se encuentran realizando labores remunerativas. Así como estar a la espera del criterio jurídico solicitado a la Máster Karol Monge Molina, en sesión N° 31-2020 de esta Junta, celebrada el 21 de setiembre de 2020, con el fin de contar con la totalidad de elementos para tomar un acuerdo del tratamiento que debe darse a estas personas.

Posteriormente, en sesión N° 34-20 celebrada el 19 de octubre de 2020, artículo III, se tuvo por conocido el oficio N° 3614-DE-2020 del 8 de octubre de 2020, suscrito por la máster Ana Eugenia Romero Jenkins, Directora Ejecutiva, mediante el que remite oficio N° 1339-TE-2020 de fecha 7 de octubre de 2020, suscrito por el máster Miguel Ovares Chavarría, Jefe del Macroproceso Financiero Contable, referente al resultado del cruce de bases de datos del Fondo de Jubilaciones y Pensiones del Poder Judicial con la C.C.S.S., correspondiente al I trimestre 2020. Estar a la espera del criterio jurídico solicitado a la máster Karol Monge Molina, en sesión N° 31-2020 de esta Junta, celebrada el 21 de setiembre de 2020, con el fin de contar con la totalidad de elementos para tomar un acuerdo del tratamiento que debe darse a las personas jubiladas por incapacidad absoluta y permanente.

Finalmente, en sesión N° 35-20 celebrada el 26 de octubre de 2020, artículo VIII, se tomó nota del oficio N° 1388-TE-2020 del 14 de octubre de 2020, suscrito por el máster Miguel Ovares Chavarría, Jefe del Macroproceso, las másteres Floribel Campos Solano, Jefa Proceso de Tesorería y Andrea Valerín Arroyo, Jefa Subproceso Egresos, todos del Macroproceso Financiero Contable mediante el que remitió listado de personas jubiladas judiciales activas a la fecha, cuyo beneficio fue otorgado en razón de incapacidad absoluta y permanente, solicitado por esta Junta en sesión N° 18-2020 celebrada el 01 de junio de 2020, artículo XII, con base en el acta del Comité de Auditoría N° 01-20. Asimismo, comunicó que el mecanismo de detección de los casos de personas jubiladas judiciales cuyo beneficio fue otorgado en razón de incapacidad absoluta y permanente, que fueron reportadas en algún momento laborando para el sector privado o como trabajadores (as) independientes, utilizado por esa oficina es el informe trimestral correspondiente al Cruce de bases de datos del Fondo de Jubilaciones y Pensiones con la Caja Costarricense del Seguro Social.

- 0 -

**Se acordó unanimidad: 1.)** Tener por conocido el correo electrónico de 26 de octubre de 2020, suscrito porel máster Oslean Mora Valdez, Encargado de Apoyo Administrativo de la Junta Administradora del Fondo de Jubilaciones y Pensiones del Poder Judicial, mediante el que remite el criterio presentado por la asesora legal Karol Monge Molina, sobre el procedimiento a seguir para los casos de jubilados por incapacidad absoluta o permanente. **2.)** Trasladar el presente acuerdo a la Dirección Jurídica para que, conforme el criterio jurídico adjunto elaborado por la licenciada Karol Monge Molina, y el convenio interinstitucional de servicios suscrito por la Corte Suprema de Justicia y esta Junta Administradora, elabore un borrador de reglamento referente al procedimiento que se debe seguir en los casos de personas jubiladas por incapacidad absoluta o permanente que se reportan trabajando. Por lo anterior, el MPM. Oslean Mora Valdez, encargado de apoyo administrativo de la Junta Administrativa, coordinará con ese despacho con el fin de indicar el enfoque y los lineamientos que se deben incluir.

**SALE DE LA SESIÓN EL INTEGRANTE MAURICIO VILLALTA FALLAS.**

**ARTÍCULO VI**

**Documento N° 231-20 / 1014-20.**

En sesión N° 11-2020 celebrada el 13 de abril del 2020, artículo V, esta Junta por unanimidad, acordó comunicar a la licenciada Carolina González Gaitán, jefa interina del Área de Análisis Financiero de la Dirección Actuarial y Económica del Seguro Social, que, por la Ley de Protección de la Persona Frente al Tratamiento de sus Datos Personales, la información que están solicitando es confidencial y se necesitaría la autorización de cada uno de los beneficiarios para poder brindarla. no obstante, lo anterior, se les remite el informe financiero de los últimos tres meses para que tengan datos generales del régimen del Poder Judicial.

- 0 -

En relación a lo anterior el máster Miguel Ovares Chavarría, Jefe del Macroproceso Financiero Contable, y las másteres Floribel Campos Solano y Andrea Valerín Arroyo, por su orden jefa Proceso de Tesorería y Jefa Subproceso Egresos, remiten oficio Nº 1393-TE-2020 del 20 de octubre de 2020, solicitando lo siguiente :

“En atención al contenido del oficio PE-DAE-0933-2020 de fecha 05 de octubre de 2020 remitido por la M.Sc. Carolina González Gaitán, Jefa a.í. del Área de Análisis Financiero de la Dirección Actuarial y Económica de la C.C.S.S., relacionado con lo acordado por esa Junta Administradora en la sesión N° 11-2020 celebrada el 13 de abril de 2020, artículo V:

“Comunicar a la licenciada Carolina González Gaitán, jefa interina del Área de Análisis Financiero de la Dirección Actuarial y Económica del Seguro Social, que, por la Ley de Protección de la Persona Frente al Tratamiento de sus Datos Personales, la información que están solicitando es confidencial y se necesitaría la autorización de cada uno de los beneficiarios para poder brindarla. no obstante, lo anterior, se les remite el informe financiero de los últimos tres meses para que tengan datos generales del régimen del Poder Judicial.”

Se traslada a esa Junta Administradora el oficio mencionado, en virtud que la C.C.S.S. reitera la solicitud de información de la forma efectuada mediante el oficio DAE-0225-2020 de fecha 09 de marzo de 2020.

Lo anterior con el fin que, salvo disposición de lo contrario, se brinde la respectiva autorización a esta oficina para remitir los datos conforme a lo solicitado por dicha institución.

-0-

**Se acordó por unanimidad: 1.)** Rechazar la solicitud de la CCSS según oficio DAE-0225-2020 y oficio PE-DAE-0933-2020 por cuanto, de conformidad con lo que se establece en la Ley de Protección de la Persona frente al tratamiento de sus datos personales, para poder acceder a dicha información resulta necesario contar con el consentimiento informado, suscrito por cada una de las personas a las que se requiere consultar y que éste se emita en los términos que dicha Ley establece. **2.)** Indicarle a la CCSS que, la posibilidad de compartir información de las bases de datos de ambas entidades debería establecerse formalmente mediante un convenio entre instituciones y con la firma de acuerdos de confidencialidad necesarios, en apego a la Ley N°. 8968, donde exista reciprocidad en el acceso a la información correspondiente. **3.)** El Macroproceso Financiero Contable, tomará nota para los efectos correspondientes. **Se declara acuerdo firme**.

## ARTÍCULO VII

**Documento N° 1097-2020.**

En oficio número 0419-PI-2020 del 29 de octubre de 2020, el máster Miguel Ovares Chavarría, Jefe de Macroproceso Financiero Contable y el licenciado Fabián Salas Fernández, Jefe interino de Proceso de Inversiones, remitieron el siguiente informe:

“Conforme las políticas de transparencia, así como lo analizado y aprobado por el Comité de Inversiones en la sesión extraordinaria del **19 de octubre de 2020**, se adjuntan los siguientes documentos:

1. Acta 92-CI-2020 sesión extraordinaria del Comité de Inversiones del Fondo de Jubilaciones y Pensiones del Poder Judicial.

La información detallada y anexada en este documento es, si bien así lo estima, para hacerlo de conocimiento a la Junta Administradora del Fondo de Jubilaciones y Pensiones del Poder Judicial.

(…).”

-0-

A esos efectos se transcribe el acta de la Sesión Extraordinaria No. 092 celebrada por el Comité de Inversiones del Fondo de Jubilaciones y Pensiones del Poder Judicial al ser las 15:04:00 horas del 19 de octubre de 2020, que literalmente dice:

“Asistencia

 MONTERO ZÚÑIGA CARLOS, Presidente Comité de Inversiones.

 VILLALTA FALLAS MAURICIO, Vicepresidente Comité de Inversiones.

 RUIZ ROJAS ANA LUCRECIA, Directora Comité de Inversiones.

 VELÁSQUEZ CHÁVEZ EDI DARIO, Miembro Externo del Comité de Inversiones.

 SALAS FERNÁNDEZ FABIÁN, Secretario de Actas – Jefe a.i. Proceso de Inversiones.

Durante esta sesión se tuvo la presencia como apoyo técnico e invitados

 CALVO CALDERON BRYAN, Apoyo técnico Comité de Inversiones.

 MORA VALDEZ OSLEAN, Encargado Apoyo Administrativo Junta Administradora.

 ANA EUGENIA ROMERO JENKINS, Invitada Directora Ejecutiva Poder Judicial.

 FERNANDO LARA GAMBOA, Invitado, Abogado firma Lara Gamboa & Asociados.

Durante esta sesión se presentaron las siguientes ausencias

 MIGUEL ÁNGEL OVARES CHAVARRÍA, Director Comité de Inversiones, pendiente resolución del estudio

relacionado con el Conflicto de Interés.

ORDEN DEL DÍA

 Aprobación acta 91-CI-FC-2020 de las 14:12:00 horas del 21 de setiembre de 2020

 Trámite para recuperación impuesto sobre la renta (Acuerdo de Junta Adm 29-2020, criterio jurídico N°

OL-FL-001-2020)

 Propuesta de Canje Ministerio de Hacienda para instrumentos nos estandarizados.

ARTÍCULO 1 - APROBACIÓN DEL ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR.

Se somete a revisión Acta N° 91-CI-FC-2020 de la sesión ordinaria del 21 de setiembre de 2020 a las 14:12 Hrs.

La Licda. Ana Lucrecia Ruiz Rojas, Directora Comité de Inversiones, se abstiene de votar toda vez que no participó

en la sesión indicada.

Se aprueban por Unanimidad [X]

Se aprueban con Disidencia []

No se aprueban []

ARTÍCULO 2 - ACUERDOS EN FIRME

Considerandos / Acuerdos en firme

El Comité de Inversiones del Fondo de Jubilaciones y Pensiones del Poder Judicial, de conformidad con las facultades, funciones y responsabilidades establecidas en el Reglamento de Gestión de Activos, emitido por el Consejo Nacional de Supervisión del Sistema Financiero:

Considerando:

Aspectos normativos vinculantes del Fondo de Jubilaciones y Pensiones del Poder Judicial.

1. Conforme se establece en la Ley N°. 9544 “Reforma al Régimen de Jubilaciones y Pensiones del Poder Judicial, contenido en la Ley N°. 7333, Ley Orgánica del Poder Judicial” en su artículo 239, se crea la Junta Administradora del Fondo de Jubilaciones y Pensiones del Poder Judicial la cual dentro de sus atribuciones que la ley le confiere, mantiene los siguientes incisos relacionados con la administración de sus recursos:

“Le corresponde a la Junta:

a) Administrar el Fondo de Pensiones y Jubilaciones de los Empleados del Poder Judicial.

(…)

f) Invertir los recursos del Fondo, de conformidad con la ley y con la normativa que al efecto dicte el Consejo Nacional de Supervisión del Sistema Financiero y la Superintendencia de Pensiones.

(…)

g) Cumplir con la legislación y la normativa que dicten tanto el Consejo Nacional de Supervisión del Sistema Financiero como la Superintendencia de Pensiones.

(…)

i) Todas las demás atribuciones que le asignen la ley y sus reglamentos.”

2. El Comité de Inversiones del Fondo de Jubilaciones y Pensiones del Poder Judicial, se conforma de acuerdo con lo definido en el Reglamento de Gestión de Activos, Titulo II “Gobierno de las Inversiones”, Capitulo III “Comité de Inversiones”, artículos del 8 al 11, correspondiendo a la Junta Administradora del FJPPJ nombrar a los miembros de este comité.

3. Que conforme a sesión N°. 001-2020 con fecha 27 de enero del 2020, articulo VI y complementariamente mediante el oficio N°. 265-20 (respuesta a 2020SP439) con fecha 11 de mayo 2020, se determina la conformación de los comités de apoyo de dicho Junta Administradora del FJPPJ, estableciendo a las siguientes personas como miembros titulares:

Comité de Inversiones:

 Máster Carlos Montero Zúñiga, Presidente de Comité.

 Máster Mauricio Villalta Fallas, Vicepresidente de Comité.

 Licenciada Ana Lucrecia Ruiz Rojas, Miembro Director de Comité.

 Máster Miguel Ovares Chavarría, Miembro Director de Comité.

 Máster Edi Velásquez Chávez, Miembro Externo de Comité.

4. En amparo al convenio N°. 003-2020 con fecha 27 de enero 2020, establecido entre la Corte Suprema de Justicia, Poder Judicial y la Junta Administradora del Fondo de Jubilaciones y Pensiones del Poder Judicial, se designa como secretario de actas al MPM. Oslean Mora Valdez, Jefe del Proceso de Inversiones y como apoyo administrativo al Lic. Fabián Salas Fernández, coordinador de Unidad de Gestión de Portafolios. En ausencia de la Jefatura del Proceso de Inversiones del señor Mora Valdez, por permiso con goce de salario brindado por parte del Consejo Superior del Poder judicial para asumir el rol de Encargado de Apoyo Administrativo de la Junta Administradora del FJPPJ, según acuerdo tomado en sesión N° 75-2020, artículo XVII del 28 de julio del 2020, este puesto es asumido por el Lic. Fabián Salas Fernández, quien a su vez es sustituido por el MBA. Bryan Calvo Calderón, como apoyo administrativo para el Comité de Inversiones.

5. Mediante acuerdo de la Junta Administradora del Fondo de Jubilaciones y Pensiones del Poder Judicial en sesión N° 18-2020, artículo XXI del 01 de junio del 2020, se procede con la aprobación de la Planificación Estratégica y la Política de Inversiones aplicables a la administración del portafolio de inversiones del citado Fondo. Conviene en tomar los siguientes acuerdos en firme:

Acuerdo 1.

El MPM. Oslean Mora Valdez, inicia la sesión comentando que el primer tema es el análisis de un eventual proceso de demanda contra el Ministerio de Hacienda por el tema de retenciones de impuesto sobre la renta por diferentes instrumentos y el retraso en el pago de aportes obrero, patronales y estatales en 2017-2018.

El Máster Bryan Calvo Calderón introduce el tema para ser analizado haciendo referencia al acuerdo de la Junta Administradora del FJPPJ de sesión 29-2020 del 31 de agosto de 2020 en el cual se acordó:

[…] 1.) Tener por rendido el criterio jurídico N° OL-FL-001-2020 elaborado por el licenciado Fernando Lara Gamboa, Abogado.

2.) Comisionar al máster Miguel Ovares Chavarría, para que contrate a una firma jurídica externa a fin de interponer la demanda respectiva contra el Ministerio de Hacienda por las retenciones de Impuesto sobre la renta, pago de premios e intereses moratorios por inversión en títulos valores de dineros del Fondo de Jubilaciones y Pensiones del Poder Judicial

3.) Solicitar al Departamento Financiero Contable que deje de incluir como parte de los ingresos el tema de los impuestos y que cuantifique al 31 de agosto de 2020, el monto completo de esos rubros y los identifique, a fin de ser considerados como parte de los insumos a valorar por parte del Comité de Inversiones.

4.) Hacer este acuerdo de conocimiento del Comité de Inversiones para que valore si es necesario reversar el asiento contable por ingresos o indique el tratamiento necesario a realizar…” El resaltado no es del original.

De igual manera hace referencia al criterio emitido por el Despacho Carvajal & Colegiados, Auditoría Externa, sobre el manejo contable de la cuenta por cobrar, en el que sobresale lo siguiente:

[…] “es nuestro criterio que se deben ajustar las cuentas por cobrar del impuesto sobre la renta a su costo amortizado, mediante la creación de la estimación por deterioro, basados en el criterio jurídico indicado de prescripción, por la entrada en vigencia de diferentes leyes que modifican las exenciones aplicables al Fondo de Jubilaciones y Pensiones del Poder Judicial y muy particular por el posible efecto de la exención de impuestos, con la entrada en vigencia del artículo 100 de la Ley Reguladora del Mercado de Valores Ley 7732. Por tanto, una vez definido y establecido el monto total de la cuenta por cobrar, es necesario establecer el posible monto a recuperar, (que no esté prescrito ni sea improcedente), para lo cual se podría establecer una probabilidad de recuperación, de tal forma poder valorar si no se debe estimar el 100% de la partida…”

Interviene el MPM. Mora Valdez y hace referencia a que existe un criterio previo por parte del Lic. Fernando Lara en el cual expresa que existe una alta probabilidad que el Ministerio de Hacienda alegue prescripción y en la misma línea de ideas existe una alta probabilidad de una contrademanda por parte del Estado exigiendo los costos del proceso, todo esto fue expuesto por el Lic. Lara en el documento N° OLFL-001-2020. Explica que, de parte de la Junta Administradora, dada la cuantía de los recursos que se estarían dejando de percibir, se opta porque sea un Juez de la República en un eventual juicio el que determine si efectivamente los recursos se encuentran prescritos y es imposible cobrarlos.

Agrega que a partir de mayo del 2018 se dio una resolución de parte de la Dirección General de Tributación Directa en la cual detallan cuales son las excepciones con las que cuenta el FJPPJ (DGCN-097-2018) y hacen una interpretación de la ley N°. 7333, en la cual interpretan que el impuesto que se cobra en los fondos inmobiliarios no es un impuesto que se cobre al inversionista sino más bien el fondo como tal por lo cual las operaciones de fondos inmobiliarios y recompras no están exentas del cobro del impuesto.

Destaca que mientras que la Ley N°. 7333 era muy genérica en cuanto a que la exención era de todo tipo de tasas e impuestos, a partir de la promulgación de la Ley N°. 9544 se delimita la exención únicamente a los impuestos relacionados con la Ley del Impuesto sobre la renta y sus reformas.

Detalla que con corte al cierre de agosto la cuenta por cobrar al Ministerio de Hacienda asciende a poco más de ¢800 millones, razón por la cual la Junta Administradora consciente de que el asunto requiere un análisis detallado delega en el Comité de Inversiones el determinar las acciones a seguir para eventualmente plantear una demanda. Cede la palabra al Lic. Fernando Lara para que brinde las apreciaciones del tema planteado.

El Lic. Fernando Lara Gamboa, señala que, de parte de la Junta le fue asignado el caso con el fin que expresara un criterio legal. Explica que es diferente un criterio legal en el cual se brinda una opinión basada en el criterio experto en cuanto a posible resolución de un juicio y otra diferente es que se le encomiende un juicio ya que en este escenario se usan todas las opciones posibles en procura de ganar el juicio.

Explica que en su criterio dividiría los cobros planteados al Ministerio de Hacienda en tres apartados ya que todos son distintos.

En primer término, están el planteamiento del cobro de intereses producto del atraso en el pago de las cuotas obrero-patronales. Este atraso genero un perjuicio que se estima según los datos que le fueron trasladados en ¢45 millones de colones producto de los intereses que dejó de percibir el Fondo al no poder invertir los recursos en el momento que correspondía. En este caso particular existen dos problemas uno de fondo y uno de forma. El problema de forma es la prescripción, ya que de acuerdo a lo que dice el Código Civil el asunto ya está prescrito. Si se llega a presentar un juicio hay que valorar que la prescripción es un argumento que debe alegar por la contraparte. Indica que en conjunto con su equipo han realizado un análisis para tener alternativas bien fundamentadas para alegar la no prescripción del caso, sin embargo, queda a criterio del juez determinar si procede o no. Destaca que, si hay interés en presentar este caso, debe hacerse lo más pronto posible, antes que termine el año, para que el argumento de personería sirva para alegar la no prescripción.

En cuanto al fondo es necesario mencionar que el Ministerio de Hacienda ha expresado en múltiples ocasiones que no tienen obligación de pagar en fechas determinadas, que la norma los faculta a no pagar en caso de no tener fondos. En los tribunales sería necesario hacerle ver al juez que dicha norma está en contra de todos los principios laborales en lo referente al pago oportuno de los aportes obrero-patronales, explica que hay jurisprudencia al respecto. El Estado estaría representado por la Procuraduría quien probablemente alegue el mismo argumento del Ministerio de Hacienda en cuanto a que, ante la falta de recursos no estaban en obligación de pagar. Otras de las posibilidades es que al presentar el caso y antes de llegar a sentencia se llegue a conciliar.

La Máster Ana Eugenia Romero, señala que en este caso particular es importante analizarlo bien, por cuanto no existe ningún documento o convenio que amparara al FJPPJ en cuanto al pago en plazos específicos.

El Lic. Fernando Lara, señala que justamente de parte del Ministerio de Hacienda en algún momento, en el que quizá el Ministerio de Hacienda era más proclive a ayudar a la Corte, se planteó el firmar un convenio en el cual se reconociera la posibilidad de pago de intereses, lo cual parece lógico desde el punto de vista del criterio de legalidad, ya que no había una norma que los obligara al pago. Sin embargo, posteriormente se dio un cambio en los jerarcas del Ministerio y en un momento dado comunican que no van a realizar ningún convenio. Explica que, si bien no existe una norma directa y expresa en que se indique la obligatoriedad del pago a tiempo por parte del Estado y el reconocimiento de intereses ante eventuales atrasos, es posible aplicar análogamente otra legislación, como por ejemplo cuando un patrono no paga a tiempo a la CCSS se le cobran intereses. Adicionalmente han logrado encontrar vasta jurisprudencia cuando el Estado se ha atrasado en pagos a proveedores y ha tenido que pagar intereses. Destaca que es un tema en el que se podría tener mayores probabilidades de éxito si se presenta en la vía laboral, dada su naturaleza, que si se presenta en la vía contenciosa administrativa. En cuanto a las pruebas se debe contar con los comprobantes de depósito y las fechas cuando originalmente se debió pagar por parte del Ministerio de Hacienda.

La Máster Ana Eugenia Romero, indica que en Contratación Administrativa si existe una norma expresa que refiere a los 30 días, sin embargo, en este caso no se está en una relación contractual, producto de lo cual existe la preocupación de si se cuenta con el “músculo” para realizar el reclamo. De ahí que no tiene claridad en cuanto a las posibilidades de ganar una eventual demanda.

El Lic. Fernando Lara, indica que quiere dejar claro que en el informe jurídico establece que el caso es bastante difícil y que hay menos posibilidades de ganarlo que de perderlo, y así se planteó en el informe.

Solo que naturalmente si es contratado se procurará por todos los medios ganar el caso.

En un segundo caso ubicaría las retenciones que se hicieron por parte de Hacienda. Detalla que en este caso es posible distinguir tres momentos: en primer término, la creación del Fondo en la cual se hace una exoneración total de impuestos, un segundo momento con la Ley del Impuesto sobre la Renta la cual establece que todos salvo las excepciones en la ley pagaran el impuesto, lo que resulta en una derogación tácita de la norma inicial que otorgaba la exención al Fondo. Un tercer momento se da con la reforma a la Ley Orgánica del Poder Judicial en la cual ya no se hace la exención total como lo hacía la ley original, sino que nada más exonera una parte de los impuestos. De ahí que el Ministerio de Hacienda emite una resolución con las pautas y requisitos para acceder a la exoneración.

En el primer momento, anterior a la Ley del Impuesto sobre la Renta, en el cual si hay retenciones que correspondan a este periodo se podría reclamar su pago. En el momento que está entre la Ley del Impuesto sobre la Renta y la reforma a la Ley Orgánica del Poder Judicial, el Ministerio de Hacienda podría alegar que las retenciones eran legales mientras que de parte del FJPPJ se podría alegar que tales retenciones no podían realizarse por cuanto la Ley 7333 no había sido modificada expresamente. Señala que este caso es “viejo” por lo tanto de acuerdo a los artículos del Código Procesal Contencioso Administrativo y de la Ley General de Administración Pública ya estarían prescrito. Si se toma la decisión de presentar el juicio se procuraría utilizar el argumento en cuanto a que no ha prescrito por cuanto el fondo en aquel entonces era un órgano del Poder Judicial y es hasta ahora que tiene personería propia.

El MPM. Oslean Mora, señala que hay un antecedente que es necesario considerar. Existe un criterio de la Procuraduría en el cual expresa que el Consejo Superior, que administraba en su momento el Fondo, no podía ser representado por la Procuraduría para demandar al Ministerio de Hacienda ya que justamente la Procuraduría estaría representando al demandante y al demandado. Esto fue lo que limitó que el Consejo Superior y la Corte no presentaran la demanda hasta que no estuviera conformada la Junta Administradora del Fondo.

El Lic. Fernando Lara, agrega que ese precedente sería considerado. La prescripción sería “atacada” mediante dos jurisprudencias que existen en cuanto a cuándo se puede tener personería y cuando no.

Dado que anteriormente no se podía presentar el juicio por ser un órgano del Poder Judicial y ahora sí por tener personería, por lo cual la prescripción debería contarse a partir de enero 2020 y no hace cinco o seis años atrás. De igual manera la Procuraduría podría sostener que existían gestiones que en su momento sí se podían hacer y nunca se hicieron.

En cuanto a los costos señalas que este segundo juicio es mucho más caro que el primero por la cuantía tan alta. Hay que considerar que si el juicio se pierde y el juez condena al pago de las costas estas también serían bastante altas. Por ejemplo, en el primer caso de los intereses por atrasos en pago de cuotas obrero-patronales, si se presenta un juicio por ¢45 millones en lo laboral los honorarios profesionales serían de ¢13.5 millones. Cabe la posibilidad de realizar un convenio de “cuota Litis” en el cual en caso de éxito se pague un poco más y en caso de perder el juicio el costo sea menor al arancel establecido. En el segundo juicio por poco más de ¢800 millones los honorarios ascienden aproximadamente a ¢90 millones de colones en el cual también cabe la posibilidad de aplicar un “cuota Litis”.

El MPM. Oslean Mora, consulta si en caso de ganar los juicios cabe la posibilidad de que las costas del juicio es posible pedir el pago de las costas a la contraparte.

El Lic. Fernando Lara, explica que en caso de que el Fondo gane el juicio lo lógico es que, se condene en costas a la contraparte, es decir que paguen tanto las de ellos como las nuestras.

La Licda. Ana Lucrecia Ruiz, consulta quien interpondría la demanda, el Estado en su calidad de Patrono ante el Ministerio de Hacienda o si es la Junta Administradora ejerciendo la representación y extrajudicial según las facultades que le confiere el artículo 239 de la Ley 9544.

El Lic. Fernando Lara, responde que sería la Junta quien interponga la demanda contra el estado, en su criterio la Junta está debidamente facultada.

El Máster Mauricio Villalta, señala que para efectos contables es importante contar con el criterio de recuperabilidad. Señalando claramente un porcentaje de probabilidad de recuperación con el objetivo de hacer el registro contable de la estimación.

El Lic. Lara Gamboa, es enfático en que de acuerdo con la ley ya todo está prescrito. La idea es que si de parte de la Junta es muy importante presentar el juicio para que sea un tribunal el que establezca si efectivamente está prescrito. De su parte si le corresponde a él presentar el juicio hará todo lo posible para ganar el juicio. Uno de los argumentos que va a utilizar es que la personería instrumental nació hace menos de un año, la prescripción debería comenzar a contarse a partir de dicho periodo, haciendo una analogía con las sucesiones, en las cuales si no hay albacea no se corre la prescripción. Si el juez toma como valido dicho argumento ve que existe una importante posibilidad de recuperar los intereses relacionaos al atraso en las cuotas obrero-patronales. Sin embargo, al no existir jurisprudencia y por el contrario se estaría haciendo jurisprudencia considera muy arriesgado indicar un porcentaje de éxito que se podría tener. En el caso de las retenciones lo ve aún más complicado, pues considera difícil crear la prueba, a diferencia del primer caso.

El Máster Mauricio Villalta, reitera la necesidad de contar con un número para efectos de los registros contables.

El Lic. Fernando Lara, señala que de acuerdo con la solicitud establecería la probabilidad entre 70/30 ó 80/20. Reitera que es imprescindible dividir los casos en tres: lo que es después de 2018 y hasta la actualidad para las retenciones del impuesto sobre la renta, primero por una gestión de cobro directa al Ministerio de Hacienda para documentar y hacer expediente para un eventual proceso en sede Contencioso Administrativo; en el caso del cobro de los intereses por aportes patronales pagados tardíamente se debe presentar a la mayor brevedad, en caso de considerar darle trámite, considerando que el argumento que se tiene que no hay prescripción se acaba al finalizar el año y finalmente en el caso del impuesto sobre la renta anterior al 2018 se tiene un poco más de tiempo para sentarse con la administración para analizar que prueba se puede recabar porque al Juez se debe probar el monto adeudado y tener el respaldo suficiente para la fundamentación, que esto es lo que considera más difícil y que se debe realizar una reunión para determinar la prueba y presentar eventualmente un juicio.

Interviene el Máster Mora Valdez, indicando que la explicación le parece muy clara y que concuerda con lo indicado por don Fernando en cuanto a que se debe efectuar en tres tractos, básicamente ahorita se debe decidir el tema del cobro por intereses por los atrasos en el pago de aportes, y que la Ley N°. 7733 era más clara y permitía tener más herramientas, se tiene como antecedente otro proceso de cobro al Banco Central que en su oportunidad se ganó por más de cien millones de colones por retención de impuesto sobre la renta. Adicionalmente comenta que por un nuevo reglamento publicado en el mes de mayo 2020, la Dirección General de Tributación establece que todos los entes exentos, especialmente los regímenes de Pensiones, se les estará renovando la certificación de exención de impuesto promoviendo una nueva resolución para este efecto, siendo que la DGT debía hacerlo de oficio por así decirlo explícitamente la norma publicada, dado que no se efectuó de esta manera; se le dio seguimiento a la gestión y la semana anterior se remitió los insumos al Ministerio de Hacienda y se está a la espera, en teoría en el mes de noviembre, se contaría con el documento final y los términos en los cuales se daría la exención, si se mantiene la negativa o se exonera los Fondos Inmobiliarios, haciendo un cambio de criterio.

La máster Romero Jenkins ratifica lo indicado por el señor Mora Valdez en cuanto al proceso en Sede Contenciosa Administrativa que la institución ganó, que las condiciones y las argumentaciones de este proceso son las mismas y que la única diferencia es que en esa ocasión se contó con la representación de la Procuraduría y que el Banco Central contaba con su representación; que para este caso la argumentación de la Procuraduría es que no podría representar a ambas partes, Ministerio de Hacienda y al FJPPJ cuando estaba en la sombrilla estricta del Poder Judicial.

Indica el Lic. Fernando Lara que mientras el Fondo sea un órgano del Poder Judicial no puede demandar a nadie, porque no tiene personería para eso, que dentro del gran Ente Central (Poder Ejecutivo, Legislativo, Judicial, Contraloría y Tribunal) no se pueden demandar entre sí, se podría discutir competencias pero no demandar; este caso que se comentó, Banco Central, el Estado está demandando a una entidad con su propia personería, nuestro caso actual sería al revés, nosotros tenemos personería y podemos demandar al Estado.

El señor Mora Valdez agradece a don Fernando Lara su presencia en esta sesión e indica que se pondrá en contacto con él una vez se tenga la decisión del caso, para definir el proceder.

El Lic. Fernando Lara Gamboa abandona la sesión al ser las 16:09 horas.

El máster Mauricio Villalta reitera al máster Mora Valdez la necesidad de contar con un número para efectos de establecer la estimación y los registros contables, que comprende la dificultad pero que es algo necesario.

El señor Velásquez Chávez indica que tiene la impresión que para el señor Lara Gamboa es muy difícil establecer el dato o porcentaje, considera que se podría a partir de lo indicado por don Fernando, que nosotros como Comité podamos inferir la probabilidad de recuperación.

El Máster Montero Zúñiga indica que con base en el informe escrito y con lo escuchado, él es pesimista con las demandas y le preocupa comprometer recursos adicionales, ya sea del Fondo o de la Junta, en un litigio en el que parece que lo único que generaría serian gastos. Adiciona que con el documento y el acta que se genere de esta sesión se puede confeccionar el asiento y establecer la probabilidad de 0 recuperación.

La Máster Ana Eugenia Romero coindice en lo manifestado por el señor Montero Zúñiga, indicando que le parece que la probabilidad de éxito de este proceso es muy baja; incluso pensando que exista una posibilidad de éxito, considerando la suma a recuperar y el rubro de honorarios una gran parte se iría en honorarios. En el caso de los intereses pareciese que no hay nada normativa contundente que nos respalde y en lo relativo al impuesto sobre la renta pese a que la administración anterior fue insistente en todas las gestiones para el reclamo, pero que el Ministerio de Hacienda finalmente aplicó un criterio de prescripción y en su momento la recomendación jurídica fue que se acudiera como instancia de coordinación entre instituciones que no dio resultado positivo y nos puso en una posición desventajosa ante un eventual litigio.

El Máster Mora Valdez hace la observación que en su momento cuando el abogado Lara Gamboa le indicó los costos de la tabla de honorarios del Colegio de Abogados le parecieron sumas exageradas y que hacían que el riesgo que se corre por un juicio de esta naturaleza es elevado por el monto que se pretende recuperar. Reitera que si se acuerda iniciar el proceso del juicio se tiene que entablar el proceso de creación de la prueba lo que puede involucrar contratar Contadores Públicos Autorizados para hacer las certificaciones y documentación del caso, rescataría lo que indica don Fernando en cuanto hacer el cobro administrativo sin ir a directamente juicio, de esta manera generar prueba. Le parece interesante el argumento del abogado que es hasta la creación de la Junta Administradora, que se juramenta y tiene personería propia que deben correr los plazos de prescripción, y por otro lado, que ha conversado con el señor Mauricio Arroyo, Tesorero Nacional, y que este último es tajante en su posición que nunca nos va a reconocer intereses y que Hacienda no tiene ni siquiera la línea presupuestaria para el pago de intereses.

La Licda. Ana Lucrecia Ruiz indica que hay tres temas a considerar muy importantes, el primero es la naturaleza jurídica de la Junta en este momento está en consulta de la Procuraduría General de la República sí dependemos o no del Poder Judicial, y quien asumiría los gastos por honorarios si eventualmente se decidiera interponer una demanda. El segundo las competencias o facultades de la personería jurídica instrumental ya que la Junta Administradora tenía duda en la sesión de hoy en la mañana, y se consideró adecuado elevarlo a criterio jurídico de la Institución para ver si eventualmente también era el Patrono Estado quien tenía que asumir ese costo o era propiamente la Junta, y también, número tres, en mi caso no estaría de acuerdo en contratar esos honorarios, ya que su cuantía es muy elevada, siendo incierto el monto o cifra a recuperar y el costo- beneficio no lo podemos cuantificar, no considero pertinente, evaluándolo desde el punto de vista costo-beneficio de todo el proceso.

El Máster Eddy Velásquez complementa desde el punto de vista financiero no le veo un beneficio neto para el Fondo encaminarse en este proceso legal, más que desgastarnos en tiempo y en dinero por ser una cifra importante. No sabe sí el abogado o la firma legal plantea honorarios con base en el porcentaje que logre recuperar.

El Máster Montero Zúñiga con el fin de aclarar trae a colación lo explicado por parte del abogado con la “Cuota-Litis” dónde si pierde cobra menos de lo indicado en la tabla del Colegio de Abogados, pero si gana cobra más de lo estipulado, el abogado no compartiría el riesgo con el Fondo. Cree que la primera discusión que se daría a nivel de Juzgado es sí hay prescripción o no, considera que el criterio de la conformación de la Junta Administradora en enero 2020 y que de ahí corre la prescripción es un poco débil, el Fondo lo ha administrado el Poder Judicial por setenta años, evidentemente lo primero que va a alegar Hacienda es la prescripción y pagar cien millones de colones solo por discutir la prescripción o no lo ve como despilfarrar los recursos de la Junta.

El Máster Mauricio Villalta señala que adicionalmente que el abogado es pesimista, aun así si perdemos nos van a condenar en costas legales y vamos a tener que pagar lo que le cuesta al Estado defenderse de nosotros, concuerda con el señor Velásquez que financieramente no tiene sentido seguir adelante con esto.

El Máster Carlos Montero Zúñiga indica que se podría votar el tema, que la decisión está en sí continuamos con el proceso o no:

 El señor Montero Zúñiga indica que no está de acuerdo en continuar con el proceso legal.

 El señor Velázquez Chávez indica que tampoco está de acuerdo.

 La señora Ruiz Rojas indica que no está de acuerdo.

 El señor Villalta Fallas vota en no continuar con el proceso.

Considerando:

o Que con base al criterio jurídico OL-FL-001-2020 de la firma Lara Gamboa & Asociados y a los supuestos establecidos en los artículos 38, 39, 40, 41 del Código Procesal Contencioso Administrativo siguientes y concordantes, relativos a la prescripción, existen muchas posibilidades que, se presenta algún reclamo judicialmente, el mismo ni siquiera sea conocido por el fondo, por lo que se considera un escenario muy pesimista sobre la posibilidad de recuperar los montos adeudados.

o Que según lo manifestado por el Lic. Fernando Lara Gamboa los honorarios establecidos por el Colegio de Abogados para procesos de esta naturaleza y cuantía se estima que ronda los cien millones de colones, con base en el monto adeudado (ochocientos millones de colones), se consideran excesivamente onerosos al representar cerca del 12.5% del monto por recuperar.

o Que dependiendo del resultado de la sentencia del proceso legal y que eventualmente se condene al pago de costas procesales al Fondo de Jubilaciones del Poder Judicial existe la probabilidad que el rubro por honorarios se duplique al tener que cubrir los gastos de representación del Estado, por lo que analizado en función de costo-beneficio, existe una alta probabilidad de incurrir en mayor cantidad de gastos para el Fondo.

o Que con la promulgación de la Ley N°. 9544, se modificó de manera importante el beneficio de exención de impuestos con el que contaba el FJPPJ en la ley anterior (N°. 7333), limitando dicha exención a los instrumentos referidos en los artículos 18 y 23 de la Ley N° 7092 Ley del Impuesto sobre la Renta (Art. 238 de LOPJ).

o Que a nivel del sector de pensiones costarricense, ninguna operadora de pensiones goza actualmente de exención del pago de impuesto del 5% sobre los dividendos que generen los fondos inmobiliarios, debido a lo cual esta posición reforzaría la negativa de reconocimiento por parte del Ministerio de Hacienda.

Se acuerda:

 Recomendar a la Junta Administradora desistir de continuar las acciones para establecer el proceso legal en sede judicial para la recuperación de los montos adeudados por intereses ante el atraso en el pago de aportes obreros, patronales y estatales en el periodo 2017-2018, así como los montos por concepto de recuperación de impuesto de la renta sobre participaciones en Fondos Inmobiliarios, ante el Ministerio de Hacienda.

 Recomendar a la Junta Administradora girar instrucciones al Proceso de Inversiones y al Subproceso Contable para que se deje de registrar a nivel de sistemas y auxiliares contables el monto de cuenta por cobrar por concepto de impuesto sobre la renta en títulos de participación en Fondos Inmobiliarios.

 Recomendar a la Junta Administradora girar instrucciones al Macroproceso Financiero Contable las acciones necesarias para reversar los montos correspondientes en las cuentas contables relacionadas con estas sumas por cobrar.

 Hacer de conocimiento de la Junta Administradora el presente acuerdo.

Acuerdo por unanimidad [x]

Acuerdo con disidencia []

No se aprueban []

Acuerdo 2.

El Lic. Fabián Salas Fernández informa sobre la gestión ante el Ministerio de Hacienda para la negociación de un canje de valores no estandarizados con este emisor indicando que la señora Olga Rodriguez Serrano en llamada telefónica del viernes 16 de octubre 2020 el Ministerio tenía problemas presupuestarios por unos decretos publicados y por asuntos con Caja Única para realizar esta operación.

Resalta que la Unidad de Gestión de Portafolios del Proceso de Inversiones realizó varios escenarios para esta negociación, no obstante, en correo electrónico de fecha 19 de octubre de 2020 se trasladó la postura oficial por parte del Ministerio de Hacienda, a continuación, el detalle:

“[…]Tal como se lo comenté por teléfono el viernes, es materialmente imposible realizar la redención anticipada de este título por los siguientes motivos:

- En el ámbito presupuestario se consultó por contenido presupuestario para este tipo de gestiones por parte de la TN y a la fecha el monto es muy limitado por lo que no es factible la aplicación de la redención para el periodo 2020.

- Otro factor que se debe considerar es que si se hubiese sido factible el precio por el cual se negociaría sería igual al emitido para el canje, el cual es de 95...” El resaltado no es del original.

Por lo que, con base en este correo se informa al Comité de Inversiones que por lo que resta del año 2020 no se podrá efectuar gestión de canje de los instrumentos no estandarizados y reportados ante la Superintendencia de Pensiones como “Instrumentos no autorizados” e informados mediante el oficio N° 759-2020 de la Junta Administradora de Pensiones como parte del “Plan de Reducción de Riesgos” en respuesta al oficio SP-A-208-2019, por lo que la porción de instrumentos clasificados en ese segmento se mantendrá una vez concluido el periodo transitorio para la entrada en vigencia del Reglamento de Gestión de Activos de CONASSIF, sea esta el 2 de noviembre de 2020.

Se acuerda:

 Tomar nota de lo indicado por el Proceso de Inversiones.

Acuerdo por unanimidad [x]

Acuerdo con disidencia []

No se aprueban []

FIN DE SESIÓN

Se levanta la sesión al ser las 16:44 horas del 19 de octubre de 2020.

(…).”

-0-

En sesión N°. 32-2020 artículo N°. III, se tuvo por conocido el oficio N° 3402-DE-2020 del 25 de setiembre del 2020, suscrito por la máster Ana Eugenia Romero Jenkins, Directora Ejecutiva, mediante el que remitió criterio jurídico N° DJ-C-626-2020 suscrito por la máster Argili Gómez Siu, Sud Directora Jurídica, referente a la no devolución de impuestos en inversiones en Fondos Inmobiliarios y que fuera solicitado por esa Dirección con oficio 317-DE-2019 y del cual se recibió su respuesta hasta este momento y se trasladó ese criterio de la Dirección Jurídica al Macroproceso Financiero Contable para lo que correspondiera y al licenciado Fernando Lara Gamboa, asesor jurídico contratado para el trámite de posible demanda al Ministerio de Hacienda, para que lo considerara dentro del proceso.

Luego, en sesión número 29-2020, artículo VI, se tuvo por rendido el criterio jurídico N° OL-FL-001-2020 elaborado por el licenciado Fernando Lara Gamboa, Abogado y se comisionó al máster Miguel Ovares Chavarría, para que contratara a una firma jurídica externa a fin de interponer la demanda respectiva contra el Ministerio de Hacienda por las retenciones de Impuesto sobre la renta, pago de premios e intereses moratorios por inversión en títulos valores de dineros del Fondo de Jubilaciones y Pensiones del Poder Judicial. Asimismo, se solicitó al Departamento Financiero Contable que dejara de incluir como parte de los ingresos el tema de los impuestos y que cuantificara al 31 de agosto de 2020, el monto completo de esos rubros y los identificara, a fin de ser considerados como parte de los insumos a valorar por parte del Comité de Inversiones y se hizo ese acuerdo de conocimiento del Comité de Inversiones para que valorara si era necesario reversar el asiento contable por ingresos o indicara el tratamiento necesario a realizar. Por otra parte se comisionó al máster Oslean Mora Valdez, para que contactara con los asesores externos y de ser necesario los contratara para que acompañaran la sesión extraordinaria del Comité de Inversiones que conocería del tema.

- 0 -

El integrante Arnoldo Hernández Solano toma la palabra e indica que lamenta que el Consejo Superior, en el momento oportuno no haya realizado las acciones correspondientes para recuperar los montos adeudados por intereses ante el atraso en el pago de aportes obreros, patronales y estatales en el periodo 2017-2018.

- 0 -

**Se acordó por unanimidad: 1)** Tomar nota del acta del Comité de Inversiones N°. 092-CI-2020 y acoger sus recomendaciones técnicas en lo relacionado a la cuenta por cobrar al Ministerio de Hacienda. **2.)** Tomar nota del acuerdo tomado por el Consejo Superior en sesión 19-19, artículo XIX, en cuanto a acoger el criterio jurídico N°. DJ-528-19 de 20 de febrero de 2019 con el fin de estar a la espera de la conformación de la Junta Administradora para la valoración de las acciones a tomar en cuanto a la gestión de cobro al Ministerio de Hacienda, así como el acuerdo tomado en sesión N° 60-2020, artículo XXIV en el cual se acoge el criterio jurídico N°. DJ-C-327-2020 del 10 de junio de 2020 en cuanto al traslado de competencias a la Junta Administradora del FJPPJ para definir sobre este tema. **3.)** Conviene resaltar el criterio jurídico N° DJ-C-626-2020 suscrito por la máster Argili Gómez Siu, Sub Directora Jurídica del Poder Judicial, así como el criterio jurídico N° OL-FL-001-2020 elaborado por el licenciado Fernando Lara Gamboa, Abogado externo en los cuales se analizan desde la óptica jurídica la gestión de cobro por la retención del impuesto sobre la renta de instrumentos tipo fondos inmobiliarios desde el 2017 a la fecha, los impuestos sobre la renta de instrumentos financieros de los periodos 2004-2005 y de los intereses dejados de percibir por el retraso en el pago de aportes obrero, patronales y estatales de los periodos 2017-2018. **4.)** Tomar nota de las consideraciones emanadas por el Lic. Lara Gamboa en reunión acontecida con el Comité de Inversiones en cuanto a el escenario pesimista ante una eventual judicialización del proceso, la cuantía de los honorarios de un eventual proceso de demanda, el tiempo transcurrido desde la situación que da origen a cada caso y el eventual cobro de las costas del proceso por parte de la demandada. **5.)** Tomar nota de la resolución N°. ATSJO-GER-SSC-RES-2283-2020 del 26 de Octubre del 2020 mediante la cual la Administración Tributaria de San José Oeste otorga únicamente exoneración indefinida del impuesto sobre las rentas de capital mobiliario en rendimientos generados en inversiones en instrumentos financieros, es decir manteniendo su posición sobre no exonerar al FJPPJ en los dividendos recibidos por participaciones de fondos inmobiliarios. **6.)** Autorizar al Macroproceso Financiero Contable para que ejecute la rectificación contable necesaria para reversar los montos de las cuentas y registros relacionados con estas sumas por cobrar al Ministerio de Hacienda. **7.)** Dejar sin efecto el acuerdo tomado en sesión 29-2020, artículo IV, en cuanto a la contratación del Lic. Lara Gamboa para interponer demanda contra el Ministerio de Hacienda por los rubros aquí evaluados y en consecuencia, dejar sin efecto el proceso de demanda solicitado. **Se declara acuerdo firme.**

## ARTÍCULO VIII

**Documento N° 1112-2020**

El MPM. Oslean Mora Valdez, Encargado de Apoyo Administrativo de esta Junta Administradora del Fondo de Jubilaciones y Pensiones del Poder Judicial, en correo electrónico de 2 de noviembre de 2020, remitió el informe de tablas de invalidez, realizado por el Actuario, Raúl Hernández González, seguidamente se adjunta el contenido del informe supra:



- 0 -

**Se acordó por unanimidad: 1.)** Tomar nota del informe referente a las tablas de invalidez, realizado por el Actuario, Raúl Hernández González. **2.)** Acoger la tabla “b” de invalidez indicada para la realización del estudio actuarial para el periodo 2020, conforme a la hoja de ruta definida para el citado estudio. **3.)** Comunicar el presente acuerdo a la Superintendencia de Pensión a efecto de la supervisión que realiza al Fondo de Jubilaciones y Pensiones del Poder Judicial.

## ARTÍCULO IX

**Documento N° 1016-20**

El Consejo Superior, en sesión n° 36-16 celebrada el 14 de abril de 2016, artículo LXXVIII, dispuso que de conformidad con lo establecido en el artículo 232 de la Ley Orgánica del Poder Judicial y las conclusiones del dictamen médico legal, aprobar la solicitud de pensión que formula la señora Lilliana Rojas Mora, cónyuge sobreviviente del jubilado judicial fallecido Ramón Piedra Chavarría y distribuir el 100% de la jubilación que recibía el jubilado judicial fallecido de tal manera que a la señora Rojas Mora le corresponde el 70% y al joven Eduardo Piedra Rojas el 30%, lo anterior a partir del 27 de enero de 2016. Debe el joven Eduardo Piedra Rojas al cumplir la mayoría de edad presentarse a valoración médica por parte del Consejo Médico Forense a efecto de determinar si mantiene alguna limitación que le impida laborar.

En la sesión N° 30-2020 celebrada el 7 de setiembre del 2020, artículo VI, se tuvo por rendido el oficio N° 7536-2020, emitido por la Secretaría General de la Corte, mediante el cual hace de conocimiento de esta Junta Administradora el criterio de la Dirección Jurídica N° DJ-C-443-2020, relacionado con el informe N° 506-18-SAFJP-2018, correspondiente al estudio denominado “Evaluación sobre el costo de vida del segundo semestre del 2017.” Previo a definir lo que corresponda, solicitar a la Dirección de Gestión Humana que, en el plazo de un mes a partir del comunicado del presente acuerdo, remita a esta Junta Administradora un informe técnico indicando si el aumento del segundo semestre de 2017 se aplicó conforme al criterio emitido por la Dirección Jurídica, en caso de ser así, se debería realizar una valoración para determinar si existen a la fecha sumas pagadas en demasía.

- 0 -

La licenciada Olga Guerrero Córdoba, el licenciado Carlos Lizano Alfaro y la licenciada Leda Córdoba Montero, por su orden, Subdirectora interina, Jefe interino de Administración de Personal y Coordinadora de la Unidad de Jubilaciones y Pensiones, todos de la Dirección de Gestión Humana, en oficio N° PJ-DGH-AP-4024-2020 de 16 de octubre de 2020, informaron:

“La Junta Administradora del Fondo de Jubilaciones y Pensiones del Poder Judicial en sesión número 30-2020 celebrada el 07 de setiembre de 2020, en el artículo XI dispuso lo siguiente:

“…**2.)** Previo a definir lo que corresponda, solicitar a la Dirección de Gestión Humana que, en el plazo de un mes a partir del comunicado del presente acuerdo, remita a esta Junta Administradora un informe técnico indicando si el aumento del segundo semestre de 2017 se aplicó conforme al criterio emitido por la Dirección Jurídica, en caso de ser así, se deberá realizar una valoración para determinar si existen a la fecha sumas pagadas en demasía. **3.)** La Dirección de Gestión Humana y el Departamento Financiero Contable, tomarán nota para los fines correspondientes…”

En virtud del acuerdo tomado, se le informa a la Junta Administradora del Fondo, que el incremento por costo de vida del II semestre 2017, **se ejecutó conforme al criterio emitido por la Dirección Jurídica**.

En aras de ilustrar lo anterior, se expone como ejemplo el caso del jubilado judicial fallecido Ramón Piedra Chavarría, quien registra como beneficiarios a su esposa la señora Lilliana Rojas Mora e hijo con discapacidad Eduardo Piedra Rojas. Al respecto, el Consejo Superior en sesión N° 36-16 celebrada el 14 de abrilde 2016acordó:

*“…distribuir el 100% de la jubilación que recibía el jubilado judicial fallecido de tal manera que a la señora Rojas Mora le corresponderá el 70% y al joven Eduardo Piedra Chavarría el 30%, lo anterior a partir del 27 de enero de 2016…”*

El monto de jubilación que recibía don Ramón Piedra Chavarría al momento de su fallecimiento ascendía a ¢1,044,895.84 (Un millón cuarenta y cuatro mil ochocientos noventa y cinco colones con 84/100), monto que debía ser distribuido según los porcentajes indicados por el órgano superior.

Así las cosas, al menor Eduardo Piedra Rojas le correspondió un 30% del 100% del monto antes mencionado. Al primer semestre del 2017 ese monto era de ¢315,972.02 (trescientos quince mil novecientos setenta y dos colones con 02/100), mientras que la señora Liliana Patricia Rojas Mora percibía un 70% del monto de jubilación de su cónyuge, equivalente a ¢737,268.06 (setecientos treinta y siete mil doscientos sesenta y ocho colones con 06/100).

Partiendo de la distribución indicada en el párrafo anterior, se totalizaron los montos para la aplicación del costo de vida del II semestre de 2017 según lo dispuesto por Corte Plena en sesión N° 29-17, artículo XV, en donde se aprobó que el aumento del periodo precitado sería de 0.75% para las personas jubiladas y pensionadas asociadas a los cargos profesionales y 1.01% para los puestos de la clase no profesional, cuya asignación mensual es menor a la clase Jefe Administrativo 1 para el segundo semestre 2017, establecido en ¢634,600.00. Para el caso descrito, la asignación mensual del causante superaba el salario del cargo Jefe Administrativo 1, por lo que correspondía aplicar un 0,75% de incremento a los beneficios.

En el caso de doña Lilliana se tomó el monto de beneficio que tenía al 30 de junio de 2017 ¢737,268,06 y se multiplicó por el porcentaje de aumento (0,75%), lo que le generó un nuevo monto de beneficio de ¢742,797.57. Este mismo procedimiento se realiza para determinar el nuevo monto de beneficio del joven Eduardo Piedra Rojas.

Finalmente, se le informa a la Junta Administradora del Fondo, que la verificación del incremento por costo de vida estableció que los beneficios de jubilación y pensión se reajustaron conforme a lo dispuesto por Corte Plena, sin generar sumas pagadas de más en el proceso.

De esta forma, se rinde el informe solicitado por el órgano colegiado para su conocimiento

Con toda consideración,”

- 0 -

**Se acordó por unanimidad:** Tener por rendido el oficio N° PJ-DGH-AP-4024-2020 de 16 de octubre de 2020, suscrito por la licenciada Olga Guerrero Córdoba, el licenciado Carlos Lizano Alfaro y la licenciada Leda Córdoba Montero, por su orden, Subdirectora interina, Jefe interino de Administración de Personal y Coordinadora de la Unidad de Jubilaciones y Pensiones, todos de la Dirección de Gestión Humana, mediante el que remiten el informe solicitado por esta Junta Administradora en sesión N° 30-2020 celebrada el 07 de setiembre de 2020, en el artículo XI y en el que se destaca que el incremento por costo de vida del II semestre 2017, se ejecutó conforme al criterio emitido por la Dirección Jurídica, para lo cual se ilustra con un ejemplo. **Se declara cuerdo firme**.

## ARTÍCULO X

**Documento N° 932-2020 / 1070-2020.**

En sesión N° 35-2020 celebrada el 26 de octubre del 2020, artículo XII, en razón de lo indicado, en esa oportunidad, por el licenciado Ronald Nicolás Alvarado, Juez Coordinador del Tribunal de Puntarenas, en correo electrónico de 12 de octubre de 2020, referente a la fecha de rige su jubilación, se trasladó a la Dirección de Gestión Humana la gestión indicada en ese momento, para que tomara nota de que la fecha en que el licenciado Nicolás Alvarado, se estaría acogiendo a su jubilación era a partir del 19 de diciembre del 2020.

- 0 -

En correo electrónico del 4 de noviembre de 2020, el licenciado Ronald G. Nicolás Alvarado, Juez Coordinador del Tribunal de Juicio de Puntarenas, remitió la siguiente gestión:

“De manera expresa solicito se revoque el Acuerdo tomado por la Junta Administradora del Fondo de Jubilaciones y Pensiones del Poder Judicial, en la sesión **N° 35-2020** celebrada el**26 de octubre del 2020**que "Trasladar a la Dirección de Gestión Humana la gestión supra, para que tome nota de que la fecha en que el licenciado Nicolás Alvarado, se estará acogiendo a su jubilación es a partir del 19 de diciembre del 2020.**2.)**Hacer este acuerdo de conocimiento del gestionante del Consejo Superior y Consejo de la Judicatura. **Se declara acuerdo firme**.” Por cuanto el suscrito mediante correo remitido a ésta Junta en data 27 de octubre último indiqué "Es mi expreso deseo dejar sin efecto -por de pronto-acogerme a mi jubilación tal y como se había solicitado en su momento. He decidido continuar un tiempo en el Poder Judicial máxime cuando el día de ayer en Corte Plena tuve escogido como candidato a ocupar una Suplencia en la conspicua Sala de Casación Penal. Lo único que sí solicito entonces a ésta honorable Junta es que sea declarado mi derecho a la jubilación pero, repito, mi solicitud de retiro la dejó sin efecto."

Consecuente con lo expuesto, solicito se revoque el acuerdo tomado por la Junta Administradora del Fondo de Jubilaciones y Pensiones del Poder Judicial, en la sesión **N° 35-2020**celebrada el **26 de octubre del 2020.-**

(…).”

-0-

Asimismo, se transcribe el correo electrónico de fecha 4 de noviembre de 2020, suscrito por la licenciada Gabriela Jarquín Valladares, Profesional 1 de la Administración de Personal de la Unidad de Jubilaciones y Pensiones, dirigido al licenciado Ronald G. Nicolás Alvarado, en su citado carácter, que dice:

“Me permito indicarle que se toma nota de su solicitud y se deja sin efecto su solicitud de jubilación al 19/12/2020, no omito indicar que usted ya cuenta con una fijación de derecho desde el 21/12/2018, por lo cual ya solamente quedaría que usted nos indique su nueva fecha de derecho. Recordando que deberá realizar la solicitud 2 meses antes.

(…).”

-0-

**Se acordó por unanimidad: 1)** Tomar nota del correo electrónico del 4 de noviembre de 2020, del licenciado Ronald G. Nicolás Alvarado, Juez Coordinador del Tribunal de Juicio de Puntarenas en que solicita dejar sin efecto la fecha en la cual decide acogerse al beneficio de jubilación, así como del correo de la misma fecha de la licenciada Gabriela Jarquín Valladares, Profesional 1 de la Administración de Personal de la Unidad de Jubilaciones y Pensiones, en la que toman nota de la decisión de dejar sin efecto la fecha de retiro, así como de que la fijación del derecho se encuentra desde el 21 de diciembre de 2018. **2)** Hacer este acuerdo de conocimiento de la Dirección de Gestión Humana y del Macroproceso Financiero Contable, para lo de su cargo. **3)** Comunicar este acuerdo al Consejo Superior y al Consejo de la Judicatura. **Se declara acuerdo firme.**

## ARTÍCULO XI

**Documento N° 1050-20**

El máster Miguel Ovares Chavarría, la máster Floribel Campos Solano y la máster Andrea Valerín Arroyo, por su orden, Jefe de Macroproceso Financiero Contable, Jefa Proceso de Tesorería y Jefa del Subproceso Egresos, en oficio N° 1448-TE-2020 de 27 de octubre de 2020, remitieron lo siguiente:

“Para su estimable conocimiento, en lo relacionado con el beneficio de pensión del joven Rush Arrieta Garita, número de cédula [Valor], en forma atenta se indica:

* Que el 27 de septiembre de 2020 el padre del pensionado estudiante Arrieta Garita cumpliendo con las fechas establecidas para la presentación de documentos de estudio, remitió a esta oficina vía correo electrónico la información de la matrícula del III cuatrimestre de 2020. En respuesta, se le indicó que se debía presentar además la evaluación del II cuatrimestre de 2020, la cual envió el 11 de octubre de 2020.
* Que esta oficina una vez verificado el documento correspondiente al comprobante de notas del II cuatrimestre de 2020, determina que de las cuatro materias cursadas en dicho período una fue reprobada.
* Que el Reglamento General del Régimen de Jubilaciones y Pensiones del Poder Judicial aprobado por la Junta Administradora, en el artículo N° 26, para lo que interesa señala:

*“[…] deberán las personas gestionantes demostrar que se encuentran matriculadas en un centro de estudios y que obtienen buenos rendimientos en las materias cursadas, para lo cual la Junta Administradora del Fondo requerirá la información que considere oportuna, encontrándose en la obligación la persona beneficiada de proveerla dentro del plazo razonable estimado por la Junta, bajo la advertencia de la suspensión del beneficio de pensión.*

*En el supuesto de que la persona estudiante no apruebe las materias o cursos matriculados, la Junta Administradora podrá suspender el beneficio, en aras de mantener un buen uso de los recursos del Fondo de Jubilaciones y Pensiones, de conformidad con el principio pro-fondo.”* (subrayado no es del original)

* Que lo anterior dejaría sin efecto el criterio vertido por la Dirección Jurídica en el oficio N° DJ-AJ-3787-2018, el cual para lo que interesa señala:

*“[…] se concluye que a partir de la entrada en vigencia de la reforma, es decir, del 22 de mayo del 2018 (fecha de la publicación), en el caso de las hijas y los hijos mayores de 18 y menores de 25 años que realizan estudios,* ***no se puede exigir como requisito para el pago de la pensión por orfandad, que las personas obtengan buenos rendimientos.*** *De manera que, únicamente deberá acreditarse la edad y las constancias de que se encuentran matriculados realizando estudios reconocidos por el Ministerio de Educación Pública (MEP), el Instituto Nacional de Aprendizaje (INA), u otras instituciones a criterio de la Junta Administradora.”*

* Que el monto bruto del beneficio de pensión mensual que recibe el joven Rush Arrieta Garita es por la suma de ¢164.598,46 (¢82.299,23 por quincena).

Por lo antes expuesto, se traslada la presente comunicación a la Junta Administradora del Fondo de Jubilaciones y Pensiones del Poder Judicial, con el fin de que si a bien lo estima, se indique si se debe suspender el beneficio de pensión del joven Arrieta Garita y a partir de qué fecha, en virtud de que reprobó una de las cuatro materias matriculadas en el II cuatrimestre de 2020.”

- 0 -

**Se acordó por unanimidad: 1)** Tener por conocido el oficio N° 1448-TE-2020 del 27 de octubre de 2020, suscrito por los másteres Miguel Ovares Chavarría, Floribel Campos Solano y Andrea Valerín Arroyo, por su orden, Jefe del Macroproceso Financiero Contable, Jefa del Proceso de Tesorería y Jefa de Subproceso de Egresos, referente a la situación del pensionado estudiante Rush Arrieta Garita. **2)** Hacer de conocimiento del Macroproceso Financiero Contable que en razón que el pensionado estudiante aprobó tres de las cuatro materias matriculadas, esta Junta Administradora acuerda mantener el beneficio de pensión al señor Arrieta Garita. **3)** Hacer una instancia al joven Arrieta Garita para que se mantenga estudiando y obtenga buenos rendimientos, para lo cual se dará el seguimiento respectivo, con fundamento en el artículo 29 del Reglamento General del Régimen de Jubilaciones y Pensiones, que indica: *“…. de conformidad con la potestad otorgada a la Junta en el inciso f) del artículo 242 de la reforma a la Ley Orgánica del Poder Judicial, que permite a la Junta, solicitar todos los otros elementos que se consideren necesarios para la correcta administración del Fondo, deberán las personas gestionantes demostrar que se encuentran matriculadas en alguno de los centros de estudios autorizados por el numeral 228 de la ley referida y que han de obtener el puntaje mínimo para la aprobación de las materias cursadas, para lo cual la Junta Administradora del Fondo requerirá la información que considere oportuna, encontrándose en la obligación la persona beneficiada de proveerla dentro del plazo razonable estimado por la Junta, bajo la advertencia de la suspensión del beneficio de pensión. En el supuesto de que la persona estudiante no apruebe las materias o cursos matriculados, la Junta Administradora podrá suspender el beneficio para lo cual establecerá un procedimiento de ajuste al beneficio de pensión otorgado, en aras de mantener un buen uso de los recursos del Fondo de Jubilaciones y Pensiones, de conformidad con el principio profondo”.* **Se declara acuerdo firme***.*

## ARTÍCULO XII

**Documento N° 243-20 / 1054-20**

El máster Miguel Ovares Chavarría, la máster Floribel Campos Solano y la máster Andrea Valerín Arroyo, por su orden, Jefe de Macroproceso Financiero Contable, Jefa Proceso de Tesorería y Jefa del Subproceso Egresos, en oficio N° 1475-TE-2020 de 29 de octubre de 2020, remitieron lo siguiente:

“Para su estimable conocimiento, en lo relacionado con el beneficio de pensión de la joven Paula Calvo Rojas, número de cédula [Valor], en forma atenta se indica:

* Que en acuerdo del Consejo Superior sesión N° 69-13 celebrada el 09 de julio de 2013, artículo LIII se resuelve aprobar la solicitud de pensión a favor de la joven Paula Calvo Rojas, a partir del 12 de mayo de 2013.
* Que el 28 de septiembre de 2020 y el 09 de octubre de 2020, esta oficina le recordó a la pensionada estudiante la fecha límite de presentación de documentos de estudio (15/10/2020), a la dirección de correo registrada en el SIGA-FJP.
* Que a la fecha de registro de movimientos pertinentes a la generación de la planilla de la segunda quincena de octubre de 2020 (22/10/2020), la joven Calvo Rojas no presentó los documentos respectivos, por lo que, se efectuó la suspensión del beneficio de pensión a partir del 16 de octubre de 2020 en cumplimiento a lo estipulado en la normativa. Lo anterior, se comunicó a la pensionada el 22 de octubre de 2020 vía correo electrónico.
* Que el 23 de octubre de 2020 la pensionada estudiante remitió la matrícula correspondiente a los exámenes del Ministerio de Educación Pública, para la convocatoria del III Ciclo de E.G.B.A. en la fase B 2020 a realizarse en el mes de diciembre 2020 (momento para el cual ya la planilla se encontraba generada). Esta Unidad en respuesta brindó el recibido de la documentación y además le reiteró a la joven Paula Calvo que el beneficio fue suspendido y que debía gestionar la solicitud de reactivación, si a bien lo estimaba.
* Que mediante nota de fecha 27 de octubre de 2020 enviada vía correo electrónico al Macroproceso Financiero Contable el 28 de octubre de 2020, la pensionada estudiante Calvo Rojas solicita la reactivación del beneficio (se adjunta nota).
* Que el monto bruto del beneficio de pensión mensual que recibía la joven Calvo Rojas era por la suma de ¢143.488,79 (¢71.744,40 por quincena).

Por lo antes expuesto, se traslada la presente comunicación a la Junta Administradora del Fondo de Jubilaciones y Pensiones del Poder Judicial, con el fin de que se determine si procede reactivar el beneficio de pensión y a partir de qué fecha.”

(Documento)

- 0 -

En sesión N° 69-13 celebrada el 9 de julio de 2013, artículo LIII, se aprobó parcialmente el informe rendido por el Departamento de Personal y de conformidad con lo que establece el artículo 232 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, párrafo 6°, acogió la solicitud de pensión que formularon las jóvenes Kimberly Mariana y Paula Daniela ambas Calvo Rojas, y se otorgó dos terceras partes equivalente a un 33.33% para cada una de las beneficiarias, (…).

Posteriormente, en sesión 94-19 del 29 de octubre de 2019, artículo X, se suspendió el beneficio de pensión a la joven Paula Calvo Rojas, a partir de la primera quincena de octubre de 2019 y hasta tanto demuestre ante el Departamento Financiero Contable en documento idóneo, que se encuentre realizando estudios reconocidos conforme lo cita el numeral señalado. Una vez que se compruebe esta situación se dispondrá el giro de la pensión correspondiente.

Finalmente, en la sesión N° 11-2020 celebrada el 13 de abril del 2020, artículo VI, se tuvo por rendido el informe relacionado con el beneficio de pensión de la señora Paula Calvo Rojas y de conformidad con los documentos presentados, se reactivó el beneficio de pensión a partir del 18 de marzo de 2020, momento en cumplió con la información requerida. En ese momento, se hizo este acuerdo de conocimiento de la pensionada y del Departamento Financiero Contable para la reactivación del beneficio.

- 0 -

**Se acordó por unanimidad: 1)** Tener por conocido el oficio N° 1475-TE-2020 del 29 de octubre de 2020, suscrito por los másteres Miguel Ovares Chavarría, Floribel Campos Solano y Andrea Valerín Arroyo, por su orden, Jefe del Macroproceso Financiero Contable, Jefa del Proceso de Tesorería y Jefa de Subproceso de Egresos, referente a la situación de la pensionada estudiante Paula Calvo Rojas. **2)** Hacer de conocimiento del Macroproceso Financiero Contable que en razón que la pensionada estudiante presentó la matrícula de sus estudios, esta Junta Administradora acuerda reactivar el beneficio de pensión a la señora Calvo Rojas a partir del 23 de octubre de 2020, fecha en que acreditó ante la oficina respectiva mantenerse estudiando. **3)** Hacer una instancia a la joven Calvo Rojas para que se mantenga estudiando y obtenga buenos rendimientos, para lo cual se dará el seguimiento respectivo, con fundamento en el artículo 29 del Reglamento General del Régimen de Jubilaciones y Pensiones, que indica: *“…. de conformidad con la potestad otorgada a la Junta en el inciso f) del artículo 242 de la reforma a la Ley Orgánica del Poder Judicial, que permite a la Junta, solicitar todos los otros elementos que se consideren necesarios para la correcta administración del Fondo, deberán las personas gestionantes demostrar que se encuentran matriculadas en alguno de los centros de estudios autorizados por el numeral 228 de la ley referida y que han de obtener el puntaje mínimo para la aprobación de las materias cursadas, para lo cual la Junta Administradora del Fondo requerirá la información que considere oportuna, encontrándose en la obligación la persona beneficiada de proveerla dentro del plazo razonable estimado por la Junta, bajo la advertencia de la suspensión del beneficio de pensión. En el supuesto de que la persona estudiante no apruebe las materias o cursos matriculados, la Junta Administradora podrá suspender el beneficio para lo cual establecerá un procedimiento de ajuste al beneficio de pensión otorgado, en aras de mantener un buen uso de los recursos del Fondo de Jubilaciones y Pensiones, de conformidad con el principio profondo”.* **Se declara acuerdo firme**.

**ENTRA A LA SESIÓN EL INTEGRANTE MAURICIO VILLALTA FALLAS.**

**ARTÍCULO XIII**

**Documento N° 886-20 / 1040-20.**

En sesión 34-2020, celebrada el 19 de octubre del 2020, artículo V, se tomó el acuerdo cuya parte dispositiva indica literalmente lo siguiente:

**Por unanimidad se acordó: 1.)** Tener por conocido el oficio N° 682-FC-2020 del 6 de octubre de 2020, suscrito por los másteres Miguel Ovares Chavarría y José Andrés Lizano Vargas y por el licenciado Fabián Salas Fernández, por su orden, Jefe interino del Macroproceso Financiero Contable, Jefe de Proceso de Riesgos y Jefe interino del Proceso de Inversiones, mediante el cual resaltan los artículos y puntos, que deben ser analizados y atendidos por la Junta Administradora, de lo cual se toma nota y se estará revisando con la Dirección de Tecnología de la Información para establecer los mecanismos necesarios para dar cumplimiento a los requerimientos de la Superintendencia de Pensiones. **2.)** Tomar nota por parte de las Secretarías de los Comités de Inversiones y Riesgos, así como la Comisión de Gobierno Corporativo para que se cumpla con los plazos establecidos en el SP-A-228-2020. **Se declara acuerdo firme.”**

- 0 -

En atención del acuerdo de la Junta Administradora de sesión 34-2020 artículo V, del 19 de octubre del 2020, el máster Oslean Mora Valdez, encargado de apoyo administrativo de la Junta Administradora del Fondo de Jubilaciones y Pensiones, mediante correo electrónico de 10 de octubre de 2020 remite la siguiente matriz considerando las observaciones y recomendaciones para atender los requerimientos solicitados por la Superintendencia de Pensiones:





- 0 -

La integrante Lucrecia Ruiz Rojas, manifiesta que le preocupa los tiempos de elaboración de las actas de la Junta Administradora, tomando en consideración las cargas de trabajo que tienen los prosecretarios de la Secretaría General de la Corte, en el sentido de que la Superintendencia de Pensiones solicita cargarlas en el sistema en un tiempo determinado y esa Secretaría deberá amoldarse a esos plazos.

- 0 -

**Se acordó por unanimidad: 1)** Tomar nota del correo electrónico remitido por el Máster Oslean Mora Valdez, encargado de apoyo administrativo de la Junta Administradora mediante correo electrónico de 10 de octubre de 2020, en el que remite la matriz con las observaciones y recomendaciones del Macroproceso Financiero Contable. **2.)** Acoger las recomendaciones indicadas, con el fin de atender los requerimientos solicitados por la Superintendencia de Pensiones en el SP-A-228-2020. **3.)** Reiterar a la Dirección de Tecnología de la Información la solicitud de colaboración en cuanto a la elaboración del equipo de trabajo, realización de las pruebas de seguridad, entre las otras actividades relacionadas con las actas de esta Junta Administradora. **4.)** Hacer de conocimiento de la Secretaría General de la Corte las manifestaciones realizadas por la integrante Ruiz Rojas. **5.)** Hacer el presente acuerdo de conocimiento del doctor Gary Amador Badilla, integrante del Consejo Superior, en condición de integrante de la Comisión de Traspaso del Fondo de Jubilaciones y Pensiones del Poder Judicial.

## ARTÍCULO XIV

**Documento N° 1019-20**

El señor Rodrigo Arias López, en correo electrónico de 22 de octubre de 2020, solicitó lo siguiente:

“Estimadas señoras y señores miembros de la Junta Administradora del Fondo de Jubilaciones y Pensiones del Poder Judicial.

Muy respetuosamente los saludo y le solicito a esa Junta, de conformidad con los artículos 27 y 30 de la Constitución Política de la República de Costa Rica, la información de la planilla más reciente de pensionados y trabajadores activos cotizantes del **Fondo de Pensiones y Jubilaciones del Poder Judicial,** específicamente la siguiente información, en un archivo de formato Excel:

1. **Planilla de pensionados:** Código identificador del pensionado(a), fecha de nacimiento del pensionado(a), sexo del pensionado(a), fecha de vigencia de la pensión, riesgo por el cual se pensionó (Invalidez, ordinaria, cónyuge, hijos, otra), monto de la pensión mensual del pensionado(a) en la fecha de vigencia, monto de la pensión mensual del pensionado(a) en la fecha de pago de la planilla, número de cuotas mensuales cotizadas al Fondo, monto de la base de referencia o salario promedio de referencia usado para calcular el monto de la pensión.
2. **Planilla de trabajadores cotizantes:** Código identificador del trabajador(a), fecha de nacimiento del trabajador(a), sexo del trabajador(a), monto de salario mensual del trabajador(a) en la fecha de la planilla, fecha de primera cuota cotizada al Fondo, número de cuotas mensuales cotizadas al Fondo.

Solicito respetuosamente que ambas planillas correspondan al mismo mes y año e indicar la fecha. Adjunto archivo Excel como plantilla.

Favor enviarme la información y cualquier asunto relacionado al correo [rariaslopez@gmail.com](mailto:rariaslopez@gmail.com)”



- 0 -

**Se acordó: 1)** Tener por recibida la gestión del señor Rodrigo Arias López, en correo electrónico de 22 de octubre de 2020, mediante la que solicita información relacionada con las jubilaciones y pensiones de la planilla más reciente. **2)** Rechazar la solicitud presentada por el señor Arias López, con fundamento a que la Ley de Protección de la Persona frente al tratamiento de sus datos personales, no obstante, se le indica que la información que se puede otorgar es el monto bruto y deducciones de ley que se aplican a los beneficios de jubilación y/o pensión, pero sin identificar a que persona corresponde, por cuanto para obtener los datos solicitados deberá el gestionante contar con la autorización expresa de las personas interesadas.

## ARTÍCULO XV

**Documento N° 758-20 / 1021-20 / 1049-2020**

En la sesión N° 30-2020 celebrada el 07 de setiembre del 2020, artículo XIV, se tomó el acuerdo que literalmente dice:

“En sesión N° 26-2020, celebrada el 3 de agosto de 2020, artículo V, se tuvo por conocido el oficio N° 439-FC-2020 del Departamento Financiero Contable, mediante el cual solicita el criterio de la Junta Administradora respecto a las situaciones que se presentan con los traslados de cuotas por reconocimiento de tiempo servido de otro régimen hacia el Fondo de Jubilaciones y Pensiones. Asimismo, se autorizó la contratación de la licenciada Karol Monge Molina, para que se refiera a la legalidad y forma correcta de aplicar la normativa, para resolver las inquietudes del Departamento Financiero Contable, en el plazo de 15 días hábiles.

Mediante correo electrónico de 21 de agosto de 2020, el jubilado judicial máster Luis Alonso Bonilla Guzmán, indicó:

“Su servidor, Luis Alonso Bonilla Guzmán, cédula [Valor], jubilado del Poder Judicial desde el 16 de mayo de 2019, con acentuado respeto, pero con vehemencia planteo lo siguiente:

El Consejo Superior del Poder Judicial, acordó aprobar solicitud por mí incoada, de reconocimiento de tiempo servido en otra institución, mediante artículo XXXVII, de la sesión del Consejo Superior 14-19, celebrada el día 19 de febrero de 2019, en los siguientes términos:

 "...La licenciada Olga Guerrero Córdoba, Sub Directora interina de Gestión Humana, la máster Adriana Steller Hernández, Jefa interina del Subproceso Administración Salarial y la licenciada Lizleydi Cedeño Yanes, Coordinadora interina de la Unidad de Componentes Salariales, en oficio Nº 0281-UCS-AS-2019, del 8 de febrero de 2019, comunicaron lo siguiente:

“Reconocimiento de Tiempo Servido en Otras

Instituciones del Estado para efectos de:

ANUALES Y JUBILACIÓN

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ***NOMBRE:*** | *LUIS ALONSO DE JESUS BONILLA GUZMAN* | |  |  |
| ***N° CEDULA:*** | *[Valor]* | |  |  |
| ***PUESTO:*** | *FISCAL* | |  |  |
| ***OFICINA:*** | *FISCALÍA GENERAL* | |  |  |
| ***LUGAR PARA NOTIFICACIONES:*** | *Tiene asignado en Outlook.* | |  |  |
| ***FECHA DE PRESENTACION DE LA GESTIÓN:*** | *13/12/2016.* | |  |  |
| ***FECHA EN QUE COMPLETA LA GESTIÓN:*** | *13/12/2016.* | |  |  |
| ***RESULTADO DE ESTUDIO DE RECONOCIMIENTO DE TIEMPO SERVIDO EN OTRAS INSTITUCIONES DEL ESTADO PARA EFECTOS DE ANUALES Y JUBILACIÓN:*** | ***N° DE RTFJP:*** | *2018021* |  |  |
| ***TIEMPO A RECONOCER:*** | *1 año, 8 meses y 29 días.* |  |  |
|  |  |
| ***MONTO A REINTEGRAR:*** | *¢20,266,302.66* |  |  |
| ***INSTITUCIÓN DONDE LABORÓ:*** | *Ministerio de Hacienda* |  |  |
| ***OBSERVACIONES:*** | *·* ***El Monto total a Reintegrar se calcula a valor presente de conformidad a lo establecido en el Reglamento para el Reconocimiento de Tiempo Servido en el Poder Judicial, en el Estado y sus Instituciones para efectos del Pago de Anualidades y Jubilación en el Poder Judicial, artículos 12 y 13.***  *·* ***En la comunicación de la deuda se le hace ver a la persona solicitante que el reintegro se realiza en un 10% del salario bruto mensual hasta cancelar la totalidad del monto adeudado.***  *·* ***Asimismo, se le indica que una vez aprobado el reconocimiento de tiempo servido por parte del Consejo Superior, este no podrá dejarse sin efecto.*** | |  |  |
| ***RESUMEN RESPUESTA DE LA PERSONA SOLICITANTE A LA COMUNICACIÓN DE LA DEUDA:*** | *La persona solicitante no manifiesta objeción con el estudio realizado.* | |  |  |

Previo a la aprobación de mi jubilación, cancelé la suma de ¢20,266,302.66, para el reconocimiento de tiempo servido en otra institución.

Según consulta realizada a la Licenciada Liz Cedeño, de la Unidad de componentes salariales, respecto a los rubros que cubría el pago que realicé, se obtuvo la siguiente respuesta:

“*Buen día,*

***El cálculo del monto a reintegrar corresponde a los aportes obrero, patronal y estatal de cada período reconocido****.*

*Cabe indicar que de este monto se rebajan las cotizaciones del régimen jubilatorio al cual usted había cotizado. Le traslado la consulta a Vanessa Mesén para que ella le indique a cuanto equivale ese traslado.*

*Saludos …*” (El subrayado y destacado no son del original; ver seguidilla de correos electrónicos).

Después de más de un año de insistir ante las oficinas del IVM de la CCSS, para que realizaran el reintegro del dinero, por fin, en el mes de junio de 2020 ingresó el monto correspondiente a una cuenta del Poder Judicial, sin embargo, **no se me reintegró porque se decidió consultar la procedencia ante la Junta del Fondo de Pensiones y Jubilaciones del Poder Judicial**, lo cual me sorprendió, dado que, desde que pagué la suma de ¢20,266,302.66, dicho monto ingresó en las arcas del Fondo de Pensiones del Poder Judicial y, como ha sido la tónica en casos similares, debía reintegrarse el monto correspondiente a mi persona (por supuesto, no me refiero a la suma superior a veinte millones, sino a la cantidad reintegrada por la oficina del IVM de la CCSS, dado que tuve que pagar por adelantado los rubros a los que se refirió la Licenciada Liz Cedeño en el correo electrónico de cita). En otros términos, desde mi perspectiva, no es resorte de la Junta de Pensiones y Jubilaciones del Poder Judicial la decisión del traslado del reintegro a mi favor, dado que para pagar el monto antes mencionado tuve que adquirir deudas, que pretendo saldar con este reintegro, de ahí que, la prolongación injustificada de la resolución de este asunto me está causando un gran perjuicio, no solo económico sino moral.

Así las cosas, solicito con todo respeto se responda pronto la consulta realizada por el Departamento Financiero Contable del Poder Judicial, para que se me pueda reintegrar el monto depositado por la oficina del IVM de la CCSS.

**Para Notificaciones:** (…)”

****

- 0 -

**Por unanimidad, se acordó:** **1)** Tener por conocida la gestión del jubilado judicial máster Luis Alonso Bonilla Guzmán, presentada con correo electrónico de 21 de agosto de 2020, en la que solicita se le reintegre el monto depositado al Fondo de Jubilaciones y Pensiones por la oficina de Invalidez, Vejez y Muerte de la Caja Costarricense de Seguro Social, por traslado de cuotas por reconocimiento de tiempo servido en otras Instituciones del Estado para efectos de jubilación. **2.)** Comunicar al máster Bonilla Guzmán que esta Junta se encuentra a la espera de un criterio jurídico respecto a las situaciones que se presentan con los traslados de cuotas por reconocimiento de tiempo servido de otro régimen hacia este Fondo. **3.)** Previo a brindar respuesta al jubilado Bonilla Guzmán, hacer instancia a la licenciada Karol Monge Molina, para que remita el criterio solicitado en sesión N° 26-2020, del 03 de agosto de 2020, artículo V.

El Departamento Financiero Contable tomará nota para los fines consiguientes. **Se declara acuerdo firme.”**

- 0 -

El señor Luis Alonso Bonilla Guzmán, jubilado judicial, en correo electrónico de 22 de octubre de 2020, indicó lo siguiente:

“En relación con la gestión No 758-2020, se me indicó en la última de las reiteradas consultas que he realizado, que el plazo para respuesta vencía el 16 de octubre de 2020, sin embargo al día de hoy, 22 de octubre de 2020 no he recibido respuesta.

Favor indicarme si ya se resolvió mi gestión y en qué términos.”



- 0 -

Posteriormente el jubilado judicial Luis Alonso Bonilla Guzmán, mediante correo electrónico de 28 de octubre de 2020, señaló lo siguiente

“Su servidor, Luis Alonso Bonilla Guzmán, cédula [Valor], jubilado judicial, de calidades conocidas, sorprendido por la última respuesta en torno a mi gestión, solicito con acentuado respeto se me brinde audiencia presencial con la Junta, a efecto de conocer las razones por las cuáles se ha postergado por tantos meses la resolución de mi solicitud.

Estoy incluyendo en la copia de este correo a ANIC (sindicato al cual pertenezco) y a mi abogada, Licenciada Paula Marín Montero, para que sean incluidos también en la respuesta a mi solicitud, así como, en la audiencia presencial que estoy incoando.

El viernes, 23 de octubre de 2020 09:08:39 a. m. CST, Secretaría General de la Corte-Comunicaciones-Beatriz Martínez Masís Aux. Aut.- <bmartinezm@poder-judicial.go.cr> escribió:

Buenos días don Luis, a la fecha no se ha remitido lo solicitado, el plazo se prorrogo al 16 de diciembre del año en curso

En el momento que se resuelva su gestión se le estará haciendo de conocimiento.”

- 0 -

Por unanimidad, **se acordó: 1)** Tener por conocida la gestión del señor Luis Alonso Bonilla Guzmán, jubilado judicial, en correo electrónico de 22 de octubre de 2020, mediante el cual solicita conocer el estado de su solicitud referente al reintegro del monto depositado al Fondo de Jubilaciones y Pensiones por la oficina de Invalidez, Vejez y Muerte de la Caja Costarricense de Seguro Social, por traslado de cuotas por reconocimiento de tiempo servido en otras Instituciones del Estado para efectos de jubilación. **2)** Hacer de conocimiento del jubilado judicial y de la Secretaría General de la Corte, que el criterio solicitado a la Máster Karol Monge Molina, asesora legal externa, fue conocido y acogido por esta Junta Administradora en sesión N° 31 del 21 de setiembre de 2020. **3)** Conforme la consulta al Macroproceso Financiero Contable, en fecha 5 de noviembre de 2020, fueron girados los montos respectivos al jubilado Bonilla Guzmán.

**ARTÍCULO XVI**

**Documento N° 208-2020 / 1113-2020.**

En sesión N° 20-2020 celebrada el 15 de junio del 2020, artículo VII, se conoció lo que literalmente dice:

“En sesión N° 15-2020 celebrada el 11 mayo del 2020, artículo VI, se tomó el acuerdo que literalmente dice:

**“**En sesión número 09-2020 celebrada el 23 de marzo del 2020, artículo IV, se tomó el acuerdo que literalmente dice lo siguiente:

“En sesión de Consejo Superior Nº 94-16 celebrada el 12 de octubre de 2016, artículo VII, se conoció, entre otras cosas, el estudio efectuado por la Superintendencia de Pensiones, el cual identificó situaciones de riesgo operativo y actuarial en el Fondo de Jubilaciones y Pensiones del Poder Judicial, en razón de lo anterior, acordaron estar a la espera de que la Dirección Ejecutiva atienda las observaciones realizadas por la Superintendencia de Pensiones.

Posteriormente, ese órgano en sesión N° 113-17 celebrada el 20 de diciembre de 2016, artículo XLV, conocieron el oficio N° 5927-DE-2016 del 7 de diciembre de 2016, suscrito por la máster Ana Eugenia Romero Jenkins, Directora Ejecutiva, que literalmente indica:

“Para lo que a bien estime resolver el Consejo Superior, me permito remitir oficio 1925-TE-2016 de 5 de diciembre en curso, suscrito por el MBA Carlos Manuel Hidalgo Vargas, Jefe a.í. del Departamento Financiero Contable, mediante el cual se refiere al acuerdo del Consejo Superior de la sesión celebrada el 12 de octubre de 2016, artículo VII, sobre las sumas giradas de más al jubilado judicial José Albertino Navarro López.”

- 0 -

A continuación, se trascribe el oficio 1925-TE-2016, que literalmente indica.

“En oficio N° 1829-TE-2016 remitido el 17 de noviembre del 2016, se informó a esa Dirección Ejecutiva la suma por cobrar al jubilado judicial José Albertino Navarro López, cédula de identidad N° [Valor], que mantiene con el Fondo de Jubilaciones y Pensiones por sumas giradas de más, de conformidad con lo acordado por el Consejo Superior en sesión Nº 94-16 celebrada el 12 de octubre de 2016, artículo VII.

Sobre el particular, se remite nota de fecha 16 de noviembre de 2016, suscrita por el señor Navarro López, para lo que a bien estime resolver.”

- 0 -

Se transcribe la nota del señor José Albertino Navarro López, que indica lo siguiente:

“Me refiero a la comunicación hecha mediante Oficio N° 1836-TE-2016, de 15 de los Corrientes, en el cual se me emplaza para que dentro de los diez días hábiles siguientes a dicha notificación,(los cuales vencen el 01 de diciembre del 2016 en virtud del asueto generado en atención a Huracán Otto, así como de los días sábados y domingos intercalados), de la siguiente manera:

I. Desde luego no me encuentro en capacidad económica para responder a la gestión que se me formula. Concomitantemente, me asiste un derecho fundamental en la negativa de hacer lo que su autoridad denomina " Sumas giradas en demasía " de conformidad con el artículo 234 de la Ley Orgánica del Poder Judicial.

II. Existe una clara disconformidad de mi parte, porque en primer término, nunca se me hizo un giro con la categoría ni naturaleza de demasía. Siempre se me hicieron los pagos de la jubilación conforme a la fijación inicial así como experimentando el incremento de costo de la vida. (único renglón que se me aplicó ). De manera que no existe ninguna demasía, porque el pago por impartir lecciones fue irrisorio en comparación con el monto de la jubilación. Siempre fue estimado entre treinta a cuarenta mil colones al mes, en época lectiva.

III. El ingreso generado en dichos períodos que se acusa demasía, no constituyó ningún sueldo del Estado, ni de sus instituciones, ni de las de economía mixta. Se trató de un centro educativo de nivel universitario, en donde impartí lecciones, de la misma manera que las importe siendo empleado activo del Poder Judicial, ante la U.I.A. Universidad de Costa Rica, Universidad Latino, Universidad Florencio de Castillo. Constituyeron ingresos asociados a las lecciones universitarias, como a dirección de tesis de grado (60.000) colones en su totalidad. No fue éste un sueldo, ni salario de instituciones que señala en forma taxativa el numeral 234 de la Ley Orgánica del Poder Judicial. Por lo tanto, el reintegro que se me formula como " demasía", es atípico.

IV.- El reintegro que se me pide, es infundado y desproporcionado. Infundado, porque el acto administrativo no contiene, motivo, contenido ni fin que cobije dicho articulado. El título de impartir lecciones nunca se constituyó como sueldo ante instituciones estatales. Tampoco se me señala con absoluta claridad el porqué de esa aplicación. Simplemente se hace una referencia al texto normativo, sin ajustarse la actividad Lectiva (como realización personal), en un centro universitario.

V.- Desproporcionado, porque se me exige un reintegro que no guarda absolutamente ninguna proporción en comparación con el ingreso generado en la Universidad Florencio del Castillo, el cual nunca superó los cuarenta mil colones en un mes. Por lo tanto, no se justica que se me responsabilice de un reintegro que rompe todo el concepto de equidad. No existe ninguna correspondencia económica entre ambos renglones. Admitir dicho pago sería constituir a favor de la administración tú bloca, un enriquecimiento sin causa.

VI.- Disconformidad con el reintegro que se me exige, por la falta de interés jurídico y actual. En este momento no me encuentro brindando lecciones, (aún en horarios nocturnos,) 1 Desde hace más de dos años, cuando se generó la controversia administrativa debido a las lecciones que muchos funcionarios judiciales y ex funcionarios se encontraban brindando. Dichas lecciones no constituyeron ningún trabajo que riñera con el numeral 234 de la Ley Orgánica del Poder Judicial. Por lo tanto, resulta una paradoja que se me refiera un reintegro de " sumas giradas en demasía ", cuando en realidad el interés anual está afectado en este caso. Afectado, porque la norma indica la suspensión del beneficio durante el tiempo que esté percibiendo cualquier otro sueldo del Estado, y de sus instituciones. En este caso, ni me encuentro percibiéndolo, ni se trató de un sueldo. Fue una remuneración por brindar lecciones, tal y como aun siendo empleado activo las brinde, y corno las ha brindado una enorme cantidad de empleados judiciales.

VII. Disconformidad, porque aun siendo empleado activo, brinde lecciones, dirigí tesis de grado, integre Tribunal Examinador de Tesis de Graduación, en la U.C.R., en la U.I.A, en la Florencio del Castillo, contando con permiso y autorización administrativa desde el inicio. Siempre se trató de lecciones de carácter universitario como manifestación de la propia experiencia académica, de mi experiencia laboral, lo que siempre resultó lícito y bajo el conocimiento de la misma administración Pública. De modo que nunca fue sustituida la jubilación o pensión, en aras de impartir lecciones, las cuales significaron tres horas semanales v en horas nocturnas. Nunca existió ninguna intención de sustituir la jubilación ni pensión, por esas tres horas semanales, las que no guardan comparación con la jubilación experimentada.-

Nunca se me cursó suspensión propiamente dicha, del goce del beneficio de la jubilación. En este momento, se me emplaza a formular un arreglo de carácter económico y dentro de los 10 días hábiles.”

- 0 -

**Se acordó: 1)** Tomar nota de lo señalador por lamáster Ana Eugenia Romero Jenkins, Directora Ejecutiva. **2)** Comunicar alseñor José Albertino Navarro López que este órgano no puede suspender los procesos relacionados con el cobro de sumas que se estiman pagadas de más, conforme lo dispone el artículo 234 de la Ley Orgánica del Poder Judicial. Sin embargo, se le aclara que sí tiene derecho a que se siga el debido proceso, y a refutar y aportar las pruebas que estime oportunas, teniendo incluso la resolución que se dicte, recurso de apelación ante este Consejo.**”**

- 0 -

La Secretaría General de la Corte remite oficio 2591-20 del 16 de marzo 2020, relativo al acuerdo tomado por el Consejo Superior del Poder Judicial, en sesión N° 12-20 celebrada el 13 de febrero de 2020, artículo VI, que literalmente dice:

“Mediante nota recibida el 16 de enero de 2020, el licenciado José Albertino Navarro López, jubilado del Poder Judicial, remite recurso de apelación contra la resolución de la Dirección Jurídica N° 2491-ACA/DJ-2019 de las trece horas veintisiete minutos del tres de diciembre de dos mil diecinueve, que indica lo siguiente:

“Quien suscribe Lic. José Albertino Navarro López, de calidades conocidas como encausado, ante su Despacho y en este proceso, me apersono dentro de la audiencia conferida por la Dirección Jurídica del Poder Judicial, mediante auto de las 11:06 minutos del siete de enero del año 2020.

He planteado recurso de apelación frente a la resolución de la Dirección Jurídica del Poder Judicial, No 2491-ACA/DJ-2019 de las trece horas veintisiete minutos del tres de diciembre del dos mil diecinueve, en la cual se me declaró deudor de la suma de 1.323.077.33 colones (un millón trecientos veintitrés mil setenta y siete colones treinta y tres céntimos) a la orden del Poder Judicial. Resolución que respeto mucho, pero disiento del análisis de fondo y de la parte dispositiva de dicha condena de pago, y por tal motivo he interpuesto este medio de impugnación ante su autoridad, y me presento de su Despacho a mantener la disconformidad y las pretensiones, Reafirmo por ello, los argumentos expuestos en la apelación.

Como puede notarse, mis defensas fueron consideradas parcialmente, ya que se arribó a la conclusión de que, de conformidad con el principio de proporcionalidad, razonabilidad, el monto objeto de retribución fue ajustado a la suma de los ingresos por impartir lecciones, lo cierto del caso es que se trató casualmente de una actividad académica y no de uno de los empleos que se refiere el numeral 234 de la Ley Organiza del Poder Judicial. De manera que el análisis respecto del término” empleo”, no se determinó respecto de otro suelto del Estado, de sus bancos, de sus instituciones de las municipalidades, de las juntas de educación y de las empresas mixtas. Se trato de una actividad académica que del mismo modo de la Sala Constitucional ha expuesto sus criterios y que son los que comparte la Procuraduría General de la Republica, respecto de las actividades meramente académicas y ante un centro de educación Superior o Universidades que imparten la carrera de Derecho.

Brindé detalles sobre todas las actividades que realizaba en torno a las lecciones que impartí algunos años hasta agosto del 2014. Siempre fueron académicas. Del mismo modo impartí como empleado activo, y en un contexto de no más de 5 horas a la semana y fuera del horario de trabajo. Fue una carga académica en la carrera misma de Derecho, dentro de lo cual nunca existió espíritu de sustituir un salario ni una jubilación.

Por ello, plantee las defensas de falta de derecho, ya que esa actividad como tal no configura ninguno de los conceptos que señala el numeral 234 de cita, como también la falta de interés jurídico y actual, porque al haber sido emplazado para el respectivo cobro, ya el suscrito había dejado de impartir lecciones desde el 23 de agosto del 2014. En ese mismo marco, la de prescripción.

Solicito respetuosamente: estimar la disconformidad y excepciones planteadas frente a la resolución impugnada, y declara sin lugar la condena de reintegro en todos sus extremos y se disponga del archivo de la presente causa.”

-0-

Manifiesta la máster Romero Jenkins: “…Del tema de la competencia porque se trata de una persona Jubilada, entendería que en este momento eso sería resorte de la Junta Administradora del Fondo de Jubilaciones y Pensiones no de este Consejo.

Expresa el integrante Montero: "Creo que doña Ana tiene razón la propuesta viene denegándolo porque fue jubilado por incapacidad absoluta y permanente, entonces vine rechazándose, aunque es una apelación o reconsideración que él está planteando ante un acuerdo de Consejo en este momento por ser tema de fondo sería mejor que lo vea la Junta.

¿Están de acuerdo? Pregunta el Magistrado Cruz Castro.

Indica la máster Romero Jenkins: “El acuerdo sería trasladar a la junta por no resultar competente este Consejo”

Analizada la gestión anterior por unanimidad, **se acordó:** Trasladar el recurso presentado por el licenciado José Albertino Navarro López, jubilado Judicial, a la Junta Administradora de Jubilaciones y Pensiones del Poder Judicial, en razón de que este Consejo no es competente para conocer asuntos referentes a la Administración del Fondo de Jubilaciones y Pensiones.**”**

- 0 -

Previamente a resolver lo que corresponda y de conformidad con el convenido de apoyo interinstitucional entre el Poder Judicial y esta Junta Administradora del Fondo de Jubilaciones y Pensiones, **se acordó: 1.)** Remitir el presente acuerdo a la Dirección Jurídica para que aporte a este órgano toda la información relacionada con el expediente N° 17-000245-1357-AD, seguido contra el jubilado judicial José Albertino Navarro López, lo anterior, para dar un mejor análisis al recurso presentado por el gestionante. **2.)** Hacer este acuerdo de conocimiento de señor José Albertino Navarro López, jubilado del Poder Judicial.”

- 0 -

En oficio número 1492-DJ/CA-2020 del 29 de abril de 2020, la máster Argili Gómez Siu, Subdirectora jurídica interina, informó lo siguiente:

“Mediante oficio de la Junta Administradora del Fondo de Pensiones y Jubilaciones del Poder Judicial N° 167-2020 del pasado 31 de marzo, suscrito por la Licda. Lucrecia Ruiz Rojas, en calidad de Secretaría de la Junta, se transcribe acuerdo tomado en sesión N° 09-2020 de esa Junta, celebrada el 23 de marzo último, que dispone solicitar a esta Dirección Jurídica aportar a ese órgano toda la información relacionada con el expediente N° 17-000245-1357-AD, seguido contra el jubilado judicial José Albertino Navarro López, lo anterior, para dar un mejor análisis al recurso presentado por el gestionante.

En cumplimiento de lo dispuesto, me permito remitir para conocimiento de la Junta el expediente N° 17-000245-1357-AD (B) seguido contra el jubilado judicial Navarro López, en el cual esta Dirección emitió la resolución de declaratoria de deudor N° 2491ACA-DJ-2019 de las trece horas veintisiete minutos del tres de diciembre de dos mil diecinueve, sobre la cual en tiempo y forma el Lic. Navarro López interpuso recurso de apelación.

Sobre el caso en particular, conviene adicionar que en la citada resolución se declaró deudor al jubilado judicial por la suma de ¢1.323.077.33 (un millón trescientos veintitrés mil setenta y siete colones treinta y tres céntimos), monto que representa aproximadamente un 2.4% del monto total recibido por concepto de jubilación, durante el mismo período que fue reportado a esta Dirección por parte del Departamento Financiero Contable, períodos en los cuales se informa que el señor Navarro López laboró -a pesar de su condición de jubilado- se desempeñó laboralmente en la Asociación Educativa y Cultural Florencio del Castillo impartiendo lecciones.

En tal sentido, la Dirección Jurídica contempló lo regulado en el artículo 234 de la Ley Orgánica del Poder Judicial (antes de la última reforma), el cual daba un margen a la Administración para valorar en cada circunstancia si suspendía o no el beneficio de la jubilación, desarrollando otros argumentos para sustentar lo resuelto, los cuales pueden ser revisados en la resolución N° 2491-ACA-DJ-2019 de las trece horas veintisiete minutos del tres de diciembre de dos mil diecinueve.

De requerirse alguna otra información o aclaración sobre el expediente tramitado en la Dirección Jurídica, para resolver de conformidad, ruégale indicarlo.”

- 0 -

**Se acordó por unanimidad: 1.)** Tener por conocido el oficio N° 1492-DJ/CA-2020 del 29 de abril de 2020, suscrito por la máster Argili Gómez Siu, Subdirectora jurídica, mediante el que remite el expediente del caso del jubilado judicial José Albertino Navarro López. **2.)** Comunicar al jubilado Navarro López que conforme el artículo 234 de la Ley Orgánica del Poder Judicial que rigió cuando se presentó el caso, señalaba que se podría suspender el goce del beneficio, cuando éste hubiera sido acordado en razón de enfermedad y se tenga noticia de que la persona está desempeñando otro empleo, como lo fue su caso en el momento del hecho generador, por lo que se deniega el recurso de apelación. **3.)** Hacer este acuerdo de conocimiento de la Dirección Jurídica para que continúe con el trámite de cobro.

La Dirección Ejecutiva y el Departamento Financiero Contable, tomarán nota para los fines consiguientes.**”**

-0-

La máster Argili Gómez Siu, Subdirectora Jurídica interina, mediante Nº 2073-DJ/CA-2020 del 4 de junio de 2020, comunicó lo siguiente:

**“**Por correo electrónico del día 2 de junio, se recibe para conocimiento de esta Dirección Jurídica el oficio N° 305-2020 del pasado 25 de mayo, de la Junta Administradora del Fondo de Jubilaciones y Pensiones del Poder Judicial, suscrito por la Licda. Lucrecia Ruiz Rojas, en calidad de Secretaria de la Junta, por medio del cual se transcribe acuerdo tomado en sesión N° 15-2020 celebrada el 11 de mayo de 2020, artículo VI, que dispone por unanimidad:

*"(...)* ***1.)*** *Tener por conocido el oficio N° 1492-DJ/CA-2020 del 29 de abril de 2020, suscrito por la máster Argili Gómez Siu, Subdirectora Jurídica, mediante el que remite el expediente del caso del jubilado judicial José Albertino Navarro López.* ***2.)*** *Comunicar al jubilado Navarro López que conforme el artículo 234 de la Ley Orgánica del Poder Judicial que rigió cuando se presentó el caso, señalaba que se podría suspender el goce del beneficio, cuando éste hubiera sido acordado en razón de enfermedad y se tenga noticia de que la persona está desempeñando otro empleo, como lo fue su caso en el momento del hecho generador, por lo que se deniega el recurso de apelación.* ***3.)*** *Hacer este acuerdo de conocimiento de la Dirección Jurídica para que continúe con el trámite de cobro (...)" .*

En relación con lo resuelto, esta Dirección Jurídica somete a su valoración, para lo que a bien estimen resolver, sobre la importancia de que la Junta Administradora del Fondo, en su condición de Órgano Decisor, en resguardo del derecho de defensa que asiste al administrado, resolver el recurso de apelación interpuesto por el Lic. Navarro López, refiriéndose a cada uno de los alegatos presentados contra la resolución final dictada en este procedimiento y sobre la cual fue interpuesto el recurso de revocatoria la cual ya se resolvió lo correspondiente en su oportunidad, pero al existir adicionalmente recurso de apelación, es la Junta Administradora del Fondo, como órgano competente, la que debe entrar a conocer el fondo sobre dicho recurso y resolver cada uno de los alegatos del recurrente, lo contrario implicaría una violación al debido proceso y derecho de defensa del jubilado Navarro López.

Lo anterior, siendo que de conformidad con lo acordado por el Consejo Superior en sesión N° 18-2020, celebrada el 5 de marzo, artículo XLIV, esta Dirección Jurídica asume los procedimientos de cobros administrativos atinentes al Fondo de Jubilaciones y Pensiones solamente en su condición de órgano director, siendo la Junta Administradora del Fondo, el Órgano Decisor.

Conforme lo expuesto, respetuosamente se remite nuevamente las diligencias, estando esta Dirección a la espera de lo que estimen resolver. Se adjunta el expediente electrónico N° 17-000245-1357-AD (B).**”**

(Expediente)

-0-

**Se acordó: 1)** Tener por conocido el oficio Nº 2073-DJ/CA-2020 del 4 de junio de 2020, suscrito por la máster Argili Gómez Siu, Subdirectora Jurídica interina, mediante el cual somete a valoración de la Junta Administradora en su condición de Órgano Decisor, la importancia de resolver el recurso de apelación interpuesto por el jubilado judicial Navarro López, refiriéndose a cada uno de los alegatos presentados contra la resolución final dictada en este procedimiento, en resguardo del derecho de defensa que asiste al administrado **2)** De previo a resolver el recurso de apelación interpuesto por el jubilado judicial Navarro López, delegar al integrante suplente Juan Carlos Segura Solís para estudio e informe. **Se declara este acuerdo firme.**”

- 0 -

Mediante correo electrónico de 28 de octubre de 2020, el doctor Juan Carlos Segura Solís, integrante suplente de esta Junta Administradora, informa lo siguiente:

“De conformidad con el acuerdo tomado por la Junta Administradora del Fondo de Pensiones y Jubilaciones del Poder Judicial en la Sesión No 20-2020 celebrada el 15 de junio del año dos mil veinte, procedo a rendir el informe requerido. referente al recurso de apelación contra la resolución emanada de la Dirección Jurídica del Poder Judicial, Área de Cobro Administrativo.

**RESOLUCIÓN No -2020**

**JUNTA ADMINISTRADORA DEL FONDO DE JUBILACIONES Y PENSIONES DEL PODER JUDICIAL**. A las horas del día del mes de noviembre del año dos mil veinte.

**PREÁMBULO.-**

Conoce esta Junta, del Recurso de Apelación interpuesto por el señor **JOSÉ ALBERTINO NAVARRO LÓPEZ**, mayor, portador de la cédula de identidad número [Valor] contra la resolución No 2491-ACA/DJ-2019 de la DIRECCIÓN JURÍDICA DEL PODER JUDICIAL, de las trece horas con veintisiete minutos del tres de diciembre del año dos mil diecinueve.

**I.- ANTECEDENTES DEL CASO.-**

**A.-** El señor José Albertino Navarro López en nota de fecha 16 de noviembre del año 2016 manifiesta que mediante comunicación del Oficio No 1836-TE-2016 de 15 de lo corrientes, se le notifica el cobro de una sumas giradas en demasía de conformidad con el numeral 234 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, indicando no se le hizo nunca un apercibimiento del giro de más de tales dineros y se le solicita el reintegro de tales sumas. Manifiesta que tal reintegro es infundado y desproporcionado porque el acto administrativo comunicado no contiene motivo, contenido ni fin que cobije dicho articulado. El título de impartir lecciones nunca se constituyó como sueldo ante instituciones estatales. Tampoco se le señala con absoluta claridad por qué de esa aplicación. Simplemente se hace una referencia al texto normativo, sin ajustarse la actividad lectiva ( como realización personal ) en un centro universitario. Alega que nunca se le cursó suspensión propiamente dicha del goce del beneficio de la jubilación.

**B.-** La Secretaría General de la Corte remite oficio 2591-20 del 16 de marzo de 2020, relativo al acuerdo tomado por el Consejo Superior del Poder Judicial en sesión No 12-20 celebrada el 13 de febrero del 2020, artículo VI donde el señor Navarro López, jubilado del Poder Judicial remite recurso de apelación contra la resolución de la Dirección Jurídica No 2491-ACA/DJ-2019 de las trece horas veintisiete minutos del tres de diciembre del año dos mil diecinueve. El señor Navarro López alega que se le ha declarado deudor de una suma de dinero ( 1.323.077.33 colones ), a la orden del Poder Judicial, señalando su inconformidad con el análisis de fondo y de la parte dispositiva de dicha condena de pago.

**C**.- Este Recurso es trasladado para su conocimiento a esta Junta Administradora por ser el recurrente jubilado, declarándose incompetente el Consejo Superior.

**D.**- En oficio No 1492-DJ/CA-2020 del 29 de abril del año 2020 la Subdirectora Jurídica a.i, informó que a solicitud de la Junta Administradora del Fondo de Pensiones y Jubilaciones del Poder Judicial, No 167-2020 de 31 de marzo, suscrito por la Licda Lucrecia Ruiz Rojas, se transcribe el acuerdo tomado No 09-2020 de esa Junta celebrada el 23 de marzo, mediante el cual se dispone solicitar a esta Dirección Jurídica aportar a ese órgano toda la información relacionada con el expediente No 17-000245-1357 AD. En ese expediente se declaró deudor mediante resolución No 2491ACA-DJ-2019 de las trece horas veintisiete minutos del tres de diciembre del año dos mil diecinueve y de la cual interpuso el señor José Albertino el recurso de apelación, donde la Dirección Jurídica contempló lo regulado en el artículo 234 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, antes de la última reforma, el cual daba un margen a la Administración para valorar cada circunstancia si suspendía o no el beneficio de la jubilación, desarrollando otros argumentos para sustentar lo resuelto, los cuales pueden ser revisados en la resolución No 2491-ACA-DJ-2019 de la trece horas veintisiete minutos del tres de diciembre del año dos mil diecinueve. De requerirse otra información o aclaración sobre el expediente tramitado en la Dirección Jurídica, para resolver de conformidad, ruégale indicarlo.

**E**.- Ante esta situación, la Máster Argili Gómez Siu Subdirectora Jurídica Interina mediante oficio No 2073-DJ/Ca-2020 del 4 de junio del 20202 manifiesta que en resguardo del derecho de defensa del recurrente que la Junta Administradora del Fondo en su condición de Órgano Decisor resuelva el recurso de apelación y conozca sobre el fondo del asunto.

**II.- HECHOS PROBADOS Y NO PROBADOS.-** Se avala el elenco tenido como demostrados por considerar este órgano, constituyen un fiel reflejo de lo acontecido en los autos. Se rechaza el relacionado como hechos no demostrados por ser innecesario.

**III.- LOS AGRAVIOS DE LA PARTE RECURRENTE**.- El recurrente Navarro López, inconforme con lo resuelto, por el la Dirección Jurídica del Poder Judicial, Área de Cobro Administrativo, mediante resolución de las trece horas con veintisiete minutos del tres de diciembre del año dos mil diecinueve, por medio de la cual le impone cancelar al Poder Judicial la suma de **UN MILLÓN TRESCIENTOS VEINTITRÉS MIL SETENTA Y SIETE COLONES CON TREINTA Y TRES CÉNTIMOS**, interpone recurso de apelación, cuyo conocimiento corresponde a este órgano en alzada y cuyos agravios mediante los cuales funda dicho remedio procesal son los siguientes: Manifiesta que lo resuelto por la administración se encuentra infundado y desproporcionado, infundado por que el acto administrativo no contiene motivo, contenido ni fin, solamente señala que el impartir clases nunca se constituyó como sueldo ante instituciones estatales, haciendo simplemente una referencia a la normativa infringida. Además indica que se encuentra desproporcionado porque se le exige un reintegro que no guarda absolutamente una proporción en comparación con el ingreso generado en la Universidad Florencio del Castillo, en la cual nunca superó los cuarenta mil colones en un mes. Arguye falta de interés actual y jurídico pues ya no se encuentra impartiendo lecciones para ninguna universidad. Reitera que nunca percibió suma alguna de ninguna institución o del propio Estado, ni se trató de un sueldo, fue una remuneración por brindar lecciones, tal y como aun siendo empleado activo las brindó.

**IV.- ANÁLISIS DEL CASO BAJO ESTUDIO.-** Un acto administrativo es toda manifestación o declaración de un poder público en el ejercicio de potestades administrativas, mediante el que impone su voluntad sobre los derechos, libertades o intereses de otros sujetos públicos o privados y que queda bajo el del comienzo. Se trata de una declaración de voluntad, intelectual, no son actividades materiales (ej.: ejecuciones coactivas). Sin embargo, por declaración no ha de entenderse únicamente la que formalmente se presenta por escrito como tal (aunque esto sea lo frecuente y lo deseable). La declaración puede y será normalmente de voluntad, pero puede serlo también de otros estados intelectuales: de juicio, de deseo, de conocimiento.

La declaración en la que el acto administrativo consiste debe proceder de una Administración, por lo que se excluyen los actos jurídicos del administrado que, aunque sometidos al Derecho Administrativo se rigen por disposiciones diferentes.

El acto administrativo es esencialmente material, lo cual no excluye que la voluntad del administrado pueda jugar como presupuesto de su existencia (ej.: resolución de conclusión de un procedimiento por desistimiento o renuncia del administrado o interesado) o de eficacia (ej.: toma de posesión de un funcionario). Lo normal es que el acto emane del órgano que directamente tiene competencia para dictarlo, pero puede surgir de una forma indirecta, es decir ser dictado por una persona que no tenga la condición subjetiva de Administración, pero que actúa poderes delegados por una Administración (ej.: concesionarios). La declaración administrativa en que el acto consiste se presenta como el ejercicio de una potestad administrativa, es lo que conecta el acto a la legalidad. La declaración (de voluntad, juicio, deseo o conocimiento) en que consiste el acto administrativo es unilateral, es decir ha de ser producida unilateralmente por una Administración pública, sin la intervención ni el concurso ni el consenso o acuerdo de ninguna otra entidad.

El acto administrativo ha de ser producido por una Administración pública entendiéndose ésta en sentido amplio.

El acto administrativo ha de dictarse en ejercicio de una potestad administrativa, es decir de una potestad pública. Cuando una Administración pública dicta un acto administrativo actúa ejercitando una potestad pública, de imperium, revestida de prerrogativas, estando en una posición de superioridad respecto a los particulares. Las Administraciones públicas no pueden emitir actos administrativos cuando actúan como cualquier otro particular, sin ejercitar una potestad pública, porque en tal caso están actuando como cualquier sujeto particular, privado.

La potestad administrativa ejercitada para dictar un acto administrativo es distinta de la potestad reglamentaria. Ambas potestades son públicas pero la potestad reglamentaria es una potestad normativa que permite producir normas jurídicas innovando el ordenamiento jurídico administrativo. Sin embargo la potestad administrativa productora de actos administrativos no es una potestad normativa, su producto – el acto administrativo – no innova el ordenamiento jurídico. Como ejemplo del producto de una potestad reglamentaria podemos citar un real decreto del Consejo de Ministros, una orden ministerial que regulen el ejercicio de una actividad comercial, innovando normativamente la regulación jurídica existente hasta entonces sobre esa materia. Como ejemplo de un acto administrativo se puede citar una resolución administrativa dictada por un Consejero de una Comunidad Autónoma concediendo una ayuda económica o subvención por la creación de empleo o por la contratación de trabajadores. También la potestad administrativa expropiatoria es una potestad pública pero no es de carácter normativo. Lo mismo ocurre con la potestad administrativa sancionadora. La resolución administrativa que resuelve un procedimiento administrativo de expropiación forzosa y la que resuelve un procedimiento sancionador son actos administrativos, no son normas jurídicas. Por ello es posible precisar aún más el concepto de acto administrativo tomando el que da el profesor Eduardo García de Enterría, sobre la base de la definición que de aquel dio Zanobini. Así se puede decirse que el acto administrativo es una declaración unilateral de voluntad, juicio, deseo o conocimiento realizada por una Administración pública en el ejercicio de una potestad administrativa distinta de la potestad reglamentaria. Los actos administrativos se pueden clasificar en atención a múltiples criterios. De entre ellos destacan: Actos favorables y desfavorables, de gravamen o limitativos de derechos o facultades, en atención al tipo de efectos que tengan sobre los administrados. Actos resolutorios y actos de trámite. Los primeros son los propiamente dichos, las resoluciones administrativas en tanto que los segundos se producen en el curso de un procedimiento que culminará con una resolución o, excepcionalmente, con el archivo de las actuaciones si ello procede. Los actos de trámite no tienen vida jurídica propia, sino que se refunden en la resolución que pone fin al procedimiento. Actos expresos y presuntos. Según sea la forma de exteriorización del acto administrativo. Actos reglados y actos discrecionales. **Atendiendo al destinatario: Singulares (una o varias personas concretas) y generales (una pluralidad indeterminada de personas)**

Desde el punto de vista de la recurribilidad: Definitivos y de trámite (arts. 112.1 LPACA y 25.1 LJCA): solo son recurribles los actos definitivos (los que ponen fin a un procedimiento resolviéndolo) y los actos de trámite cualificados. Actos que agotan la vía administrativa y actos que no la agotan (artículo 25.1 LJCA) Actos firmes en vía administrativa (frente a los que no cabe recurso ordinario en vía administrativa, pero son susceptibles aún de recurso contencioso - administrativo) y actos firmes (que no son susceptibles de recurso alguno, sin perjuicio del recurso extraordinario). Actos confirmatorios y reproductorios de otros anteriores consentidos y firmes (artículo 28 de la LJCA: son irrecurribles los actos confirmatorios y reproductorios siempre que entre el primer y el segundo acto haya la más plena identidad de sujetos, fundamentos y objeto).

**III.- CONTINUACIÓN.-** Así las cosas, podemos definir el acto administrativo como toda Manifestación de la voluntad de una autoridad en su ejercicio de la actividad administrativa que produce efectos jurídicos como crear, transmitir, modificar o extinguir derechos y obligaciones. Para su constitución y posterior validez esa conducta administrativa debe contar con elementos de forma y de fondo. Dentro de los elementos de forma tenemos:

**El sujeto:** Es el órgano que, en representación del Estado formula la declaración de la voluntad, por lo que dicho órgano cuenta con una competencia, la cual constituye el conjunto de facultades que tiene el mismo.

**La competencia:** Es la cantidad de poder público que tiene o adquiere el órgano para dictar un acto, por lo que no es una cualidad, sino una cantidad; por ello se considera como la medida de poder que pertenece a cada órgano de dicho acto.

**La voluntad:** Es un impulso generalmente psíquico, una acción con una intención.

Concurren en la voluntad administrativa elementos subjetivos y objetivos. Dicha acción del acto Administrativo está compuesta por la voluntad subjetiva (voluntad al acto mismo) del funcionario y además, la voluntad objetiva del legislador (voluntad sin saber de las circunstancias particulares de cada caso.)

**El objeto:** Éste, debe ser cierto física y jurídicamente posible; por lo que debe decidir sobre todas las peticiones formuladas, pero puede involucrar otras no propuestas con previa audiencia del interesado y siempre que ello no afecte a los derechos adquiridos.

**El motivo:** responde al porqué justificativo. Los antecedentes de hecho y de derecho previos a su dictado.

**La motivación:** Aparece cuando en el acto existe la posibilidad de la discrecionalidad por parte del funcionario público. Si un acto es discrecional debe motivarse, pero si un acto es totalmente reglado no sería necesaria la motivación.

**El mérito:** Se le ha considerado como un elemento del acto administrativo, entendido como la adecuación necesaria de medios para lograr los fines públicos específicos que el acto administrativo de que se trate tiende a llegar.

**La forma:** Es la materialización del acto administrativo en sí, además es el modo de expresión de la declaración ya formada. Por la forma del acto administrativo se convierte en físico y objetivo. En resumen, la forma equivale a la formación externa del acto. El contenido en definitiva.

**IV.- DE LA VALIDEZ DEL ACTO ADMINISTRATIVO IMPUGNADO.-** El recurrente de la conducta administrativa impugnada alega una falta de motivación de acto administrativo y ausencia de los elementos materiales como el motivo, el contenido y el fin. Estima la vulneración del principio de proporcionalidad y razonabilidad. Del estudio de la conducta administrativa impugnada se desprende de la misma que cumple con los elementos de contenido, pues es la forma en que la administración expresa, emana su voluntad, y el motivo también se encuentra pues son aquellos antecedentes de hecho y de derecho que son el fundamento de su dictado; que en este caso sería la jubilación por invalidez absoluta y permanente del actor y el haber impartido bajo esa circunstancia lecciones los cuatrimestres II y III cuatrimestre del año dos mil doce y I,II Y III cuatrimestre del año dos mil trece y I y II cuatrimestre del año dos mil catorce, donde el Lico. Navarro López laboró impartiendo lecciones para la Universidad Florencio del Castillo. En cuanto al fin, al ser el elemento reglado por excelencia que es buscar siempre el fin público, no cabe duda a este órgano que se encuentra presente en la resolución impugnada, pues se busca en todo momento la satisfacción del interés público, evidentemente en este caso no se busca la atención de un interés privado. Ahora bien, en la motivación, la administración una vez, cumplido el debido proceso, analiza aquellos antecedentes de hecho y de derecho con la finalidad de si con su actuar, su demostración, se logre verificar el incumplimiento e infracción por parte del actor de alguna normativa legal que para el caso concreto le pudiese acarrear una sanción en este caso de índole suspensiva y además indemnizatoria. Ahora bien, el actor fue pensionado por el Poder Judicial por encontrarse incapacitado de forma absoluta y permanente para sus labores en el Poder Judicial, no así para otra actividad jurídica o académica donde sí pudiese transmitir sus habilidades intelectuales o físicas, de tal manera que la norma fue restrictiva y lo pensionó por incapacidad únicamente para labores propias dentro del Poder Judicial, no fuera de él, por lo que ante esta situación, existe una indebida apreciación del numeral 234 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, que rigió cuando se presentaron los hechos y por ende no se debió nunca de suspender el goce del beneficio al actor. Ante esta situación, lo procedente es revocar el acto venido en alzada y anular la suspensión del goce del beneficio de la pensión si la hubo y el cobro de la suma de un millón trescientos veintitrés mil setenta y siete colones con treinta y tres céntimos; por no contarse con normativa para ese momento que dispusiera una restricción en el ejercicio de labores fuera del poder judicial.

Asimismo, el análisis de la presente resolución se realiza con base en los principios de seguridad jurídica y de irretroactividad de las normas, estipulados en la Constitución Política de Costa Rica.

**PARTE DISPOSITIVA**

Se revoca el acto administrativo venido en alzada. Se anula la suspensión del goce del beneficio de la jubilación si la hubo, y el cobro de la suma de un millón trescientos veintitrés mil setenta y siete colones con treinta y tres céntimos; por no contarse con normativa para ese momento que dispusiera una restricción en el ejercicio de labores fuera del poder judicial.”

- 0 -

**Se acordó por unanimidad: 1.)** Acoger en todos sus extremos la propuesta presentada por el doctor Juan Carlos Segura Solís, integrante suplente de esta Junta Administradora. **2.)** La Secretaría General de la Corte tomará nota para realizar la respectiva comunicación de la resolución al jubilado judicial Navarro López. **3.)** La Dirección Jurídica y el Departamento Financiero Contable tomarán nota referente a que este órgano anuló la suspensión del goce del beneficio de la jubilación si la hubo, y el cobro de la suma de un millón trescientos veintitrés mil setenta y siete colones con treinta y tres céntimos; por no contarse con normativa para ese momento que dispusiera una restricción en el ejercicio de labores fuera del Poder Judicial.

## ARTÍCULO XVII

**Documento N° 1033-20**

El Consejo Superior, en sesión N° 94-2020 celebrada el 30 de setiembre del 2020, artículo LIV, tomó el acuerdo que literalmente dice:

“En sesión N° 56-2020 celebrada el 09 de junio de 2020, artículo XLII, se tomó el acuerdo que literalmente dice:

“En sesión N° 19-17 celebrada el 2 de marzo de 2017, artículo LXV, se tomó el acuerdo que literalmente dice:

En sesión N° 101-15, celebrada el 17 de noviembre de 2017, artículo LXIX, se denegó la solicitud planteada por el licenciado Miguel Brais Quirós, Fiscal Auxiliar de la Fiscalía General de la República, por cuanto no es posible aplicar el rebajo de un 5% de su salario conforme lo gestionó, lo anterior de conformidad con lo establece el artículo 231 de la Ley Orgánica del Poder Judicial y en aplicación del principio pro fondo. Conforme lo solicitó don Miguel y en razón a lo aquí dispuesto, se dejó sin efecto la presente solicitud de reconocimiento de tiempo servido en otras instituciones del Estado y se ordenó por tanto el archivo de las presentes diligencias.

El licenciado Miguel Brais Quirós, Fiscal Auxiliar de la Fiscalía del Primer Circuito Judicial de la Zona Sur, en nota de 20 de febrero de 2017, solicitó lo siguiente:

“… de la manera más atenta y respetuosa expongo y solicito lo siguiente:

1- A finales del mes de diciembre del año 2005 formulé solicitud de reconocimiento como anualidades de aproximadamente tres años de laborar en el Ministerio de Hacienda. La petición no fue como tiempo servido sino como solicitud para reconocer anualidades y así se resolvió por la Corte Suprema de Justicia rechazando mi petición. (aun existiendo jurisprudencia contenciosa administrativa que establece que el reconocimiento de anualidades es independiente al de tiempo servido).

2- Por lo anterior en fecha 05 de Julio del 2016 formule ante la Unidad de Componentes Salariales se me reconociera el periodo servido de dos años, once meses diecisiete días como tiempo reconocido en el estudio de lapso servido número: 2015150 de fecha 22 de junio del 2015, es decir como anualidades y como tiempo servido para efectos de jubilaciones y anualidades.

3- De igual forma estoy de acuerdo en el monto superior a los veinte millones, así como el porcentaje a rebajar del 10%, solicito se apruebe dicho estudio por parte del Consejo Superior de la Corte Suprema de Justicia.

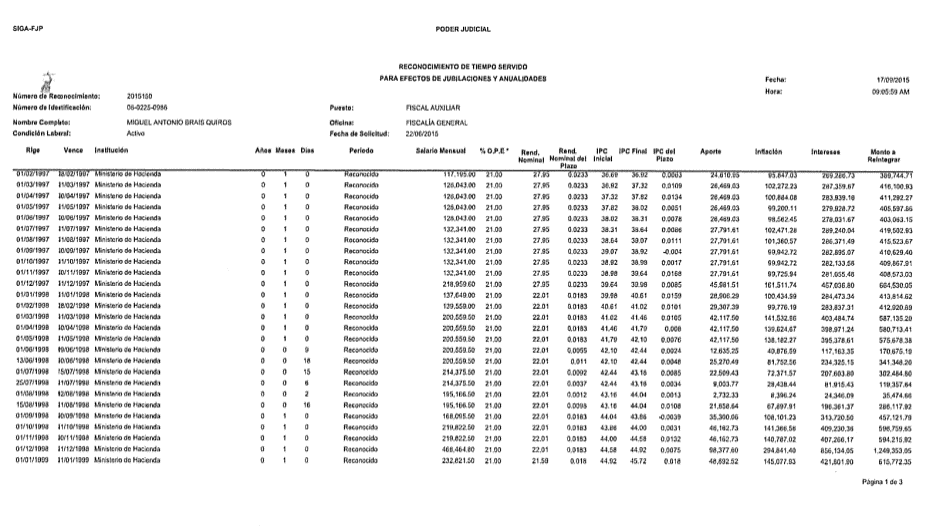
4- Aporto copia del escrito de fecha 25 de mayo del 2016, presentado el 05 de julio del 2016, solicitando el Reconocimiento de tiempo servido y teniendo derecho sobre las regulaciones de dicha materia en ese momento, copia del estudio de período servido número: 2015150 de fecha 22 de junio del 2015.”

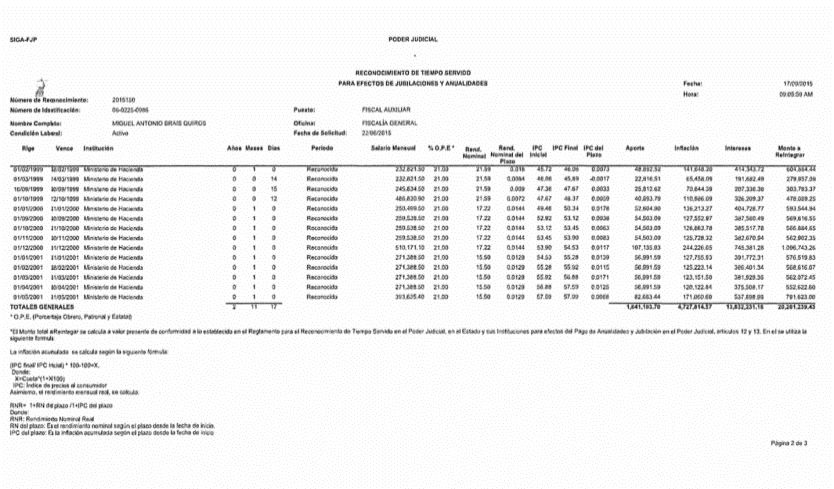
Seguidamente, se transcribe el citado escrito:

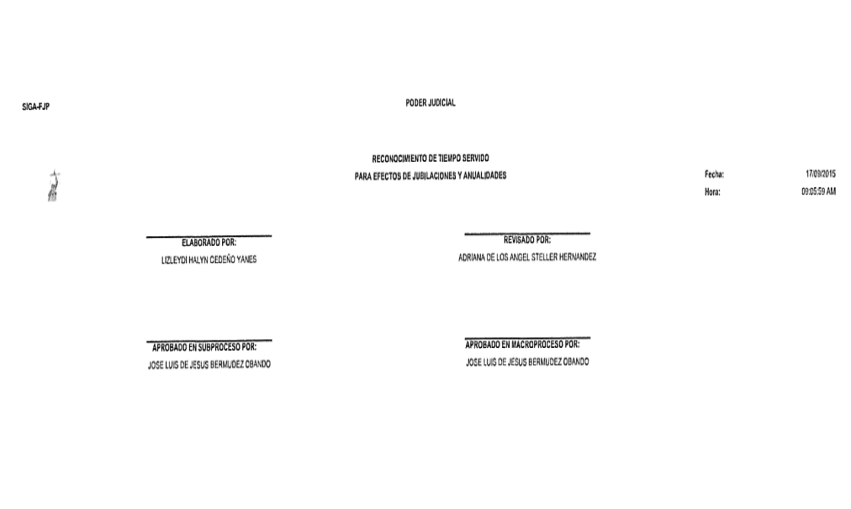
“Quien suscribe, Miguel Brais Quirós, Fiscal Auxiliar de la Fiscalía de Pérez Zeledón, de la manera más atenta y respetuosa expongo y solicito lo siguiente:

1- Teniendo presente el estudio de tiempo servido número: 2015150 de fecha 22 de junio del 2015 realizado por su persona, solicito se me reconozca ese tiempo como anualidades y como tiempo servido para efectos de jubilaciones y anualidades. Además que se me autorice a realizar pagos extraordinarios cada dos años, con el fin de ir reduciendo el monto a cancelar y se haga el trámite para que los aportes existentes en los diferentes regímenes de pensiones sean trasladados al Poder Judicial, los cuales serán abonados al monto general de la deuda y solicito se me informe por escrito, cuando se realice dicho trámite.

2- Habiendo visto el estudio realizado que establece un monto superior a los veinte millones, así como el porcentaje a rebajar del 10%, solicito se tramite dicho estudio ante el Consejo Superior de la Corte Suprema de Justicia.”







**-0-**

**Se acordó: 1)** Tomar nota de la comunicación anterior. **2)** Hacer este acuerdo de conocimiento de la Dirección de Gestión Humana, para que actualice los cálculos. **Se declara acuerdo firme.”**

- 0 –

La máster Roxana Arrieta Meléndez, y las licenciadas Olga Guerrero Córdoba y Mauren Siles Mata, en su respectivo orden; Directora y Subdirectora interinas y Jefa del Subproceso Administración Salarial, todas de la Dirección de Gestión Humana, en oficio N° PJ-DGH-SAS-1704-20200 del 27 de abril de 2020, remitieron:

“**Reconocimiento de Tiempo Servido en Otras**

**Instituciones del Estado para efectos de:**

**ANUALIDADES Y JUBILACIÓN**

1. **DETALLE DEL ESTUDIO:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **NOMBRE:** | MIGUEL ANTONIO BRAIS QUIROS | |
| **N° CEDULA:** | [Valor] | |
| **PUESTO:** | FISCAL AUXILIAR | |
| **OFICINA:** | FISCALIA GENERAL | |
| **LUGAR PARA NOTIFICACIONES:** | Tiene asignado en Outlook. | |
| **FECHA DE PRESENTACION DE LA GESTIÓN:** | 05/07/2016. | |
| **FECHA EN QUE COMPLETA LA GESTIÓN:** | 05/07/2016. | |
| **RESULTADO DE ESTUDIO DE RECONOCIMIENTO DE TIEMPO SERVIDO EN OTRAS INSTITUCIONES DEL ESTADO PARA EFECTOS DE ANUALES Y JUBILACIÓN:** | **N° DE RTFJP:** | 2016163 |
| **TIEMPO A RECONOCER:** | 2 años, 11 meses y 17 días. |
| **MONTO A REINTEGRAR:** | ¢10,542,902.47 |
| **INSTITUCIÓN DONDE LABORÓ:** | Ministerio de Hacienda |
| **OBSERVACIONES:** | * El Monto total a Reintegrar se calcula a valor presente de conformidad a lo establecido en el Reglamento para el Reconocimiento de Tiempo Servido en el Poder Judicial, en el Estado y sus Instituciones para efectos del Pago de Anualidades y Jubilación en el Poder Judicial, artículos 12 y 13. * Estudio confeccionado y comunicado a la persona servidora judicial de previo al inicio de labores de la Junta Administradora del Fondo de Jubilaciones y Pensiones del Poder Judicial. | |
| **RESUMEN RESPUESTA DE LA PERSONA SOLICITANTE A LA COMUNICACIÓN DE LA DEUDA:** | Es el interés de la persona solicitante el reconocimiento del presente estudio para efectos de anualidades y jubilación ya que, ante la comunicación de este, no manifestó objeción alguna. | |

El presente informe se realiza en atención al oficio 2457-17 de la Secretaría General de la Corte donde comunican el acuerdo tomado por el Consejo Superior mediante **sesión n° 19-17 del 02 de marzo de 2017, artículo LXV** e indican que se realice la actualización del cálculo del monto a reintegrar. Cabe indicar que el mismo se encontraba a la espera de la aprobación del recalculo de estudios de reconocimiento de tiempo servido recientemente aprobado por la Junta Administradora del Fondo de Jubilaciones y Pensiones del Poder Judicial.

Tomando en consideración la competencia que aún conserva el Consejo Superior para conocer de los asuntos relacionados con reconocimiento de tiempo servido para efectos de anualidades, se remite el estudio ***RTFJP nº* 2016163 (fecha de rige 05/07/2016)** para que ese órgano decida lo que corresponda. Cabe indicar que, el tiempo total a reconocer es de **2 años, 11 meses y 17 días laborados para el Ministerio de Hacienda.**

Asimismo, en caso de aprobarse el estudio ***RTFJP nº* 2016163**, se debe trasladar también a aprobación el cálculo del monto a reintegrar, a la Junta Administradora del Fondo de Jubilaciones y Pensiones del Poder Judicial por ser de su competencia. Dicho monto corresponde a la suma de **¢10,542,902.47**.”

- 0 –

Previamente a resolver lo que corresponda. **se acordó:** Solicitar a la Dirección Jurídica realizar un análisis jurídico actualizado que contemple el panorama jurídico actual, con el fin de determinar si con la entrada en funcionamiento de la Junta Administradora del Fondo de Pensiones y Jubilaciones del Poder Judicial, se mantiene lo regulado en el “Reglamento para el reconocimiento de tiempo servido en el Poder Judicial, en el Estado y sus instituciones para efecto del pago de anualidades y Jubilación en el Poder Judicial”, o si por el contrario, se encuentra derogado. Lo anterior, con la finalidad de determinar si este Consejo Superior puede aprobar las gestiones de reconocimiento de tiempo para efectos de anualidades, independientemente si la persona interesada gestiona el trámite de reconocimiento de tiempo para efectos jubilatorios, por lo anterior, deberán recomendar lo que correspondan. **2.)** Deberá la Dirección de Gestión Humana separar estas solicitudes de reconocimiento de tiempo en dos informes diferentes, es decir, remitir a este Consejo Superior únicamente las gestiones de reconocimiento de tiempo servido para efecto de anualidades y a la Junta Administradora las gestiones de reconocimiento de tiempo servido para efectos jubilatorios, sin ser unificadas en un mismo documento. Por lo anterior, la Secretaría General de la Corte tomará las medidas que correspondan en caso de que la citada Dirección remita un informe con las dos gestiones en un mismo documento**.**”

-0-

En relación a lo anterior, en sesión N° 84-2020 celebrada el 28 de agosto de 2020, artículo XVI, al conocerse el informe N°DJ-C-524-2020 del 19 de agosto de 2020, presentado por el máster Rodrigo Alberto Campos Hidalgo, Director Jurídico, referente a si con la entrada en funcionamiento de la Junta Administradora del Fondo de Pensiones y Jubilaciones del Poder Judicial” se mantiene vigente el “Reglamento para el reconocimiento de tiempo servido en el Poder Judicial, en el Estado y sus instituciones para efecto del pago de anualidades y Jubilación en el Poder Judicial” (RTS). Y si el Consejo Superior puede aprobar “las gestiones de reconocimiento de tiempo para efectos de anualidades, independientemente si la persona interesada gestiona el trámite de reconocimiento de tiempo para efectos jubilatorios”, este Consejo, acogió el criterio presentado por el máster Rodrigo Alberto Campos Hidalgo, Director Jurídico interino en oficio N°DJ-C-524-2020 y lo hizo de conocimiento de la Dirección de Gestión Humana y de la Secretaría General de la Corte, para que remitieran a este Consejo todas las gestiones pendientes referente al Reconocimiento de Tiempo Servido en el Poder Judicial y en El Estado y sus Instituciones en el entendido que será únicamente para efectos de anualidades.

Al conocerse los informes N° PJ-DGH-SAS-1704-20200 y DJ-C-524-2020 elaborados por la Dirección de Gestión Humana y Dirección Jurídica, de acuerdo con lo resuelto por la Corte Plena en sesión N° 4-2020 celebrada el 27 de enero de 2020, artículo VII, en lo que interesa revocó el punto 2) del acuerdo tomado por la misma en la sesión N° 45-19 del 28 de octubre del 2019, artículo VI, referente a la fecha rige de la Junta Administradora del Fondo de Jubilaciones y Pensiones del Poder Judicial y con motivo de que se tuvo por formalmente constituida la citada Junta Administradora a partir del 27 de enero de 2020, **se acordó: 1.)** Reconocer para efectos únicamente de anualidades al servidor Miguel Antonio Brais Quirós, Fiscal Auxiliar de la Fiscalía General de la República, 2 años, 11 meses y 17 días, laborados para el Ministerio de Hacienda, a partir del 5 de julio de 2016. **2.)** Trasladar el presente acuerdo a la Junta Administradora del Fondo de Jubilaciones y Pensiones del Poder Judicial, a fin de que resuelva lo correspondiente al reconocimiento de tiempo servido en otras instituciones para efectos de jubilación del servidor Brais Quirós.**”**

- 0 -

Por unanimidad, **se acordó:** Reconocer para efectos de jubilación al servidor Miguel Antonio Brais Quirós, Fiscal Auxiliar de la Fiscalía General de la República, 2 años, 11 meses y 17 días, laborados para el Ministerio de Hacienda, a partir del 5 de julio de 2016, con la obligación de reintegrar al Fondo de Jubilaciones y Pensiones del Poder Judicial la suma de ¢10,542,902.47 (diez millones quinientos cuarenta y dos mil novecientos dos colones y cuarenta y siete céntimos), que se le deducirá de su salario bruto en el tanto de 10% mensual hasta la cancelación total, o si lo prefiere, podrá depositarla en las cuentas corrientes números CC-CR77015201001017496172 y CC-CR4501520122900000329 del Banco de Costa Rica, previa coordinación con el Departamento Financiero Contable; el cual tomará nota de lo resuelto para que solicite en favor del Fondo mencionado el traslado de cuotas correspondientes, para cuyos efectos se le enviará copia de los informes elaborados por la Dirección de Gestión Humana, la que también tomará nota para lo que corresponda. Se le previene a la persona interesada, que en el momento en que solicite acogerse al beneficio de jubilación deberá haber cancelado al Fondo de Jubilaciones y Pensiones la totalidad de la suma determinada por la Dirección de Gestión Humana para el reconocimiento de tiempo servido en otras instituciones del Estado. **Se declara acuerdo firme.**

## ARTÍCULO XVIII

**Documento N° 1034-20**

El Consejo Superior, en sesión N° 94-2020 celebrada el 30 de setiembre del 2020, artículo LV, tomó el acuerdo que literalmente dice:

“En sesión N° 64-2020 celebrada el 23 de junio del 2020, artículo XLVII, se tomó el acuerdo que literalmente dice:

“La máster Roxana Arrieta Meléndez, Directora interina y la licenciada Mauren Siles Mata, Jefa de Subproceso de Administración Salarial, mediante oficio N° PJ-DGH-SAS-1866-2020 del 4 de junio de 2020, remitieron lo siguiente:

“**Reconocimiento de Tiempo Servido en Otras**

**Instituciones del Estado para efectos de:**

**ANUALIDADES Y JUBILACION**

**DETALLE DEL ESTUDIO:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **NOMBRE:** | ANA KATARINA APU HIDALGO | |
| **N° CEDULA:** | [Valor] | |
| **PUESTO:** | JUEZ 3 | |
| **OFICINA:** | TRIBUNAL CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO | |
| **LUGAR PARA NOTIFICACIONES:** | Tiene asignado en Outlook. | |
| **FECHA DE PRESENTACION DE LA GESTIÓN:** | 02/10/2019. | |
| **FECHA EN QUE COMPLETA LA GESTIÓN:** | 02/10/2019. | |
| **RESULTADO DE ESTUDIO DE RECONOCIMIENTO DE TIEMPO SERVIDO EN OTRAS INSTITUCIONES DEL ESTADO PARA EFECTOS DE ANUALES Y JUBILACIÓN:** | **N° DE RTFJP:** | 2020003 |
| **TIEMPO A RECONOCER:** | 9 años, 3 meses y 13 días. |
| **INSTITUCIÓN DONDE LABORÓ:** | Ministerio de Hacienda |
| **MONTO A REINTEGRAR:** | ¢50,398,738.86 |
| **OBSERVACIONES:** | * *Estudio confeccionado y comunicado a la persona servidora judicial después del inicio de labores de la Junta Administradora del Fondo de Jubilaciones y Pensiones del Poder Judicial.* | |
| **RESUMEN RESPUESTA DE LA PERSONA SOLICITANTE A LA COMUNICACIÓN DE LA DEUDA:** | Es el interés de la persona solicitante el reconocimiento del presente estudio para efectos de anualidades y jubilación, ya que así lo manifestó en la respuesta a la comunicación de deuda. | |

Tal y como lo ha indicado el Consejo Superior en los últimos acuerdos, tomando en consideración la competencia que aún conserva el Consejo Superior para conocer de los asuntos relacionados con reconocimiento de tiempo servido para efectos de anualidades, se remite el estudio ***RTFJP nº* 2020003 (fecha de rige 02/10/2019)** para que ese órgano decida lo que corresponda por ser un trámite novedoso, el cual hasta la fecha no está autorizado, tal y como lo dispuso ese mismo órgano, en sesión n° 48-19 del 24 de mayo de 2019, artículo XVIII.

Asimismo, en caso de aprobarse el estudio ***RTFJP nº* 2020003**, se debe trasladar también a aprobación el cálculo del monto a reintegrar, a la Junta Administradora del Fondo de Jubilaciones y Pensiones del Poder Judicial por ser de su competencia. Dicho monto corresponde a la suma de ¢50,398,738.86.”

- 0 -

**Antecedentes**

**a)** La Corte Plena, en el artículo VI de la sesión 45-19 celebrada el 28 de octubre de 2019, tuvo por formalmente constituida la Junta Administradora del Fondo de Jubilaciones y Pensiones del Poder Judicial, a partir del 3 de febrero de 2020; a esos efectos para recibir el juramento constitucional de las personas nombradas como integrantes titulares y suplentes de la referida Junta, se señaló el 27 de enero de 2020.

**b)** Posteriormente, mediante sesión N° 4-2020 celebrada el 27 de enero de 2020, artículo VII, se acogió la solicitud planteada por el máster Montero Zúñiga, por lo que se dispuso a revocar el punto 2) del acuerdo tomado por esa Corte en la sesión N° 45-19 del 28 de octubre del 2019, artículo VI, referente a la fecha rige de la Junta Administradora del Fondo de Jubilaciones y Pensiones del Poder Judicial. Con motivo de lo resuelto en el punto anterior, se tuvo formalmente constituida la citada Junta Administradora a partir del 27 de enero de 2020

**c)** Finalmente, en sesión N° 56-2020 celebrada el 9 de junio de 2020, artículo XXXVI, se dispuso solicitar a la Dirección Jurídica realizar un análisis jurídico actualizado que contemplara el panorama jurídico actual, con el fin de determinar si con la entrada en funcionamiento de la Junta Administradora del Fondo de Pensiones y Jubilaciones del Poder Judicial, se mantendría lo regulado en el “Reglamento para el reconocimiento de tiempo servido en el Poder Judicial, en el Estado y sus instituciones para efecto del pago de anualidades y Jubilación en el Poder Judicial”, o si por el contrario, se encontraba derogado. Lo anterior, con la finalidad de determinar si este Consejo Superior podría aprobar las gestiones de reconocimiento de tiempo para efectos de anualidades, independientemente si la persona interesada gestionara el trámite de reconocimiento de tiempo para efectos jubilatorios.

Además, debería la Dirección de Gestión Humana separar estas solicitudes de reconocimiento de tiempo en dos informes diferentes, es decir, remitir a este Consejo Superior únicamente las gestiones de reconocimiento de tiempo servido para efecto de anualidades y a la Junta Administradora las gestiones de reconocimiento de tiempo servido para efectos jubilatorios, sin ser unificadas en un mismo documento.

Analizada por este Consejo la presente gestión, **se acordó: 1.)** Previamente a resolver lo que corresponda, estar a la espera del informe solicitado a la Dirección Jurídica en sesión N° 56-2020 celebrada el 9 de junio de 2020, artículo XXXVI, sobre el panorama jurídico actual, con el fin de determinar si este Consejo Superior puede aprobar las gestiones de reconocimiento de tiempo para efectos de anualidades. **2.)** Hacer este acuerdo de conocimiento de la licenciada Ana Katarina Apu Hidalgo, Jueza del Tribunal Contencioso Administrativo.

La Dirección de Gestión Humana tomará nota para lo de su cargo.**”**

**-**0-

En relación a lo anterior, en sesión N° 84-2020 celebrada el 28 de agosto de 2020, artículo XVI, al conocerse el informe N°DJ-C-524-2020 del 19 de agosto de 2020, presentado por el máster Rodrigo Alberto Campos Hidalgo, Director Jurídico, referente a si con la entrada en funcionamiento de la Junta Administradora del Fondo de Pensiones y Jubilaciones del Poder Judicial” se mantiene vigente el “Reglamento para el reconocimiento de tiempo servido en el Poder Judicial, en el Estado y sus instituciones para efecto del pago de anualidades y Jubilación en el Poder Judicial” (RTS). Y si el Consejo Superior puede aprobar “las gestiones de reconocimiento de tiempo para efectos de anualidades, independientemente si la persona interesada gestiona el trámite de reconocimiento de tiempo para efectos jubilatorios”, este Consejo, acogió el criterio presentado por el máster Rodrigo Alberto Campos Hidalgo, Director Jurídico interino en oficio N°DJ-C-524-2020 y lo hizo de conocimiento de la Dirección de Gestión Humana y de la Secretaría General de la Corte, para que remitieran a este Consejo todas las gestiones pendientes referente al Reconocimiento de Tiempo Servido en el Poder Judicial y en El Estado y sus Instituciones en el entendido que será únicamente para efectos de anualidades.

Al conocerse los informes N° PJ-DGH-SAS-1866-2020 y DJ-C-524-2020 elaborados por la Dirección de Gestión Humana y Dirección Jurídica, de acuerdo con lo resuelto por la Corte Plena en sesión N° 4-2020 celebrada el 27 de enero de 2020, artículo VII, en lo que interesa revocó el punto 2) del acuerdo tomado por la misma en la sesión N° 45-19 del 28 de octubre del 2019, artículo VI, referente a la fecha rige de la Junta Administradora del Fondo de Jubilaciones y Pensiones del Poder Judicial y con motivo de que se tuvo por formalmente constituida la citada Junta Administradora a partir del 27 de enero de 2020, **se acordó: 1.)** Reconocer para efectos únicamente de anualidades a la servidora Ana Katarina Apu Hidalgo, Jueza 3 del Tribunal Contencioso Administrativo, 9 años, 3 meses y 13 días, laborados para el Ministerio de Hacienda, a partir del 2 de octubre de 2019. **2.)** Trasladar el presente acuerdo a la Junta Administradora del Fondo de Jubilaciones y Pensiones del Poder Judicial, a fin de que resuelva lo correspondiente al reconocimiento de tiempo servido en otras instituciones para efectos de jubilación de la servidora Apu Hidalgo.**”**

- 0 -

Por unanimidad, **se acordó:** Reconocer para efectos de jubilación a la servidora Ana Katarina Apu Hidalgo, Jueza 3 del Tribunal Contencioso Administrativo, 9 años, 3 meses y 13 días, laborados para el Ministerio de Hacienda, a partir del 2 de octubre de 2019, con la obligación de reintegrar al Fondo de Jubilaciones y Pensiones del Poder Judicial la suma de ¢50,398,738.86 (cincuenta millones trescientos noventa y ocho mil setecientos treinta y ocho colones y ochenta y seis céntimos), que se le deducirá de su salario bruto en el tanto de 10% mensual hasta la cancelación total, o si lo prefiere, podrá depositarla en las cuentas corrientes números CC-CR77015201001017496172 y CC-CR4501520122900000329 del Banco de Costa Rica, previa coordinación con el Departamento Financiero Contable; el cual tomará nota de lo resuelto para que solicite en favor del Fondo mencionado el traslado de cuotas correspondientes, para cuyos efectos se le enviará copia de los informes elaborados por la Dirección de Gestión Humana, la que también tomará nota para lo que corresponda. Se le previene a la persona interesada, que en el momento en que solicite acogerse al beneficio de jubilación deberá haber cancelado al Fondo de Jubilaciones y Pensiones la totalidad de la suma determinada por la Dirección de Gestión Humana para el reconocimiento de tiempo servido en otras instituciones del Estado. **Se declara acuerdo firme.**

## ARTÍCULO XIX

**Documento N° 1032-20**

El Consejo Superior, en sesión N° 94-2020 celebrada el 30 de setiembre del 2020, artículo LIII, tomó el acuerdo que literalmente dice:

“En sesión N° 64-2020 celebrada el 23 de junio del 2020, artículo XLV, se tomó el acuerdo que literalmente dice:

“La máster Roxana Arrieta Meléndez, la licenciada Maureen Siles Mata, por su orden, Directora interina de Gestión Humana y Jefa de Subproceso Administración Salarial, en oficio Nº PJ-DGH-SAS-2147-2020 recibido el 12 de junio de 2020, comunicaron lo siguiente:

**“Reconocimiento de Tiempo Servido en Otras**

**Instituciones del Estado para efectos de:**

**ANUALIDADES Y JUBILACION**

1. **DETALLE DEL ESTUDIO:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **NOMBRE:** | MARIBEL VARGAS CHAVES | |
| **N° CEDULA:** | [Valor] | |
| **PUESTO:** | PERITO JUDICIAL 2 | |
| **OFICINA:** | OFICINA TRABAJO SOCIAL Y PSICOLOGIA II CIR.JUD. ZONA ATLANTICA | |
| **LUGAR PARA NOTIFICACIONES:** | Tiene asignado en Outlook. | |
| **FECHA DE PRESENTACION DE LA GESTIÓN:** | 25/04/2018 | |
| **FECHA EN QUE COMPLETA LA GESTIÓN:** | 11/06/2018 | |
| **RESULTADO DE ESTUDIO DE RECONOCIMIENTO DE TIEMPO SERVIDO EN OTRAS INSTITUCIONES DEL ESTADO PARA EFECTOS DE ANUALES Y JUBILACIÓN:** | **N° DE RTFJP:** | **2020009** |
| **TIEMPO A RECONOCER:** | 1 mes y 20 días. |
| **MONTO A REINTEGRAR:** | ¢323,765.76 |
| **INSTITUCIÓN DONDE LABORÓ:** | Inst Nal de Alcoh y Fármacodep - IAFA |
| **OBSERVACIONES:** | * *Estudio confeccionado y comunicado a la persona servidora judicial después del inicio de labores de la Junta Administradora del Fondo de Jubilaciones y Pensiones del Poder Judicial.* | |
| **RESUMEN RESPUESTA DE LA PERSONA SOLICITANTE A LA COMUNICACIÓN DE LA DEUDA:** | Es el interés de la persona solicitante el reconocimiento del presente estudio para efectos de anualidades y jubilación, ya que así lo manifestó en la respuesta a la comunicación de deuda. | |

Tal y como lo ha indicado el Consejo Superior en los últimos acuerdos, tomando en consideración la competencia que aún conserva el Consejo Superior para conocer de los asuntos relacionados con reconocimiento de tiempo servido para efectos de anualidades, se remite el estudio ***RTFJP nº 2020009*** ***(fecha de rige 11/06/2018)*** para que ese órgano decida lo que corresponda por ser un trámite novedoso, el cual hasta la fecha no está autorizado, tal y como lo dispuso ese mismo órgano, en sesión n° 48-19 del 24 de mayo de 2019, artículo XVIII.

Asimismo, en caso de aprobarse el estudio ***RTFJP nº 2020009***, se debe trasladar también a aprobación el cálculo del monto a reintegrar, a la Junta Administradora del Fondo de Jubilaciones y Pensiones del Poder Judicial por ser de su competencia. Dicho monto corresponde a la suma de ¢323,765.76.”

- 0 -

**Antecedentes**

**a)** La Corte Plena, en el artículo VI de la sesión 45-19 celebrada el 28 de octubre de 2019, tuvo por formalmente constituida la Junta Administradora del Fondo de Jubilaciones y Pensiones del Poder Judicial, a partir del 3 de febrero de 2020; a esos efectos para recibir el juramento constitucional de las personas nombradas como integrantes titulares y suplentes de la referida Junta, se señaló el 27 de enero de 2020.

**b)** Posteriormente, mediante sesión N° 4-2020 celebrada el 27 de enero de 2020, artículo VII, se acogió la solicitud planteada por el máster Montero Zúñiga, por lo que se dispuso a revocar el punto 2) del acuerdo tomado por esa Corte en la sesión N° 45-19 del 28 de octubre del 2019, artículo VI, referente a la fecha rige de la Junta Administradora del Fondo de Jubilaciones y Pensiones del Poder Judicial. Con motivo de lo resuelto en el punto anterior, se tuvo formalmente constituida la citada Junta Administradora a partir del 27 de enero de 2020

**c)** Finalmente, en sesión N° 56-2020 celebrada el 9 de junio de 2020, artículo XXXVI, se dispuso solicitar a la Dirección Jurídica realizar un análisis jurídico actualizado que contemplara el panorama jurídico actual, con el fin de determinar si con la entrada en funcionamiento de la Junta Administradora del Fondo de Pensiones y Jubilaciones del Poder Judicial, se mantendría lo regulado en el “Reglamento para el reconocimiento de tiempo servido en el Poder Judicial, en el Estado y sus instituciones para efecto del pago de anualidades y Jubilación en el Poder Judicial”, o si por el contrario, se encontraba derogado. Lo anterior, con la finalidad de determinar si este Consejo Superior podría aprobar las gestiones de reconocimiento de tiempo para efectos de anualidades, independientemente si la persona interesada gestionara el trámite de reconocimiento de tiempo para efectos jubilatorios.

Además, debería la Dirección de Gestión Humana separar estas solicitudes de reconocimiento de tiempo en dos informes diferentes, es decir, remitir a este Consejo Superior únicamente las gestiones de reconocimiento de tiempo servido para efecto de anualidades y a la Junta Administradora las gestiones de reconocimiento de tiempo servido para efectos jubilatorios, sin ser unificadas en un mismo documento.

Analizada por este Consejo la presente gestión, **se acordó: 1.)** Previamente a resolver lo que corresponda, estar a la espera del informe solicitado a la Dirección Jurídica en sesión N° 56-2020 celebrada el 9 de junio de 2020, artículo XXXVI, sobre el panorama jurídico actual, con el fin de determinar si este Consejo Superior puede aprobar las gestiones de reconocimiento de tiempo para efectos de anualidades. **2.)** Hacer este acuerdo de conocimiento de la señora Maribel Vargas Chaves, Perito Judicial de la Oficina de Trabajo Social y Psicología del Primer Circuito Judicial de la Zona Atlántica.

La Dirección de Gestión Humana tomará nota para lo de su cargo.**”**

-0-

En relación a lo anterior, en sesión N° 84-2020 celebrada el 28 de agosto de 2020, artículo XVI, al conocerse el informe N°DJ-C-524-2020 del 19 de agosto de 2020, presentado por el máster Rodrigo Alberto Campos Hidalgo, Director Jurídico, referente a si con la entrada en funcionamiento de la Junta Administradora del Fondo de Pensiones y Jubilaciones del Poder Judicial” se mantiene vigente el “Reglamento para el reconocimiento de tiempo servido en el Poder Judicial, en el Estado y sus instituciones para efecto del pago de anualidades y Jubilación en el Poder Judicial” (RTS). Y si el Consejo Superior puede aprobar “las gestiones de reconocimiento de tiempo para efectos de anualidades, independientemente si la persona interesada gestiona el trámite de reconocimiento de tiempo para efectos jubilatorios”, este Consejo, acogió el criterio presentado por el máster Rodrigo Alberto Campos Hidalgo, Director Jurídico interino en oficio N°DJ-C-524-2020 y lo hizo de conocimiento de la Dirección de Gestión Humana y de la Secretaría General de la Corte, para que remitieran a este Consejo todas las gestiones pendientes referente al Reconocimiento de Tiempo Servido en el Poder Judicial y en El Estado y sus Instituciones en el entendido que será únicamente para efectos de anualidades.

Al conocerse los informes N° PJ-DGH-SAS-2147-2020 y DJ-C-524-2020 elaborados por la Dirección de Gestión Humana y Dirección Jurídica, de acuerdo con lo resuelto por la Corte Plena en sesión N° 4-2020 celebrada el 27 de enero de 2020, artículo VII, en lo que interesa revocó el punto 2) del acuerdo tomado por la misma en la sesión N° 45-19 del 28 de octubre del 2019, artículo VI, referente a la fecha rige de la Junta Administradora del Fondo de Jubilaciones y Pensiones del Poder Judicial y con motivo de que se tuvo por formalmente constituida la citada Junta Administradora a partir del 27 de enero de 2020, **se acordó: 1.)** Reconocer para efectos únicamente de anualidades a la servidora Maribel Vargas Chaves, Perita Judicial 2 de la Oficina de Trabajo Social y Psicología del Segundo Circuito Judicial de la Zona Atlántica, 1 mes y 20 días, laborados para el Instituto sobre Alcoholismo y Farmacodependencia (IAFA), a partir del 11 de junio de 2018. **2.)** Trasladar el presente acuerdo a la Junta Administradora del Fondo de Jubilaciones y Pensiones del Poder Judicial, a fin de que resuelva lo correspondiente al reconocimiento de tiempo servido en otras instituciones para efectos de jubilación de la servidora Vargas Chaves.”

- 0 -

Por unanimidad, **se acordó:** Reconocer para efectos de jubilación a la servidora Maribel Vargas Chaves, Perita Judicial 2 de la Oficina de Trabajo Social y Psicología del Segundo Circuito Judicial de la Zona Atlántica, 1 mes y 20 días, laborados para el Instituto sobre Alcoholismo y Farmacodependencia (IAFA), a partir del 11 de junio de 2018, con la obligación de reintegrar al Fondo de Jubilaciones y Pensiones del Poder Judicial la suma de ¢323,765.76 (trescientos veintitrés mil setecientos sesenta y cinco colones y setenta y seis céntimos), que se le deducirá de su salario bruto en el tanto de 10% mensual hasta la cancelación total, o si lo prefiere, podrá depositarla en las cuentas corrientes números CC-CR77015201001017496172 y CC-CR4501520122900000329 del Banco de Costa Rica, previa coordinación con el Departamento Financiero Contable; el cual tomará nota de lo resuelto para que solicite en favor del Fondo mencionado el traslado de cuotas correspondientes, para cuyos efectos se le enviará copia de los informes elaborados por la Dirección de Gestión Humana, la que también tomará nota para lo que corresponda. Se le previene a la persona interesada, que en el momento en que solicite acogerse al beneficio de jubilación deberá haber cancelado al Fondo de Jubilaciones y Pensiones la totalidad de la suma determinada por la Dirección de Gestión Humana para el reconocimiento de tiempo servido en otras instituciones del Estado. Se le previene a la persona interesada, que en el momento en que solicite acogerse al beneficio de jubilación deberá haber cancelado al Fondo de Jubilaciones y Pensiones la totalidad de la suma determinada por la Dirección de Gestión Humana para el reconocimiento de tiempo servido en otras instituciones del Estado. **Se declara acuerdo firme.**

## ARTÍCULO XX

**Documento N° 1035-20**

El Consejo Superior, en sesión N° 94-2020 celebrada el 30 de setiembre del 2020, artículo LVI, se tomó el acuerdo que literalmente dice:

“En sesión N° 59-2020 celebrada el 16 de junio de 2020, artículo XXXVII, se tomó el acuerdo que literalmente dice:

“En sesión N° 56-2020 celebrada el 09 de junio de 2020, artículo XXXVII, se tomó el acuerdo cuya parte dispositiva dice:

“Previamente a resolver lo que corresponda. **se acordó: 1.)** Solicitar a la Dirección Jurídica realizar un análisis jurídico actualizado que contemple el panorama jurídico actual, con el fin de determinar si con la entrada en funcionamiento de la Junta Administradora del Fondo de Pensiones y Jubilaciones del Poder Judicial, se mantiene lo regulado en el “Reglamento para el reconocimiento de tiempo servido en el Poder Judicial, en el Estado y sus instituciones para efecto del pago de anualidades y Jubilación en el Poder Judicial”, o si por el contrario, se encuentra derogado. Lo anterior, con la finalidad de determinar si este Consejo Superior puede aprobar las gestiones de reconocimiento de tiempo para efectos de anualidades, independientemente si la persona interesada gestiona el trámite de reconocimiento de tiempo para efectos jubilatorios, por lo anterior, deberán recomendar lo que correspondan. **2.)** Deberá la Dirección de Gestión Humana separar estas solicitudes de reconocimiento de tiempo en dos informes diferentes, es decir, remitir a este Consejo Superior únicamente las gestiones de reconocimiento de tiempo servido para efecto de anualidades y a la Junta Administradora las gestiones de reconocimiento de tiempo servido para efectos jubilatorios, sin ser unificadas en un mismo documento. Por lo anterior, la Secretaría General de la Corte tomará las medidas que correspondan en caso de que la citada Dirección remita un informe con las dos gestiones en un mismo documento**.**”

-0-

Las másteres Roxana Arrieta Meléndez, Olga Guerrero Córdoba, y la licenciada Mauren Siles Mata, por su orden, Directora interina y Subdirectora interina y Jefa del Subproceso de Administración Salarial de la Dirección de Gestión Humana, en oficio N° PJ-DGH-SAS-1867-2020 del 4 de mayo de 2020, remitieron:

**“Reconocimiento de Tiempo Servido en Otras**

**Instituciones del Estado para efectos de:**

**ANUALIDADES Y JUBILACIÓN**

1. **DETALLE DEL ESTUDIO:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **NOMBRE:** | EDGAR ANDRES VARGAS TORRES | |
| **N° CEDULA:** | [Valor] | |
| **PUESTO:** | MEDICO RESIDENTE | |
| **OFICINA:** | DEPARTAMENTO DE MEDICINA LEGAL | |
| **LUGAR PARA NOTIFICACIONES:** | Tiene asignado en Outlook. | |
| **FECHA DE PRESENTACION DE LA GESTIÓN:** | 20/08/2019. | |
| **FECHA EN QUE COMPLETA LA GESTIÓN:** | 21/08/2019. | |
| **RESULTADO DE ESTUDIO DE RECONOCIMIENTO DE TIEMPO SERVIDO EN OTRAS INSTITUCIONES DEL ESTADO PARA EFECTOS DE ANUALES Y JUBILACIÓN:** | **N° DE RTFJP:** | 2020001 |
| **TIEMPO A RECONOCER:** | 1 año y 1 mes. |
| **MONTO A REINTEGRAR:** | ¢11,429,292.79 |
| **INSTITUCIÓN DONDE LABORÓ:** | CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL |
| **OBSERVACIONES:** | * *El Monto total a Reintegrar se calcula a valor presente de conformidad a lo establecido en el Reglamento para el Reconocimiento de Tiempo Servido en el Poder Judicial, en el Estado y sus Instituciones para efectos del Pago de Anualidades y Jubilación en el Poder Judicial, artículos 12 y 13.* * *Estudio confeccionado y comunicado a la persona servidora judicial después del inicio de labores de la Junta Administradora del Fondo de Jubilaciones y Pensiones del Poder Judicial.* | |
| **RESUMEN RESPUESTA DE LA PERSONA SOLICITANTE A LA COMUNICACIÓN DE LA DEUDA:** | Es el interés de la persona solicitante el reconocimiento del presente estudio para efectos de anualidades y jubilación, ya que así lo manifestó en la respuesta a la comunicación de deuda. | |

Tomando en consideración la competencia que aún conserva el Consejo Superior para conocer de los asuntos relacionados con reconocimiento de tiempo servido para efectos de anualidades, se remite el estudio ***RTFJP nº* 2020001 (fecha de rige 21/08/2019)** para que ese órgano decida lo que corresponda. Cabe indicar que, el tiempo total a reconocer es de **1 año y 1 mes laborado para la Caja Costarricense de Seguro Social.**

Asimismo, en caso de aprobarse el estudio ***RTFJP nº 2020001,*** se debe trasladar también a aprobación el cálculo del monto a reintegrar, a la Junta Administradora del Fondo de Jubilaciones y Pensiones del Poder Judicial por ser de su competencia. Dicho monto corresponde a la suma de **¢11,429,292.79.”**

(Documentos)

-0-

**Se acordó**:Estar a la espera del informe solicitado a la Dirección Jurídica en sesión N° 56-2020 celebrada el 9 de junio de 2020, artículo XXXVII.**”**

-0-

En relación a lo anterior, en sesión N° 84-2020 celebrada el 28 de agosto de 2020, artículo XVI, al conocerse el informe N°DJ-C-524-2020 del 19 de agosto de 2020, presentado por el máster Rodrigo Alberto Campos Hidalgo, Director Jurídico, referente a si con la entrada en funcionamiento de la Junta Administradora del Fondo de Pensiones y Jubilaciones del Poder Judicial” se mantiene vigente el “Reglamento para el reconocimiento de tiempo servido en el Poder Judicial, en el Estado y sus instituciones para efecto del pago de anualidades y Jubilación en el Poder Judicial” (RTS). Y si el Consejo Superior puede aprobar “las gestiones de reconocimiento de tiempo para efectos de anualidades, independientemente si la persona interesada gestiona el trámite de reconocimiento de tiempo para efectos jubilatorios”, este Consejo, acogió el criterio presentado por el máster Rodrigo Alberto Campos Hidalgo, Director Jurídico interino en oficio N°DJ-C-524-2020 y lo hizo de conocimiento de la Dirección de Gestión Humana y de la Secretaría General de la Corte, para que remitieran a este Consejo todas las gestiones pendientes referente al Reconocimiento de Tiempo Servido en el Poder Judicial y en El Estado y sus Instituciones en el entendido que será únicamente para efectos de anualidades.

Al conocerse los informes N° PJ-DGH-SAS-1867-2020 y DJ-C-524-2020 elaborados por la Dirección de Gestión Humana y Dirección Jurídica, de acuerdo con lo resuelto por la Corte Plena en sesión N° 4-2020 celebrada el 27 de enero de 2020, artículo VII, en lo que interesa revocó el punto 2) del acuerdo tomado por la misma en la sesión N° 45-19 del 28 de octubre del 2019, artículo VI, referente a la fecha rige de la Junta Administradora del Fondo de Jubilaciones y Pensiones del Poder Judicial y con motivo de que se tuvo por formalmente constituida la citada Junta Administradora a partir del 27 de enero de 2020, **se acordó: 1.)** Reconocer para efectos únicamente de anualidades al servidor Edgar Andrés Vargas Torres, Médico Residente del Departamento de Medicina Legal, 1 año y 1 mes, laborados para la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), a partir del 21 de agosto de 2019. **2.)** Trasladar el presente acuerdo a la Junta Administradora del Fondo de Jubilaciones y Pensiones del Poder Judicial, a fin de que resuelva lo correspondiente al reconocimiento de tiempo servido en otras instituciones para efectos de jubilación del servidor Vargas Torres.**”**”

(Documento)

- 0 -

Por unanimidad, **se acordó:** Reconocer para efectos de jubilación al servidor Edgar Andrés Vargas Torres, Médico Residente del Departamento de Medicina Legal, 1 año y 1 mes, laborados para la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), a partir del 21 de agosto de 2019, con la obligación de reintegrar al Fondo de Jubilaciones y Pensiones del Poder Judicial la suma de ¢11,429,292.79 (once millones cuatrocientos veintinueve mil doscientos noventa y dos colones y setenta y nueve céntimos), que se le deducirá de su salario bruto en el tanto de 10% mensual hasta la cancelación total, o si lo prefiere, podrá depositarla en las cuentas corrientes números CC-CR77015201001017496172 y CC-CR4501520122900000329 del Banco de Costa Rica, previa coordinación con el Departamento Financiero Contable; el cual tomará nota de lo resuelto para que solicite en favor del Fondo mencionado el traslado de cuotas correspondientes, para cuyos efectos se le enviará copia de los informes elaborados por la Dirección de Gestión Humana, la que también tomará nota para lo que corresponda. Se le previene a la persona interesada, que en el momento en que solicite acogerse al beneficio de jubilación deberá haber cancelado al Fondo de Jubilaciones y Pensiones la totalidad de la suma determinada por la Dirección de Gestión Humana para el reconocimiento de tiempo servido en otras instituciones del Estado. **Se declara acuerdo firme.**

**ARTÍCULO XXI**

**Documento N° 1027-20.**

Mediante copia de oficio número 9940-20 del 23 de octubre de 2020, el Consejo Superior del Poder Judicial, hace de conocimiento el acuerdo tomado en sesión N° 94-2020 celebrada el 30 de setiembre del 2020, artículo XLVIII que dice:

“En sesión N° 64-2020 celebrada el 23 de junio del 2020, artículo XLIV, se tomó el acuerdo que literalmente dice:

La máster Roxana Arrieta Meléndez, la licenciada Maureen Siles Mata, por su orden, Directora interina de Gestión Humana y Jefa de Subproceso Administración Salarial, en oficio Nº PJ-DGH-SAS-1868-2020 recibido el 12 de junio de 2020, comunicaron lo siguiente:

**“Solicitud de Reconocimiento de Tiempo Servido en Otras**

**Instituciones del Estado para efectos de:**

**ANUALIDADES Y JUBILACIÓN**

1. **DETALLE DEL ESTUDIO:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **NOMBRE:** | TEODORO ENRIQUE HIDALGO ZUÑIGA | |
| **N° CEDULA:** | [Valor] | |
| **PUESTO:** | INVESTIGADOR 1 | |
| **OFICINA:** | DIRECCION GENERAL | |
| **LUGAR PARA NOTIFICACIONES:** | Tiene asignado en Outlook. | |
| **FECHA DE PRESENTACION DE LA GESTIÓN:** | 14/10/2019. | |
| **FECHA EN QUE COMPLETA LA GESTIÓN:** | 14/10/2019. | |
| **RESULTADO DE ESTUDIO DE RECONOCIMIENTO DE TIEMPO SERVIDO EN OTRAS INSTITUCIONES DEL ESTADO PARA EFECTOS DE ANUALES Y JUBILACIÓN:** | **N° DE RTFJP:** | 2020005 |
| **TIEMPO A RECONOCER:** | 17 años y 11 meses. |
| **MONTO A REINTEGRAR:** | ¢66,328,748.73 |
| **INSTITUCIÓN DONDE LABORÓ:** | Instituto Costarricense de Electricidad - ICE |
| **OBSERVACIONES:** | * *Estudio confeccionado y comunicado a la persona servidora judicial después del inicio de labores de la Junta Administradora del Fondo de Jubilaciones y Pensiones del Poder Judicial.* | |
| **RESUMEN RESPUESTA DE LA PERSONA SOLICITANTE A LA COMUNICACIÓN DE LA DEUDA:** | Es el interés de la persona solicitante el reconocimiento del presente estudio para efectos de anualidades y jubilación, ya que así lo manifestó en la respuesta a la comunicación de deuda. | |

Tal y como lo ha indicado el Consejo Superior en los últimos acuerdos, tomando en consideración la competencia que aún conserva el Consejo Superior para conocer de los asuntos relacionados con reconocimiento de tiempo servido para efectos de anualidades, se remite el estudio **RTFJP nº 2020005 (fecha de rige 14/10/2019)** para que ese órgano decida lo que corresponda por ser un trámite novedoso, el cual hasta la fecha no está autorizado, tal y como lo dispuso ese mismo órgano, en sesión n° 48-19 del 24 de mayo de 2019, artículo XVIII.

Asimismo, en caso de aprobarse el estudio RTFJP nº 2020005, se debe trasladar también a aprobación el cálculo del monto a reintegrar, a la Junta Administradora del Fondo de Jubilaciones y Pensiones del Poder Judicial por ser de su competencia. Dicho monto corresponde a la suma de ¢66,328,748.73.”

- 0 -

**Antecedentes**

**a)** La Corte Plena, en el artículo VI de la sesión 45-19 celebrada el 28 de octubre de 2019, tuvo por formalmente constituida la Junta Administradora del Fondo de Jubilaciones y Pensiones del Poder Judicial, a partir del 3 de febrero de 2020; a esos efectos para recibir el juramento constitucional de las personas nombradas como integrantes titulares y suplentes de la referida Junta, se señaló el 27 de enero de 2020.

**b)** Posteriormente, mediante sesión N° 4-2020 celebrada el 27 de enero de 2020, artículo VII, se acogió la solicitud planteada por el máster Montero Zúñiga, por lo que se dispuso a revocar el punto 2) del acuerdo tomado por esa Corte en la sesión N° 45-19 del 28 de octubre del 2019, artículo VI, referente a la fecha rige de la Junta Administradora del Fondo de Jubilaciones y Pensiones del Poder Judicial. Con motivo de lo resuelto en el punto anterior, se tuvo formalmente constituida la citada Junta Administradora a partir del 27 de enero de 2020

**c)** Finalmente, en sesión N° 56-2020 celebrada el 9 de junio de 2020, artículo XXXVI, se dispuso solicitar a la Dirección Jurídica realizar un análisis jurídico actualizado que contemplara el panorama jurídico actual, con el fin de determinar si con la entrada en funcionamiento de la Junta Administradora del Fondo de Pensiones y Jubilaciones del Poder Judicial, se mantendría lo regulado en el “Reglamento para el reconocimiento de tiempo servido en el Poder Judicial, en el Estado y sus instituciones para efecto del pago de anualidades y Jubilación en el Poder Judicial”, o si por el contrario, se encontraba derogado. Lo anterior, con la finalidad de determinar si este Consejo Superior podría aprobar las gestiones de reconocimiento de tiempo para efectos de anualidades, independientemente si la persona interesada gestionara el trámite de reconocimiento de tiempo para efectos jubilatorios.

Además, debería la Dirección de Gestión Humana separar estas solicitudes de reconocimiento de tiempo en dos informes diferentes, es decir, remitir a este Consejo Superior únicamente las gestiones de reconocimiento de tiempo servido para efecto de anualidades y a la Junta Administradora las gestiones de reconocimiento de tiempo servido para efectos jubilatorios, sin ser unificadas en un mismo documento.

Analizada por este Consejo la presente gestión, **se acordó: 1.)** Previamente a resolver lo que corresponda, estar a la espera del informe solicitado a la Dirección Jurídica en sesión N° 56-2020 celebrada el 9 de junio de 2020, artículo XXXVI, sobre el panorama jurídico actual, con el fin de determinar si este Consejo Superior puede aprobar las gestiones de reconocimiento de tiempo para efectos de anualidades. **2.)** Hacer este acuerdo de conocimiento del señor Teodoro Enrique Hidalgo Zuñiga, Investigador 1 del Organismo de Investigación judicial.

La Dirección de Gestión Humana tomará nota para lo de su cargo.”

- 0 -

En relación a lo anterior, en sesión N° 84-2020 celebrada el 28 de agosto de 2020, artículo XVI, al conocerse el informe N°DJ-C-524-2020 del 19 de agosto de 2020, presentado por el máster Rodrigo Alberto Campos Hidalgo, Director Jurídico, referente a si con la entrada en funcionamiento de la Junta Administradora del Fondo de Pensiones y Jubilaciones del Poder Judicial” se mantiene vigente el “Reglamento para el reconocimiento de tiempo servido en el Poder Judicial, en el Estado y sus instituciones para efecto del pago de anualidades y Jubilación en el Poder Judicial” (RTS). Y si el Consejo Superior puede aprobar “las gestiones de reconocimiento de tiempo para efectos de anualidades, independientemente si la persona interesada gestiona el trámite de reconocimiento de tiempo para efectos jubilatorios”, este Consejo, acogió el criterio presentado por el máster Rodrigo Alberto Campos Hidalgo, Director Jurídico interino en oficio N° N°DJ-C-524-2020 y lo hizo de conocimiento de la Dirección de Gestión Humana y de la Secretaría General de la Corte, para que remitieran a este Consejo todas las gestiones pendientes referente al Reconocimiento de Tiempo Servido en el Poder Judicial y en El Estado y sus Instituciones en el entendido que será únicamente para efectos de anualidades.

Al conocerse los informes PJ-DGH-SAS-1868-2020 y DJ-C-524-2020 elaborados por la Dirección de Gestión Humana y Dirección Jurídica, de acuerdo con lo resuelto por la Corte Plena mediante sesión N° 4-2020 celebrada el 27 de enero de 2020, artículo VII, en lo que interesa revocó el punto 2) del acuerdo tomado por la misma en la sesión N° 45-19 del 28 de octubre del 2019, artículo VI, referente a la fecha rige de la Junta Administradora del Fondo de Jubilaciones y Pensiones del Poder Judicial y con motivo de lo resuelto en el punto anterior, se tuvo por formalmente constituida la citada Junta Administradora a partir del 27 de enero de 2020, **se acordó:** **1.)** Reconocer al servidor Teodoro Enrique Hidalgo Zúñiga, Investigador 1 de la Dirección General del Organismo de Investigación Judicial, únicamente para efectos de anualidades, 17 años y 11 meses, laborados para el Instituto Costarricense de Electricidad, a partir del 14 de octubre de 2019. **2.)** Trasladar el presente acuerdo a la Junta Administradora del Fondo de Jubilaciones y Pensiones del Poder Judicial a fin de que resuelva lo correspondiente al reconocimiento de tiempo servido en otras instituciones para efectos de jubilación del servidor Hidalgo Zúñiga.”

-0-

Por unanimidad, **se acordó:** Reconocer para efectos de jubilación al servidor Teodoro Enrique Hidalgo Zúñiga, Investigador 1 de la Dirección General del Organismo de Investigación Judicial, 17 años, 11 meses, laborados para el Instituto Costarricense de Electricidad, a partir del 14 de octubre de 2019, con la obligación de reintegrar al Fondo de Jubilaciones y Pensiones del Poder Judicial la suma de ¢66, 328,748.73 (sesenta y seis millones trescientos veintiocho mil setecientos cuarenta y ocho colones con setenta y tres céntimos), que se le deducirá de su salario bruto en el tanto de 10% mensual hasta la cancelación total, o si lo prefiere, podrá depositarla en las cuentas corrientes números CC-CR77015201001017496172 y CC-CR4501520122900000329 del Banco de Costa Rica, previa coordinación con el Departamento Financiero Contable; el cual tomará nota de lo resuelto para que solicite en favor del Fondo mencionado el traslado de cuotas correspondientes, para cuyos efectos se le enviará copia de los informes elaborados por la Dirección de Gestión Humana, la que también tomará nota para lo que corresponda. Se le previene a la persona interesada, que en el momento en que solicite acogerse al beneficio de jubilación deberá haber cancelado al Fondo de Jubilaciones y Pensiones la totalidad de la suma determinada por la Dirección de Gestión Humana para el reconocimiento de tiempo servido en otras instituciones del Estado. **Se declara acuerdo firme.**

**ARTÍCULO XXII**

**Documento N° 1025-20.**

Mediante copia de oficio número 9937-20 del 23 de octubre de 2020, el Consejo Superior del Poder Judicial, hace de conocimiento el acuerdo tomado en sesión N° 94-2020 celebrada el 30 de setiembre del 2020, artículo XLV que dice:

“En sesión N° 56-2020 celebrada el 09 de junio de 2020, artículo XXXVI, se tomó el acuerdo que literalmente dice:

En oficio número PJ-DGH-SAS-1706-2020, del 27 de abril de 2020, la máster Roxana Arrieta Meléndez y las licenciadas Olga Guerrero Córdoba y Mauren Siles Mata, por su orden, directora y subdirectora interinas de Gestión Humana y jefa de Subproceso de Administración Salarial, remitieron el siguiente informe:

“**Reconocimiento de Tiempo Servido en Otras**

**Instituciones del Estado para efectos de:**

**ANUALIDADES Y JUBILACIÓN**

1. **DETALLE DEL ESTUDIO:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **NOMBRE:** | JOSE FRANCISCO DE JESUS CORDERO CALDERON | |
| **N° CEDULA:** | [Valor] | |
| **PUESTO:** | JUEZ 1 | |
| **OFICINA:** | JUZGADO CONTRAVENCIONAL DE BAGACES | |
| **LUGAR PARA NOTIFICACIONES:** | Tiene asignado en Outlook. | |
| **FECHA DE PRESENTACION DE LA GESTIÓN:** | 28/05/2018. | |
| **FECHA EN QUE COMPLETA LA GESTIÓN:** | 28/05/2018. | |
| **RESULTADO DE ESTUDIO DE RECONOCIMIENTO DE TIEMPO SERVIDO EN OTRAS INSTITUCIONES DEL ESTADO PARA EFECTOS DE ANUALES Y JUBILACIÓN:** | **N° DE RTFJP:** | 2019139 |
| **TIEMPO A RECONOCER:** | 3 años, 4 meses y 1 día. |
| **MONTO A REINTEGRAR:** | ¢6,704,383.74 |
| **INSTITUCIÓN DONDE LABORÓ:** | Ministerio de Educación - MEP |
| **OBSERVACIONES:** | * El Monto total a Reintegrar se calcula a valor presente de conformidad a lo establecido en el Reglamento para el Reconocimiento de Tiempo Servido en el Poder Judicial, en el Estado y sus Instituciones para efectos del Pago de Anualidades y Jubilación en el Poder Judicial, artículos 12 y 13. * Estudio confeccionado y comunicado a la persona servidora judicial de previo al inicio de labores de la Junta Administradora del Fondo de Jubilaciones y Pensiones del Poder Judicial. | |
| **RESUMEN RESPUESTA DE LA PERSONA SOLICITANTE A LA COMUNICACIÓN DE LA DEUDA:** | Es el interés de la persona solicitante el reconocimiento del presente estudio para efectos de anualidades y jubilación ya que, ante la comunicación de este, no manifestó objeción alguna. | |

Tomando en consideración la competencia que aún conserva el Consejo Superior para conocer de los asuntos relacionados con reconocimiento de tiempo servido para efectos de anualidades, se remite el estudio ***RTFJP nº* 2019139 (fecha de rige 28/05/2018)** para que ese órgano decida lo que corresponda. Cabe indicar que, el tiempo total a reconocer es de **3 años, 4 meses y 1 día laborados en el Ministerio de Seguridad Pública (sic).**

Asimismo, en caso de aprobarse el estudio ***RTFJP nº 2019139,*** se debe trasladar también a aprobación el cálculo del monto a reintegrar, a la Junta Administradora del Fondo de Jubilaciones y Pensiones del Poder Judicial por ser de su competencia. Dicho monto corresponde a la suma de **¢6,704,383.74**

(…).”



- 0 -

Interviene el integrante Montero Zúñiga: “Me extraña que estas gestiones vengan para los dos efectos en el mismo documento, la Dirección de Gestión Humana debería remitirlo separado, es decir, el tema de anualidades para este Consejo Superior y las solicitudes de reconocimiento para jubilación, deberían ir directamente a la Junta Administradora del fondo, en dos informes separados”.

Manifiesta la integrante Pizarro Gutiérrez: “En este sentido, lo hemos estado conociendo y si se ha puesto un estribillo de que el Consejo Superior aprueba la gestión en el sentido de que la persona gestionante lo está solicitando en doble efecto y que por competencia le toca a la Junta Administradora del Fondo a la otra parte (efecto jubilatorio), lo anterior porque recientemente, aunque Auditoría después pidió sacar un informe relacionado con este tema, pero venía haciendo una advertencia de que si nosotros estamos aprobando solo para anualidades inclusive teníamos que iniciar ya un proceso casi que de lesividad, porque no podríamos reconocerlo, entonces en ese sentido, sí considero que tenemos que tener el debido cuidado y por eso yo no le veo objeción por lo menos de mi parte aprobarlo, porque dice el interés de la persona solicitante el conocimiento del presente estudio para efecto de anualidades y jubilación, sí a mí me indica que solamente es el interés para anualidades, yo sí tendría mi reserva en vista a ese criterio de Auditoría que aunque fue retirado por esa oficina, no sabemos en qué momento nos vuelven a presentar el informe y ahí sí estamos en un apuro mayor, entonces para mí es que se debe mantener siempre que la persona muestra el intereses para doble efecto, en ese sentido nosotros estamos conociendo, si más adelante la persona dice, no me interesa la parte jubilatoria, prácticamente fue que nos engañó. En este sentido yo estoy dando por entendido que la persona está diciendo aprueben las anualidades porque también voy a irme a la Junta Administradora a aprobar también para efectos jubilatorios”.

Agrega la magistrada vicepresidenta Solano Castro: “Porque no queda en suspenso hasta que se verifique lo de la Junta para aprobar esto”.

Interviene la integrante Castillo Vargas: “El magistrado presidente Cruz Castro y mi persona, hemos venido votando en ese sentido, de mantener en suspenso los que venían solamente para efectos del reconocimiento de anualidades, el otro día analizamos el tema que venían para los dos efectos y pensamos que eso no incluía la advertencia que nos hizo la Auditoría y que por tanto no veíamos el conflicto de aprobarlos, en ese sentido se aprobaron dos hace una semana, en este mismo formato, no en el otro formato, creo que alguien más también tenía un voto de alerta, de que nada más estamos a la espera de un criterio de la Dirección Jurídica, que se solicitó para un caso específico y que no nos ha llegado, es una solicitud eh para un solo efecto”.

Manifiesta la magistrada vicepresidenta Solano Castro: “Si este Consejo Superior aprueba para manualidades y remitimos a la Junta Administradora, el gestionante puede desertar de la solicitud ante la Junta Administradora, estando ya aprobado el tema de anualidades por parte de nosotros, es por lo anterior que debería quedar sujeto hasta que la Junta Administradora lo apruebe y pague lo que corresponda ante ese órgano Junta, entonces ya se aprueba el paquete completo”.

Adiciona el integrante Montero Zúñiga: “Es un tema de competencias, en el 2018 la se reforma la Ley Orgánica del Poder Judicial y le quitó al Consejo Superior las competencias de administrar el fondo de Jubilaciones y Pensiones, Con ese informe de Auditoría, que ellos remitieron pero de forma posterior lo dejaron sin efecto, hay un tema de fondo, en ningún artículo de la Ley Orgánica establece el tema de reconocimiento de tiempo servido para efectos de anualidad, eso no está contemplado en nuestra Ley Orgánica, la ley que contempla el reconocimiento de tiempo para anualidades es la Ley de Salarios, es donde indica que las personas que trabajan para el estado pueden reconocer el tiempo cuando se trasladen a otro órgano estatal, con eso se ha reconocido estos trámites, nuestra Ley Orgánica es la que establece que es para jubilación, porque tenemos nuestro propio fondo de jubilación, el Consejo Superior formalmente el 23 de mayo 2018, perdió competencias para administrar el fondo, pero la mantuvo porque la Corte Plena, extendió mientras se conformaba la Junta Administradora, pero el 26 de enero de este año, la Junta Administradora queda conformada, ahí el Consejo Superior pierde todas las competencias relacionadas con el Fondo de Jubilaciones y Pensiones, entre esas reconocer tiempo para efectos de jubilación. Hubo un Reglamento del 2006 aproximadamente, en donde la Corte Plena unido dos leyes, la de salarios y la ley Orgánica del Poder Judicial, en donde indicó que se debían reconocer para los dos efectos en el mismo momento, en consulta a profesionales en derecho, se ha mencionado que ese reglamento podía haber sido inconstitucional, porque limita el derecho a la persona gestionante para reconocer anualidades que le daba una ley y se lo condicionó al reconocimiento de jubilación, entonces el Consejo Superior, lo venía realizando de conformidad con el Reglamento aprobado por la Corte Plena, pero en este momento, una vez la Junta se conformó, el reconocimiento de tiempo que puede aprobar este Consejo Superior, por un tema de competencia, es únicamente para efectos de anualidades, que es justamente lo que hemos venido haciendo, reconocimiento para anualidades y remitiendo el tema de jubilación a la Junta Administradora.

En su momento yo consulté si deberíamos sacar una circular en el sentido de que todos los Reglamentos dictados por la Corte Plena, quedaban derogados a partir del 26 de enero del presente año, lo anterior porque las competencias reglamentarias corresponde a la Junta Administradora del Fondo, precisamente reglamentos como el de Inversiones, Riesgos, Reconocimiento de Tiempo, para el otorgamiento de Jubilaciones y Pensiones y 38 reglamentos que solicita la Superintendencia de Pensiones, los cuales habían sido emitidos por la Corte Plena, habían sido derogados a partir del 26 de enero del presente año, debido a la conformación de la Junta Administradora del Fondo, por lo anterior, la Junta Administradora ha venido dictando sus propios reglamentos, remitiéndolos a la Superintendencia de Pensiones para su aprobación como lo indica la Ley Orgánica del Poder Judicial, la Junta Administradora dictó su propio Reglamento de Reconocimiento de Tiempo Servido, que está aprobado por la Superintendencia de Pensiones, ese es el que se está aplicando para el reconocimiento de tiempo para esos efectos. Conversé el tema con el Auditor del Poder Judicial y me parece que no es del todo acertado el criterio emanado en ese informe que remitieron pero que posteriormente dejaron sin efecto, sin embargo, eso será otra discusión, lo que yo quiero que quede claro en este momento es que, a mí como integrante del Consejo Superior, me pide un compañero judicial el reconocimiento de tiempo servido sólo para anuales, yo se lo puedo reconocer, votaría a favor, porque hay una Ley que nos faculta reconocer para esos efectos, es parte de las competencias que tenemos como órgano llamado Consejo Superior, si el compañero hace o no la gestión ante la Junta Administradora, ya sería una decisión de él.

Consulte con doña Olga Guerrero de la Dirección de Gestión Humana sobre el formato de los informes que vienen los efectos (Jubilación y Anualidad) dos juntos en uno solo, me indicó que a este momento tienen un remanente de trámites de vieja data, entonces lo mandan bajo el modelo anterior. Hace poco conocimos la gestión que presentó la señora Magistrada Roxana Chacón Artavia, en donde manifestaba que no quería reconocer el tiempo servidor para jubilación, únicamente para anualidades, sin embargo Gestión Humana remitió el trámite bajo el anterior formato y este Consejo Superior si le reconoció solo para los efectos que ella indicaba, es decir, para anualidades, no condicionamos que tenía que hacerlo también para jubilación, creo que esos formatos que nos mandan genera esa confusión, deberían separar las gestiones a lo interno de Gestión Humana.

Aquí en sesión de Consejo Superior, no sé si asistió la magistrada vicepresidenta Solano Castro o el magistrado presidente Cruz Castro, se conversó sobre la derogatoria de la normativa y se indicó que no era necesario sacar ninguna circular, sin embargo, se mencionó que quedan en desuso debido a que hay una derogatoria tácita de esas normas al perder competencia el Consejo Superior”.

Expresa la magistrada vicepresidenta Solano Castro: Mi consulta radica en si ¿aún en los casos del fondo los servidores gestionan directamente ante la Junta Administradora o gestionan ante Gestión Humana, si es ante esta última, ellos remiten completamente la información al Consejo Superior?

Responde el integrante Montero Zúñiga: “Estoy viendo el caso que presenta el servidor Henry Francisco Quesada Castro, la gestión se presentó el 29 de noviembre de 2018, es un caso de vieja data, son anterior a que la Junta Administradora asumiera, debido a eso Gestión Humana lo tramitó bajo el modelo anterior y de esta forma lo remitió así al Consejo Superior”.

Adiciona la magistrada vicepresidenta Solano Castro: “Lo que tenemos que hacer es hablar con la Dirección de Gestión Humana para que las gestiones que se tramiten de este tema y sean de doble sentido, ellos lo redireccionen a cada órgano según la competencia, en informes separados”.

Agrega la integrante suplente Carmona Castro: “ Debemos considerar el “Principio de Simplificación de Trámites” en la Administración Pública, que obliga a cualquier órgano administrativo en caso que se presente un documento que no corresponde conocerlo porque está fuera de su competencia, tiene el deber de redireccionarlo de oficio para que sea conocido por la entidad correspondiente, me parece que sí hay una formulación expresa de la solicitud para que se le reconozca el tiempo servido para efectos de jubilación no quedaría fuera de orden o fuera de la Ley que el Consejo Superior lo remita ante la Junta Administradora del Fondo, si la persona únicamente está solicitando las anualidades, pues eso sí se avoca, pero si ya hay una gestión expresa de antemano de parte del administrador expresando que quiere las dos condiciones, en virtud del “Principio de Simplificación de Trámites” estaríamos en la obligación de remitir lo de oficio. Sería indicar que se remite a la Junta Administradora pero que el interesado debe ratificar el interés del reconocimiento de tiempo para efectos jubilatorios”.

Dice la máster Álvarez Acosta: “Considero que existe un antes y un después de la reforma número 9544, primero está la 7333 y después 9544 más lo que señala el integrante Montero Zúñiga, quien tiene que canalizar conforme a la normativa en fundamento a legalidad es la Dirección de Gestión Humana, aquí ellos sí tienen que dividir la gestión, no le corresponde al Consejo Superior analizar nada de lo que es la parte de jubilaciones, le corresponde a la Junta administradora del Fondo, va a ser como más trabajo para ustedes como Consejo Superior, si bien es cierto, existe el “Principio de Simplificación de Trámites”, la Dirección de Gestión Humana puede dividir el trámite y simplificar la gestión”.

Ratifica la magistrada vicepresidenta Solano Castro: “Hay que indicarle a la Dirección de Gestión Humana que divida el trámite una vez se presente la gestión ante esa Dirección.

Sería un tema distinto de Secretaría General de la Corte comunique a la Dirección de Gestión Humana que remitan correctamente los informes, porque el contenido de los artículos que tenemos que ver si hace enorme porque nos mandan lo que nos corresponde”.

Interviene el subsecretario Mora Rodríguez: “En línea con lo indicado por el integrante Montero Zúñiga, si se remite estas gestiones a la Junta Administradora puede haber una confusión, ese órgano entraría a analizar el tema del reconocimiento para de tiempo para jubilación de oficio, propongo indicarle al interesado, que en caso de que quiera gestionar el reconocimiento de tiempo para efectos jubilatorios, que acuda a la Junta Administradora, entonces se lo decimos al gestionante, que manifieste su interés a la Junta Administradora”.

La magistrada vicepresidenta Solano Castro añade: “En estos casos hay gestiones que presentan los interesados desde el año 2018 y manifestaron que era para el doble efecto, es decir, jubilaciones y anualidades, ahí existe una manifestación de voluntad del servidor judicial que lo desea para los dos efectos”.

Manifiesta el integrante Montero Zúñiga: “La Dirección de Gestión Humana les imponía eso, les hacía el cálculo de oficio para los dos temas, porque había un Reglamento que respaldaba el acto de la Dirección de Gestión Humana y de este Consejo Superior, debido a que Corte Plena había amarrado los dos temas, de esa forma lo entendió esa Dirección al igual que este Consejo Superior”.

Indica la magistrada vicepresidenta Solano Castro: “Entonces como punto número 1 del acuerdo sería aprobar el tema de anualidades y el punto dos sería indicarle a la persona gestionante que si desea el trámite para efectos jubilatorios debe recurrir a la Junta Administradora del Fondo de Jubilaciones y Pensiones”.

Adiciona la integrante Pizarro Gutiérrez: “Sigo con mi inquietud, aunque la Auditoría dejó sin efectos el informe que remitió sobre este tema, si había observaciones sobre el Reglamento, por ese motivo me gustaría el análisis jurídico respectivo”.

Interviene la integrante Castillo Vargas: “Indicaba sanciones muy fuertes al Consejo Superior por haber hecho reconocimientos en un solo efecto (anualidades), históricamente se han hecho desde el año 2000, donde mencionaba hasta procesos de lesividad en algunos casos, se puede estar de acuerdo o no con el fundamento ese informe, entiendo que el Consejo Superior tuvo criterios de la Dirección Jurídica en algunos casos, pero si hay inconsistencia sobre el tema, sin embargo, aunque el informe de Auditoría fue retirado, hay una alerta específica sobre este tema, inclusive, me correspondió analizarlo, sin embargo el señor Auditor solicitó retirarlo de previo a ser conocido en sesión, yo también he venido votando favorablemente esos que son muy recientes, porque dicen que vienen como solicitud para el doble efecto”.

Indica la magistrada vicepresidenta Solano Castro: “Estos que vienen para el doble efecto, nosotros tendríamos que dejar condicionado el de anualidades, no sólo si la Junta lo aprueba el reconocimiento para jubilaciones, sino también si pagan el monto que adeudarían al Fondo de Jubilaciones y Pensiones, entonces en este caso tendría más bien que verlo la Junta Administradora del Fondo y hasta que finalice la gestión ante ese órgano, se tramitaría el reconocimiento de las anualidades ante este Consejo Superior”.

Expone el integrante Montero Zúñiga: Entiendo la preocupación que manifiestan las integrantes Pizarro Gutiérrez y Castillo Vargas, sin embargo, las personas gestionantes posteriormente podrían indicarle a la Junta Administradora del Fondo que no desean continuar con el trámite para el reconocimiento de tiempo servido para efectos jubilatorios y este Consejo Superior ya le aprobó el reconocimiento de tiempo servido para efectos de anualidades, es decir, el Consejo Superior no tendría forma de enterarse de la desestimación de la solicitud ante la Junta Administradora, sin embargo, si existe una duda sobre la vigencia o no de los Reglamentos debido a lo remitido por la Auditoría, sugiero que le pidamos primero criterio jurídico a la Dirección Jurídica sobre la vigencia o no los Reglamentos y luego resolvemos, porque entonces si tenemos dudas de si el Reglamento está vigente o no, que yo estoy seguro que no está vigente, podríamos estar actuando en ilegalidades al no reconocer a las personas gestionantes el reconocimiento de tiempo servido para efectos de anualidades”.

La magistrada vicepresidenta Solano Castro expresa: “Sería solicitar criterio a la Dirección Jurídica, sobre si este Consejo Superior sigue siendo competente a efectos del reconocimiento de anualidades únicamente”.

Adiciona el integrante Montero Zúñiga: “Sí creo que si este Consejo Superior tiene dudas sobre la aplicación del Reglamento podría hacer la consulta jurídica primeramente”.

Responde la magistrada vicepresidenta Solano Castro: Consultamos a la Dirección Jurídica en los términos que hemos señalado y le otorgamos un plazo de 10 días para que remita lo que corresponda sobre la competencia del Consejo Superior para reconocer anualidades únicamente”.

- 0 -

De conformidad con las manifestaciones anterior, previamente a resolver lo que corresponda. **se acordó: 1.)** Solicitar a la Dirección Jurídica realizar un análisis jurídico actualizado que contemple el panorama jurídico actual, con el fin de determinar si con la entrada en funcionamiento de la Junta Administradora del Fondo de Pensiones y Jubilaciones del Poder Judicial, se mantiene lo regulado en el “Reglamento para el reconocimiento de tiempo servido en el Poder Judicial, en el Estado y sus instituciones para efecto del pago de anualidades y Jubilación en el Poder Judicial”, o si por el contrario, se encuentra derogado. Lo anterior, con la finalidad de determinar si este Consejo Superior puede aprobar las gestiones de reconocimiento de tiempo para efectos de anualidades, independientemente si la persona interesada gestiona el trámite de reconocimiento de tiempo para efectos jubilatorios, por lo anterior, deberán recomendar lo que correspondan. **2.)** Deberá la Dirección de Gestión Humana separar estas solicitudes de reconocimiento de tiempo en dos informes diferentes, es decir, remitir a este Consejo Superior únicamente las gestiones de reconocimiento de tiempo servido para efecto de anualidades y a la Junta Administradora las gestiones de reconocimiento de tiempo servido para efectos jubilatorios, sin ser unificadas en un mismo documento. Por lo anterior, la Secretaría General de la Corte tomará las medidas que correspondan en caso de que la citada Dirección remita un informe con las dos gestiones en un mismo documento.”

- 0 -

En relación a lo anterior, en sesión N° 84-2020 celebrada el 28 de agosto de 2020, artículo XVI, al conocerse el informe N°DJ-C-524-2020 del 19 de agosto de 2020, presentado por el máster Rodrigo Alberto Campos Hidalgo, Director Jurídico, referente a si con la entrada en funcionamiento de la Junta Administradora del Fondo de Pensiones y Jubilaciones del Poder Judicial” se mantiene vigente el “Reglamento para el reconocimiento de tiempo servido en el Poder Judicial, en el Estado y sus instituciones para efecto del pago de anualidades y Jubilación en el Poder Judicial” (RTS). Y si el Consejo Superior puede aprobar “las gestiones de reconocimiento de tiempo para efectos de anualidades, independientemente si la persona interesada gestiona el trámite de reconocimiento de tiempo para efectos jubilatorios”, este Consejo, acogió el criterio presentado por el máster Rodrigo Alberto Campos Hidalgo, Director Jurídico interino en oficio N° N°DJ-C-524-2020 y lo hizo de conocimiento de la Dirección de Gestión Humana y de la Secretaría General de la Corte, para que remitieran a este Consejo todas las gestiones pendientes referente al Reconocimiento de Tiempo Servido en el Poder Judicial y en El Estado y sus Instituciones en el entendido que será únicamente para efectos de anualidades.

Al conocerse los informes PJ-DGH-SAS-1706-2020 y DJ-C-524-2020 elaborados por la Dirección de Gestión Humana y Dirección Jurídica, de acuerdo con lo resuelto por la Corte Plena mediante sesión N° 4-2020 celebrada el 27 de enero de 2020, artículo VII, en lo que interesa revocó el punto 2) del acuerdo tomado por la misma en la sesión N° 45-19 del 28 de octubre del 2019, artículo VI, referente a la fecha rige de la Junta Administradora del Fondo de Jubilaciones y Pensiones del Poder Judicial y con motivo de lo resuelto en el punto anterior, se tuvo por formalmente constituida la citada Junta Administradora a partir del 27 de enero de 2020, **se acordó: 1.)** Reconocer al servidor José Francisco de Jesús Cordero Calderón, únicamente para efectos de anualidades, 3 años, 4 meses y 1 día, laborados para el Ministerio de Educación Pública, a partir del 28 de mayo de 2018. **2.)** Trasladar el presente acuerdo a la Junta Administradora del Fondo de Jubilaciones y Pensiones del Poder Judicial a fin de que resuelva lo correspondiente al reconocimiento de tiempo servido en otras instituciones para efectos de jubilación del servidor Cordero Calderón.**”**

-0-

**Por unanimidad, se acordó:** Reconocer para efectos de jubilación al servidor José Francisco de Jesús Cordero Calderón, juez 1 del Juzgado Contravencional de Bagaces se le reconoció tiempo servido en el Ministerio deEducación, 3 años, 4 meses y 1 día, laborados para el Ministerio de Educación Pública, a partir del 28 de mayo de 2018, con la obligación de reintegrar al Fondo de Jubilaciones y Pensiones del Poder Judicial la suma de ¢6,704,383.74 (seis millones setecientos cuatro mil trescientos ochenta y tres colones con setenta y cuatro céntimos), que se le deducirá de su salario bruto en el tanto de 10% mensual hasta la cancelación total, o si lo prefiere, podrá depositarla en las cuentas corrientes números CC-CR77015201001017496172 y CC-CR4501520122900000329 del Banco de Costa Rica, previa coordinación con el Departamento Financiero Contable; el cual tomará nota de lo resuelto para que solicite en favor del Fondo mencionado el traslado de cuotas correspondientes, para cuyos efectos se le enviará copia de los informes elaborados por la Dirección de Gestión Humana, la que también tomará nota para lo que corresponda. Se le previene a la persona interesada, que en el momento en que solicite acogerse al beneficio de jubilación deberá haber cancelado al Fondo de Jubilaciones y Pensiones la totalidad de la suma determinada por la Dirección de Gestión Humana para el reconocimiento de tiempo servido en otras instituciones del Estado. **Se declara acuerdo firme.**

**ARTÍCULO XXIII**

**Documento N° 1026-20.**

Mediante copia de oficio número 9939-20 del 23 de octubre de 2020, el Consejo Superior del Poder Judicial, hace de conocimiento el acuerdo tomado en sesión N° 94-2020 celebrada el 30 de setiembre del 2020, artículo XLVII que dice:

“En sesión N° 56-2020 celebrada el 09 de junio de 2020, artículo XLI, se tomó el acuerdo que literalmente dice:

“En oficio número PJ-DGH-SAS-1865-2020, del 4 de mayo de 2020, la máster Roxana Arrieta Meléndez y las licenciadas Olga Guerrero Córdoba y Mauren Siles Mata, por su orden, directora y subdirectora interinas de Gestión Humana y jefa de Subproceso de Administración Salarial, remitieron el siguiente informe:

**“Reconocimiento de Tiempo Servido en Otras**

**Instituciones del Estado para efectos de:**

**ANUALIDADES Y JUBILACIÓN**

**DETALLE DEL ESTUDIO:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **NOMBRE:** | MARIA MARLENE MIRANDA CARVAJAL | |
| **N° CEDULA:** | [Valor] | |
| **PUESTO:** | TÉCNICO JUDICIAL 2 | |
| **OFICINA:** | JUZGADO AGRARIO DEL II CIRCUITO JUD. DE ALAJUELA | |
| **LUGAR PARA NOTIFICACIONES:** | Tiene asignado en Outlook. | |
| **FECHA DE PRESENTACION DE LA GESTIÓN:** | 20/09/2019. | |
| **FECHA EN QUE COMPLETA LA GESTIÓN:** | 23/09/2019. | |
| **RESULTADO DE ESTUDIO DE RECONOCIMIENTO DE TIEMPO SERVIDO EN OTRAS INSTITUCIONES DEL ESTADO PARA EFECTOS DE ANUALES Y JUBILACIÓN:** | **N° DE RTFJP:** | 2020002 |
| **TIEMPO A RECONOCER:** | 7 meses y 6 días. |
| **MONTO A REINTEGRAR:** | ¢1,522,672.58 |
| **INSTITUCIÓN DONDE LABORÓ:** | CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL |
| **OBSERVACIONES:** | * *El Monto total a Reintegrar se calcula a valor presente de conformidad a lo establecido en el Reglamento para el Reconocimiento de Tiempo Servido en el Poder Judicial, en el Estado y sus Instituciones para efectos del Pago de Anualidades y Jubilación en el Poder Judicial, artículos 12 y 13.* * *Estudio confeccionado y comunicado a la persona servidora judicial después del inicio de labores de la Junta Administradora del Fondo de Jubilaciones y Pensiones del Poder Judicial.* | |
| **RESUMEN RESPUESTA DE LA PERSONA SOLICITANTE A LA COMUNICACIÓN DE LA DEUDA:** | Es el interés de la persona solicitante el reconocimiento del presente estudio para efectos de anualidades y jubilación, ya que así lo manifestó en la respuesta a la comunicación de deuda. | |

Tomando en consideración la competencia que aún conserva el Consejo Superior para conocer de los asuntos relacionados con reconocimiento de tiempo servido para efectos de anualidades, se remite el estudio ***RTFJP nº* 2020002 (fecha de rige 23/09/2019)** para que ese órgano decida lo que corresponda. Cabe indicar que, el tiempo total a reconocer es de **7 meses y 6 días laborados para la Caja Costarricense de Seguro Social.**

Asimismo, en caso de aprobarse el estudio ***RTFJP nº 2020002,*** se debe trasladar también a aprobación el cálculo del monto a reintegrar, a la Junta Administradora del Fondo de Jubilaciones y Pensiones del Poder Judicial por ser de su competencia. Dicho monto corresponde a la suma de **¢1,522,672.58**

(…).**”**

- 0 -

Previamente a resolver lo que corresponda. **se acordó: 1.)** Solicitar a la Dirección Jurídica realizar un análisis jurídico actualizado que contemple el panorama jurídico actual, con el fin de determinar si con la entrada en funcionamiento de la Junta Administradora del Fondo de Pensiones y Jubilaciones del Poder Judicial, se mantiene lo regulado en el “Reglamento para el reconocimiento de tiempo servido en el Poder Judicial, en el Estado y sus instituciones para efecto del pago de anualidades y Jubilación en el Poder Judicial”, o si por el contrario, se encuentra derogado. Lo anterior, con la finalidad de determinar si este Consejo Superior puede aprobar las gestiones de reconocimiento de tiempo para efectos de anualidades, independientemente si la persona interesada gestiona el trámite de reconocimiento de tiempo para efectos jubilatorios, por lo anterior, deberán recomendar lo que correspondan. **2.)** Deberá la Dirección de Gestión Humana separar estas solicitudes de reconocimiento de tiempo en dos informes diferentes, es decir, remitir a este Consejo Superior únicamente las gestiones de reconocimiento de tiempo servido para efecto de anualidades y a la Junta Administradora las gestiones de reconocimiento de tiempo servido para efectos jubilatorios, sin ser unificadas en un mismo documento. Por lo anterior, la Secretaría General de la Corte tomará las medidas que correspondan en caso de que la citada Dirección remita un informe con las dos gestiones en un mismo documento**.**”

- 0 -

En relación a lo anterior, en sesión N° 84-2020 celebrada el 28 de agosto de 2020, artículo XVI, al conocerse el informe N°DJ-C-524-2020 del 19 de agosto de 2020, presentado por el máster Rodrigo Alberto Campos Hidalgo, Director Jurídico, referente a si con la entrada en funcionamiento de la Junta Administradora del Fondo de Pensiones y Jubilaciones del Poder Judicial” se mantiene vigente el “Reglamento para el reconocimiento de tiempo servido en el Poder Judicial, en el Estado y sus instituciones para efecto del pago de anualidades y Jubilación en el Poder Judicial” (RTS). Y si el Consejo Superior puede aprobar “las gestiones de reconocimiento de tiempo para efectos de anualidades, independientemente si la persona interesada gestiona el trámite de reconocimiento de tiempo para efectos jubilatorios”, este Consejo, acogió el criterio presentado por el máster Rodrigo Alberto Campos Hidalgo, Director Jurídico interino en oficio N° N°DJ-C-524-2020 y lo hizo de conocimiento de la Dirección de Gestión Humana y de la Secretaría General de la Corte, para que remitieran a este Consejo todas las gestiones pendientes referente al Reconocimiento de Tiempo Servido en el Poder Judicial y en El Estado y sus Instituciones en el entendido que será únicamente para efectos de anualidades.

Al conocerse los informes PJ-DGH-SAS-1865-2020 y DJ-C-524-2020 elaborados por la Dirección de Gestión Humana y Dirección Jurídica, de acuerdo con lo resuelto por la Corte Plena mediante sesión N° 4-2020 celebrada el 27 de enero de 2020, artículo VII, en lo que interesa revocó el punto 2) del acuerdo tomado por la misma en la sesión N° 45-19 del 28 de octubre del 2019, artículo VI, referente a la fecha rige de la Junta Administradora del Fondo de Jubilaciones y Pensiones del Poder Judicial y con motivo de lo resuelto en el punto anterior, se tuvo por formalmente constituida la citada Junta Administradora a partir del 27 de enero de 2020, se **acordó:** **1.)** Reconocer a la servidora María Marlene Miranda Carvajal, Técnica Judicial del Juzgado Agrario del Segundo Circuito Judicial de Alajuela, para efectos de anualidades únicamente, 7 meses y 6 días, laborados para la Caja Costarricense del Seguro Social, a partir del 23 de setiembre de 2019. **2.)** Trasladar el presente acuerdo a la Junta Administradora del Fondo de Jubilaciones y Pensiones del Poder Judicial a fin de que resuelva lo correspondiente al reconocimiento de tiempo servido en otras instituciones para efectos de jubilación de la servidora Miranda Carvajal.”

-0-

Por unanimidad, **se acordó:** Reconocer para efectos de jubilación a la servidora María Marlene Miranda Carvajal, Técnica Judicial del Juzgado Agrario del Segundo Circuito Judicial de Alajuela, 7 meses y 6 días, laborados para la Caja Costarricense del Seguro Social, a partir del 23 de setiembre de 2019, con la obligación de reintegrar al Fondo de Jubilaciones y Pensiones del Poder Judicial la suma de ¢1,522,672.58 (un millón quinientos veintidós mil seiscientos setenta y dos colones con cincuenta y ocho céntimos), que se le deducirá de su salario bruto en el tanto de 10% mensual hasta la cancelación total, o si lo prefiere, podrá depositarla en las cuentas corrientes números CC-CR77015201001017496172 y CC-CR4501520122900000329 del Banco de Costa Rica, previa coordinación con el Departamento Financiero Contable; el cual tomará nota de lo resuelto para que solicite en favor del Fondo mencionado el traslado de cuotas correspondientes, para cuyos efectos se le enviará copia de los informes elaborados por la Dirección de Gestión Humana, la que también tomará nota para lo que corresponda. Se le previene a la persona interesada, que en el momento en que solicite acogerse al beneficio de jubilación deberá haber cancelado al Fondo de Jubilaciones y Pensiones la totalidad de la suma determinada por la Dirección de Gestión Humana para el reconocimiento de tiempo servido en otras instituciones del Estado. **Se declara acuerdo firme.**

## ARTÍCULO XXIV

**Documento N° 1028-2020.**

En oficio número del 23 de octubre de 2020, el señor Kenneth Aguilar Hernández, Prosecretario General interino de la Secretaría General de la Corte, remitió el acuerdo tomado por el Consejo Superior en sesión N° 94-2020 celebrada el 30 de setiembre del 2020, artículo XLIX, que literalmente dice:

“En sesión N° 56-2020 celebrada el 09 de junio de 2020, artículo XL, se tomó el acuerdo que literalmente dice:

“En oficio número PJ-DGH-SAS-1710-2020, del 27 de abril de 2020, la máster Roxana Arrieta Meléndez y las licenciadas Olga Guerrero Córdoba y Mauren Siles Mata, por su orden, directora y subdirectora interinas de Gestión Humana y jefa de Subproceso de Administración Salarial, remitieron el siguiente informe:

“**Reconocimiento de Tiempo Servido en Otras**

**Instituciones del Estado para efectos de:**

**ANUALIDADES Y JUBILACIÓN**

1. **DETALLE DEL ESTUDIO:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **NOMBRE:** | OLMAN GABRIEL SANCHEZ ARCE | |
| **N° CEDULA:** | [Valor] | |
| **PUESTO:** | INVESTIGADOR 1 | |
| **OFICINA:** | DIRECCION GENERAL | |
| **LUGAR PARA NOTIFICACIONES:** | Tiene asignado en Outlook. | |
| **FECHA DE PRESENTACION DE LA GESTIÓN:** | 27/06/2019. | |
| **FECHA EN QUE COMPLETA LA GESTIÓN:** | 27/06/2019. | |
| **RESULTADO DE ESTUDIO DE RECONOCIMIENTO DE TIEMPO SERVIDO EN OTRAS INSTITUCIONES DEL ESTADO PARA EFECTOS DE ANUALES Y JUBILACIÓN:** | **N° DE RTFJP:** | 2019137 |
| **TIEMPO A RECONOCER:** | 9 años, 2 meses y 16 días. |
| **MONTO A REINTEGRAR:** | ¢22,807,153.40 |
| **INSTITUCIÓN DONDE LABORÓ:** | CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL |
| **OBSERVACIONES:** | * El Monto total a Reintegrar se calcula a valor presente de conformidad a lo establecido en el Reglamento para el Reconocimiento de Tiempo Servido en el Poder Judicial, en el Estado y sus Instituciones para efectos del Pago de Anualidades y Jubilación en el Poder Judicial, artículos 12 y 13. * Estudio confeccionado y comunicado a la persona servidora judicial de previo al inicio de labores de la Junta Administradora del Fondo de Jubilaciones y Pensiones del Poder Judicial. | |
| **RESUMEN RESPUESTA DE LA PERSONA SOLICITANTE A LA COMUNICACIÓN DE LA DEUDA:** | Es el interés de la persona solicitante el reconocimiento del presente estudio para efectos de anualidades y jubilación ya que, ante la comunicación de este, no manifestó objeción alguna. | |

Tomando en consideración la competencia que aún conserva el Consejo Superior para conocer de los asuntos relacionados con reconocimiento de tiempo servido para efectos de anualidades, se remite el estudio ***RTFJP nº* 2019137 (fecha de rige 27/06/2019)** para que ese órgano decida lo que corresponda. Cabe indicar que, el tiempo total a reconocer es de **9 años, 2 meses y 16 días laborados para la Caja Costarricense de Seguro Social.**

Asimismo, en caso de aprobarse el estudio ***RTFJP nº 2019137,*** se debe trasladar también a aprobación el cálculo del monto a reintegrar, a la Junta Administradora del Fondo de Jubilaciones y Pensiones del Poder Judicial por ser de su competencia. Dicho monto corresponde a la suma de **¢22,807,153.40**

(…).”



- 0 -

Previamente a resolver lo que corresponda. **se acordó: 1.)** Solicitar a la Dirección Jurídica realizar un análisis jurídico actualizado que contemple el panorama jurídico actual, con el fin de determinar si con la entrada en funcionamiento de la Junta Administradora del Fondo de Pensiones y Jubilaciones del Poder Judicial, se mantiene lo regulado en el “Reglamento para el reconocimiento de tiempo servido en el Poder Judicial, en el Estado y sus instituciones para efecto del pago de anualidades y Jubilación en el Poder Judicial”, o si por el contrario, se encuentra derogado. Lo anterior, con la finalidad de determinar si este Consejo Superior puede aprobar las gestiones de reconocimiento de tiempo para efectos de anualidades, independientemente si la persona interesada gestiona el trámite de reconocimiento de tiempo para efectos jubilatorios, por lo anterior, deberán recomendar lo que correspondan. **2.)** Deberá la Dirección de Gestión Humana separar estas solicitudes de reconocimiento de tiempo en dos informes diferentes, es decir, remitir a este Consejo Superior únicamente las gestiones de reconocimiento de tiempo servido para efecto de anualidades y a la Junta Administradora las gestiones de reconocimiento de tiempo servido para efectos jubilatorios, sin ser unificadas en un mismo documento. Por lo anterior, la Secretaría General de la Corte tomará las medidas que correspondan en caso de que la citada Dirección remita un informe con las dos gestiones en un mismo documento**.**”

- 0 -

En relación a lo anterior, en sesión N° 84-2020 celebrada el 28 de agosto de 2020, artículo XVI, al conocerse el informe N°DJ-C-524-2020 del 19 de agosto de 2020, presentado por el máster Rodrigo Alberto Campos Hidalgo, Director Jurídico, referente a si con la entrada en funcionamiento de la Junta Administradora del Fondo de Pensiones y Jubilaciones del Poder Judicial” se mantiene vigente el “Reglamento para el reconocimiento de tiempo servido en el Poder Judicial, en el Estado y sus instituciones para efecto del pago de anualidades y Jubilación en el Poder Judicial” (RTS). Y si el Consejo Superior puede aprobar “las gestiones de reconocimiento de tiempo para efectos de anualidades, independientemente si la persona interesada gestiona el trámite de reconocimiento de tiempo para efectos jubilatorios”, este Consejo, acogió el criterio presentado por el máster Rodrigo Alberto Campos Hidalgo, Director Jurídico interino en oficio N° N°DJ-C-524-2020 y lo hizo de conocimiento de la Dirección de Gestión Humana y de la Secretaría General de la Corte, para que remitieran a este Consejo todas las gestiones pendientes referente al Reconocimiento de Tiempo Servido en el Poder Judicial y en El Estado y sus Instituciones en el entendido que será únicamente para efectos de anualidades.

Al conocerse los informes PJ-DGH-SAS-1710-2020 y DJ-C-524-2020 elaborados por la Dirección de Gestión Humana y Dirección Jurídica, de acuerdo con lo resuelto por la Corte Plena mediante sesión N° 4-2020 celebrada el 27 de enero de 2020, artículo VII, en lo que interesa revocó el punto 2) del acuerdo tomado por la misma en la sesión N° 45-19 del 28 de octubre del 2019, artículo VI, referente a la fecha rige de la Junta Administradora del Fondo de Jubilaciones y Pensiones del Poder Judicial y con motivo de lo resuelto en el punto anterior, se tuvo por formalmente constituida la citada Junta Administradora a partir del 27 de enero de 2020, se acordó: 1.) Reconocer al servidor Olman Gabriel Sánchez Arce, Investigador 1 de la Dirección General del Organismo de Investigación Judicial, únicamente para efectos de anualidades, 9 años, 2 meses y 16 días, laborados en la Caja Costarricense del Seguro Social, a partir del 27 de junio de 2019. 2.) Trasladar el presente acuerdo a la Junta Administradora del Fondo de Jubilaciones y Pensiones del Poder Judicial a fin de que resuelva lo correspondiente al reconocimiento de tiempo servido en otras instituciones para efectos de jubilación del servidor Sánchez Arce.”

-0-

Por unanimidad, **se acordó:** Reconocer para efectos de jubilación al servidor Olman Gabriel Sánchez Arce, Investigador 1 de la Dirección General del Organismo de Investigación Judicial, 9 años, 2 meses y 16 días, laborados en la Caja Costarricense del Seguro Social, a partir del 27 de junio de 2019, con la obligación de reintegrar al Fondo de Jubilaciones y Pensiones del Poder Judicial la suma de ¢22,807,153.40 (Veintidós millones ochocientos siete mil ciento cincuenta y tres colones con cuarenta céntimos), que se le deducirá de su salario bruto en el tanto de 10% mensual hasta la cancelación total, o si lo prefiere, podrá depositarla en las cuentas corrientes números CC-CR77015201001017496172 y CC-CR4501520122900000329 del Banco de Costa Rica, previa coordinación con el Departamento Financiero Contable; el cual tomará nota de lo resuelto para que solicite en favor del Fondo mencionado el traslado de cuotas correspondientes, para cuyos efectos se le enviará copia de los informes elaborados por la Dirección de Gestión Humana, la que también tomará nota para lo que corresponda. Se le previene a la persona interesada, que en el momento en que solicite acogerse al beneficio de jubilación deberá haber cancelado al Fondo de Jubilaciones y Pensiones la totalidad de la suma determinada por la Dirección de Gestión Humana para el reconocimiento de tiempo servido en otras instituciones del Estado. **Se declara acuerdo firme**.

## ARTÍCULO XXV

**Documento N° 1030-2020.**

En oficio número 9943-2020 del 23 de octubre de 2020 del 23 de octubre de 2020, el señor Kenneth Aguilar Hernández, Prosecretario General interino de la Secretaría General de la Corte, remitió el acuerdo tomado por el Consejo Superior, en sesión número 94-2020 celebrada el 30 de setiembre del 2020, artículo LI, que dice:

“En sesión N° 56-2020 celebrada el 09 de junio de 2020, artículo XXXVII, que literalmente dice:

“En oficio número PJ-DGH-SAS-1709-2020, del 27 de abril de 2020, la máster Roxana Arrieta Meléndez y las licenciadas Olga Guerrero Córdoba y Mauren Siles Mata, por su orden, directora y subdirectora interinas de Gestión Humana y jefa de Subproceso de Administración Salarial, remitieron el siguiente informe:

“**Reconocimiento de Tiempo Servido en Otras**

**Instituciones del Estado para efectos de:**

**ANUALIDADES Y JUBILACIÓN**

1. **DETALLE DEL ESTUDIO:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **NOMBRE:** | NANCY MARCEL ALPIZAR ROJAS | |
| **N° CEDULA:** | [Valor] | |
| **PUESTO:** | PERITO JUDICIAL 2 | |
| **OFICINA:** | OFICINA TRABAJO SOCIAL GRECIA | |
| **LUGAR PARA NOTIFICACIONES:** | Tiene asignado en Outlook. | |
| **FECHA DE PRESENTACION DE LA GESTIÓN:** | 31/05/2019. | |
| **FECHA EN QUE COMPLETA LA GESTIÓN:** | 20/06/2019. | |
| **RESULTADO DE ESTUDIO DE RECONOCIMIENTO DE TIEMPO SERVIDO EN OTRAS INSTITUCIONES DEL ESTADO PARA EFECTOS DE ANUALES Y JUBILACIÓN:** | **N° DE RTFJP:** | 2019131 |
| **TIEMPO A RECONOCER:** | 2 meses y 28 días. |
| **MONTO A REINTEGRAR:** | ¢850,896.19 |
| **INSTITUCIÓN DONDE LABORÓ:** | CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL |
| **OBSERVACIONES:** | * El Monto total a Reintegrar se calcula a valor presente de conformidad a lo establecido en el Reglamento para el Reconocimiento de Tiempo Servido en el Poder Judicial, en el Estado y sus Instituciones para efectos del Pago de Anualidades y Jubilación en el Poder Judicial, artículos 12 y 13. * Estudio confeccionado y comunicado a la persona servidora judicial de previo al inicio de labores de la Junta Administradora del Fondo de Jubilaciones y Pensiones del Poder Judicial. | |
| **RESUMEN RESPUESTA DE LA PERSONA SOLICITANTE A LA COMUNICACIÓN DE LA DEUDA:** | Es el interés de la persona solicitante el reconocimiento del presente estudio para efectos de anualidades y jubilación ya que, ante la comunicación de este, no manifestó objeción alguna. | |

Tomando en consideración la competencia que aún conserva el Consejo Superior para conocer de los asuntos relacionados con reconocimiento de tiempo servido para efectos de anualidades, se remite el estudio ***RTFJP nº* 2019131 (fecha de rige 20/06/2019)** para que ese órgano decida lo que corresponda. Cabe indicar que, el tiempo total a reconocer es de **2 meses y 28 días laborados en la Caja Costarricense de Seguro Social.**

Asimismo, en caso de aprobarse el estudio ***RTFJP nº 2019131,*** se debe trasladar también a aprobación el cálculo del monto a reintegrar, a la Junta Administradora del Fondo de Jubilaciones y Pensiones del Poder Judicial por ser de su competencia. Dicho monto corresponde a la suma de **¢850,896.19**

(…).”

-0-

Previamente a resolver lo que corresponda. **se acordó: 1.)** Solicitar a la Dirección Jurídica realizar un análisis jurídico actualizado que contemple el panorama jurídico actual, con el fin de determinar si con la entrada en funcionamiento de la Junta Administradora del Fondo de Pensiones y Jubilaciones del Poder Judicial, se mantiene lo regulado en el “Reglamento para el reconocimiento de tiempo servido en el Poder Judicial, en el Estado y sus instituciones para efecto del pago de anualidades y Jubilación en el Poder Judicial”, o si por el contrario, se encuentra derogado. Lo anterior, con la finalidad de determinar si este Consejo Superior puede aprobar las gestiones de reconocimiento de tiempo para efectos de anualidades, independientemente si la persona interesada gestiona el trámite de reconocimiento de tiempo para efectos jubilatorios, por lo anterior, deberán recomendar lo que correspondan. **2.)** Deberá la Dirección de Gestión Humana separar estas solicitudes de reconocimiento de tiempo en dos informes diferentes, es decir, remitir a este Consejo Superior únicamente las gestiones de reconocimiento de tiempo servido para efecto de anualidades y a la Junta Administradora las gestiones de reconocimiento de tiempo servido para efectos jubilatorios, sin ser unificadas en un mismo documento. Por lo anterior, la Secretaría General de la Corte tomará las medidas que correspondan en caso de que la citada Dirección remita un informe con las dos gestiones en un mismo documento**.**”

-0-

En relación a lo anterior, en sesión N° 84-2020 celebrada el 28 de agosto de 2020, artículo XVI, al conocerse el informe N°DJ-C-524-2020 del 19 de agosto de 2020, presentado por el máster Rodrigo Alberto Campos Hidalgo, Director Jurídico, referente a si con la entrada en funcionamiento de la Junta Administradora del Fondo de Pensiones y Jubilaciones del Poder Judicial” se mantiene vigente el “Reglamento para el reconocimiento de tiempo servido en el Poder Judicial, en el Estado y sus instituciones para efecto del pago de anualidades y Jubilación en el Poder Judicial” (RTS). Y si el Consejo Superior puede aprobar “las gestiones de reconocimiento de tiempo para efectos de anualidades, independientemente si la persona interesada gestiona el trámite de reconocimiento de tiempo para efectos jubilatorios”, este Consejo, acogió el criterio presentado por el máster Rodrigo Alberto Campos Hidalgo, Director Jurídico interino en oficio N°DJ-C-524-2020 y lo hizo de conocimiento de la Dirección de Gestión Humana y de la Secretaría General de la Corte, para que remitieran a este Consejo todas las gestiones pendientes referente al Reconocimiento de Tiempo Servido en el Poder Judicial y en El Estado y sus Instituciones en el entendido que será únicamente para efectos de anualidades.

Al conocerse los informes N°s PJ-DGH-SAS-1709-2020 y DJ-C-524-2020 elaborados por la Dirección de Gestión Humana y Dirección Jurídica, de acuerdo con lo resuelto por la Corte Plena en sesión N° 4-2020 celebrada el 27 de enero de 2020, artículo VII, en lo que interesa revocó el punto 2) del acuerdo tomado por la misma en la sesión N° 45-19 del 28 de octubre del 2019, artículo VI, referente a la fecha rige de la Junta Administradora del Fondo de Jubilaciones y Pensiones del Poder Judicial y con motivo de que se tuvo por formalmente constituida la citada Junta Administradora a partir del 27 de enero de 2020, se acordó: 1.) Reconocer para efectos únicamente de anualidades a la servidora Nancy Marcel Alpízar Rojas, Perita Judicial 2 de la Oficina de Trabajo Social de Grecia, 2 meses y 28 días, laborados para la Caja Costarricense de Seguro Social (CCCSS), a partir del 20 de junio de 2019. 2.) Trasladar el presente acuerdo a la Junta Administradora del Fondo de Jubilaciones y Pensiones del Poder Judicial, a fin de que resuelva lo correspondiente al reconocimiento de tiempo servido en otras instituciones para efectos de jubilación de la servidora Alpízar Rojas.”

-0-

Por unanimidad, **se acordó:** Reconocer para efectos de jubilación a la servidora Nancy Marcel Alpízar Rojas, Perita Judicial 2 de la Oficina de Trabajo Social de Grecia, 2 meses y 28 días, laborados para la Caja Costarricense de Seguro Social (CCCSS), a partir del 20 de junio de 2019, con la obligación de reintegrar al Fondo de Jubilaciones y Pensiones del Poder Judicial la suma de ¢850,896.19 (Ochocientos cincuenta mil ochocientos noventa y seis colones con diecinueve céntimos) que se le deducirá de su salario bruto en el tanto de 10% mensual hasta la cancelación total, o si lo prefiere, podrá depositarla en las cuentas corrientes números CC-CR77015201001017496172 y CC-CR4501520122900000329 del Banco de Costa Rica, previa coordinación con el Departamento Financiero Contable; el cual tomará nota de lo resuelto para que solicite en favor del Fondo mencionado el traslado de cuotas correspondientes, para cuyos efectos se le enviará copia de los informes elaborados por la Dirección de Gestión Humana, la que también tomará nota para lo que corresponda. Se le previene a la persona interesada, que en el momento en que solicite acogerse al beneficio de jubilación deberá haber cancelado al Fondo de Jubilaciones y Pensiones la totalidad de la suma determinada por la Dirección de Gestión Humana para el reconocimiento de tiempo servido en otras instituciones del Estado. **Se declara acuerdo firme**.

## ARTÍCULO XXVI

**Documento N° 1031-2020.**

En oficio número 9944-2020 del 23 de octubre de 2020, el servidor Kenneth Aguilar Hernández, Prosecretario General interino de la Secretaría General de la Corte, remitió copia del acuerdo tomado por el Consejo Superior en sesión N° 94-2020 celebrada el 30 de setiembre del 2020, artículo LII, que dice:

**“**En sesión N° 56-2020 celebrada el 09 de junio de 2020, artículo XXXVIII, se tomó el acuerdo que literalmente dice:

“En oficio número PJ-DGH-SAS-1711-2020, del 27 de abril de 2020, la máster Roxana Arrieta Meléndez y las licenciadas Olga Guerrero Córdoba y Mauren Siles Mata, por su orden, directora y subdirectora interinas de Gestión Humana y jefa de Subproceso de Administración Salarial, remitieron el siguiente informe:

“**Reconocimiento de Tiempo Servido en Otras**

**Instituciones del Estado para efectos de:**

**ANUALIDADES Y JUBILACIÓN**

1. **DETALLE DEL ESTUDIO:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **NOMBRE:** | CARLOS GILBERTO PANIAGUA BARRANTES | |  |
| **N° CEDULA:** | [Valor] | |  |
| **PUESTO:** | MÉDICO 3 | |  |
| **OFICINA:** | SECCION MEDICINA DEL TRABAJO | |  |
| **LUGAR PARA NOTIFICACIONES:** | Tiene asignado en Outlook. | |  |
| **FECHA DE PRESENTACION DE LA GESTIÓN:** | 02/07/2019. | |  |
| **FECHA EN QUE COMPLETA LA GESTIÓN:** | 02/07/2019. | |  |
| **RESULTADO DE ESTUDIO DE RECONOCIMIENTO DE TIEMPO SERVIDO EN OTRAS INSTITUCIONES DEL ESTADO PARA EFECTOS DE ANUALES Y JUBILACIÓN:** | **N° DE RTFJP:** | 2019132 |  |
| **TIEMPO A RECONOCER:** | 11 meses y 14 días. | |
| **MONTO A REINTEGRAR:** | ¢5,009,308.77 | |
| **INSTITUCIÓN DONDE LABORÓ:** | Ministerio de Salud | |
| **OBSERVACIONES:** | * El Monto total a Reintegrar se calcula a valor presente de conformidad a lo establecido en el Reglamento para el Reconocimiento de Tiempo Servido en el Poder Judicial, en el Estado y sus Instituciones para efectos del Pago de Anualidades y Jubilación en el Poder Judicial, artículos 12 y 13. * Estudio confeccionado y comunicado a la persona servidora judicial de previo al inicio de labores de la Junta Administradora del Fondo de Jubilaciones y Pensiones del Poder Judicial. | |  |
| **RESUMEN RESPUESTA DE LA PERSONA SOLICITANTE A LA COMUNICACIÓN DE LA DEUDA:** | Es el interés de la persona solicitante el reconocimiento del presente estudio para efectos de anualidades y jubilación ya que, ante la comunicación de este, no manifestó objeción alguna. | |  |
|  |  |  |  |

Tomando en consideración la competencia que aún conserva el Consejo Superior para conocer de los asuntos relacionados con reconocimiento de tiempo servido para efectos de anualidades, se remite el estudio ***RTFJP nº* 2019132 (fecha de rige 02/07/2019)** para que ese órgano decida lo que corresponda. Cabe indicar que, el tiempo total a reconocer es de **11 meses y 14 días laborados para el Ministerio de Salud.**

Asimismo, en caso de aprobarse el estudio ***RTFJP nº 2019132,*** se debe trasladar también a aprobación el cálculo del monto a reintegrar, a la Junta Administradora del Fondo de Jubilaciones y Pensiones del Poder Judicial por ser de su competencia. Dicho monto corresponde a la suma de **¢5,009,308.77**

(…).”

-0-

Previamente a resolver lo que corresponda. **se acordó: 1.)** Solicitar a la Dirección Jurídica realizar un análisis jurídico actualizado que contemple el panorama jurídico actual, con el fin de determinar si con la entrada en funcionamiento de la Junta Administradora del Fondo de Pensiones y Jubilaciones del Poder Judicial, se mantiene lo regulado en el “Reglamento para el reconocimiento de tiempo servido en el Poder Judicial, en el Estado y sus instituciones para efecto del pago de anualidades y Jubilación en el Poder Judicial”, o si por el contrario, se encuentra derogado. Lo anterior, con la finalidad de determinar si este Consejo Superior puede aprobar las gestiones de reconocimiento de tiempo para efectos de anualidades, independientemente si la persona interesada gestiona el trámite de reconocimiento de tiempo para efectos jubilatorios, por lo anterior, deberán recomendar lo que correspondan. **2.)** Deberá la Dirección de Gestión Humana separar estas solicitudes de reconocimiento de tiempo en dos informes diferentes, es decir, remitir a este Consejo Superior únicamente las gestiones de reconocimiento de tiempo servido para efecto de anualidades y a la Junta Administradora las gestiones de reconocimiento de tiempo servido para efectos jubilatorios, sin ser unificadas en un mismo documento. Por lo anterior, la Secretaría General de la Corte tomará las medidas que correspondan en caso de que la citada Dirección remita un informe con las dos gestiones en un mismo documento**.**”

-0-

En relación a lo anterior, en sesión N° 84-2020 celebrada el 28 de agosto de 2020, artículo XVI, al conocerse el informe N°DJ-C-524-2020 del 19 de agosto de 2020, presentado por el máster Rodrigo Alberto Campos Hidalgo, Director Jurídico, referente a si con la entrada en funcionamiento de la Junta Administradora del Fondo de Pensiones y Jubilaciones del Poder Judicial” se mantiene vigente el “Reglamento para el reconocimiento de tiempo servido en el Poder Judicial, en el Estado y sus instituciones para efecto del pago de anualidades y Jubilación en el Poder Judicial” (RTS). Y si el Consejo Superior puede aprobar “las gestiones de reconocimiento de tiempo para efectos de anualidades, independientemente si la persona interesada gestiona el trámite de reconocimiento de tiempo para efectos jubilatorios”, este Consejo, acogió el criterio presentado por el máster Rodrigo Alberto Campos Hidalgo, Director Jurídico interino en oficio N°DJ-C-524-2020 y lo hizo de conocimiento de la Dirección de Gestión Humana y de la Secretaría General de la Corte, para que remitieran a este Consejo todas las gestiones pendientes referente al Reconocimiento de Tiempo Servido en el Poder Judicial y en El Estado y sus Instituciones en el entendido que será únicamente para efectos de anualidades.

Al conocerse los informes PJ-DGH-SAS-1711-2020 y DJ-C-524-2020 elaborados por la Dirección de Gestión Humana y Dirección Jurídica, de acuerdo con lo resuelto por la Corte Plena en sesión N° 4-2020 celebrada el 27 de enero de 2020, artículo VII, en lo que interesa revocó el punto 2) del acuerdo tomado por la misma en la sesión N° 45-19 del 28 de octubre del 2019, artículo VI, referente a la fecha rige de la Junta Administradora del Fondo de Jubilaciones y Pensiones del Poder Judicial y con motivo de que se tuvo por formalmente constituida la citada Junta Administradora a partir del 27 de enero de 2020, se acordó: 1.) Reconocer para efectos únicamente de anualidades al servidor Carlos Gilberto Paniagua Barrantes, Médico 3 de la Sección de Medicina de Trabajo, 11 meses y 14 días, laborados para el Ministerio de Salud, a partir del 2 de julio de 2019. 2.) Trasladar el presente acuerdo a la Junta Administradora del Fondo de Jubilaciones y Pensiones del Poder Judicial, a fin de que resuelva lo correspondiente al reconocimiento de tiempo servido en otras instituciones para efectos de jubilación del servidor Paniagua Barrantes.”

-0-

Por unanimidad, **se acordó:** Reconocer para efectos de jubilaciónal servidor Carlos Gilberto Paniagua Barrantes, Médico 3 de la Sección de Medicina de Trabajo, 11 meses y 14 días, laborados para el Ministerio de Salud, a partir del 2 de julio de 2019, con la obligación de reintegrar al Fondo de Jubilaciones y Pensiones del Poder Judicial la suma de ¢5,009,308.77 (cinco millones nueve mil trescientos ocho colones con setenta y siete céntimos), que se le deducirá de su salario bruto en el tanto de 10% mensual hasta la cancelación total, o si lo prefiere, podrá depositarla en las cuentas corrientes números CC-CR77015201001017496172 y CC-CR4501520122900000329 del Banco de Costa Rica, previa coordinación con el Departamento Financiero Contable; el cual tomará nota de lo resuelto para que solicite en favor del Fondo mencionado el traslado de cuotas correspondientes, para cuyos efectos se le enviará copia de los informes elaborados por la Dirección de Gestión Humana, la que también tomará nota para lo que corresponda. Se le previene a la persona interesada, que en el momento en que solicite acogerse al beneficio de jubilación deberá haber cancelado al Fondo de Jubilaciones y Pensiones la totalidad de la suma determinada por la Dirección de Gestión Humana para el reconocimiento de tiempo servido en otras instituciones del Estado. **Se declara acuerdo firme.**

## ARTÍCULO XXVII

**Documento N° 1029-2020.**

En oficio número 9942-2020, del 23 de octubre de 2020, el servidor Kenneth Aguilar Hernández, Prosecretario General interino de la Secretaría General de la Corte, remitió copia del acuerdo tomado por el Consejo Superior en sesión número 94-2020 celebrada el 30 de setiembre del 2020, artículo L, que dice:

**“**En sesión N° 64-2020 celebrada el 23 de junio del 2020, artículo XLVI, se tomó el acuerdo que literalmente dice:

“La máster Roxana Arrieta Meléndez y la licenciada Mauren Siles Mata, por su orden, Directora interina de la Dirección de Gestión Humana y Jefa de Subproceso de Administración Salarial, mediante oficio N° PJ-DGH-SAS-2133-2020 del 4 de junio de 2020, gestionaron:

**“Reconocimiento de Tiempo Servido en Otras**

**Instituciones del Estado para efectos de:**

**ANUALIDADES Y JUBILACION**

1. **DETALLE DEL ESTUDIO:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **NOMBRE:** | KRISTI PAOLA ARIAS MORA | |
| **N° CEDULA:** | [Valor] | |
| **PUESTO:** | PROFESIONAL EN DERECHO 3B | |
| **OFICINA:** | SALA PRIMERA | |
| **LUGAR PARA NOTIFICACIONES:** | Tiene asignado en Outlook. | |
| **FECHA DE PRESENTACION DE LA GESTIÓN:** | 13/03/2019. | |
| **FECHA EN QUE COMPLETA LA GESTIÓN:** | 13/03/2019. | |
| **RESULTADO DE ESTUDIO DE RECONOCIMIENTO DE TIEMPO SERVIDO EN OTRAS INSTITUCIONES DEL ESTADO PARA EFECTOS DE ANUALES Y JUBILACIÓN:**  **TIEMPO TOTAL A RECONOCER: 16 años y 5 meses.  MONTO TOTAL A REINTEGRAR: ¢78,093,668.07** | **N° DE RTFJP:** | **2020016** |
| **TIEMPO A RECONOCER:** | 3 años y 15 días. |
| **MONTO A REINTEGRAR:** | ¢12,638,285.66 |
| **INSTITUCIÓN DONDE LABORÓ:** | Ministerio de Cultura Juventud y Deportes |
| **N° DE RTFJP:** | **2020015** |
| **TIEMPO A RECONOCER:** | 5 años, 2 meses y 11 días. |
| **MONTO A REINTEGRAR:** | ¢11,854,711.05 |
| **INSTITUCIÓN DONDE LABORÓ:** | Tribunal Supremo de Elecciones - TSE |
| **N° DE RTFJP:** | **2020017** |
| **TIEMPO A RECONOCER:** | 4 meses y 2 días. |
| **MONTO A REINTEGRAR:** | ¢1,854,730.77 |
| **INSTITUCIÓN DONDE LABORÓ:** | Ministerio de Obras Púb. y Transp.- MOPT |
| **N° DE RTFJP:** | **2019098** |
| **TIEMPO A RECONOCER:** | 7 años, 9 meses y 1 día. |
| **MONTO A REINTEGRAR:** | ¢51,299,771.30 |
| **INSTITUCIÓN DONDE LABORÓ:** | Dirección Nacional de Notariado (DNN) |
| **N° DE RTFJP:** | **2020018** |
| **TIEMPO A RECONOCER:** | 1 mes y 1 día. |
| **MONTO A REINTEGRAR:** | ¢446,169.29 |
| **INSTITUCIÓN DONDE LABORÓ:** | CONSEJO NACIONAL DE VIALIDAD |
| **OBSERVACIONES:** | * *Estudios confeccionados y comunicados a la persona servidora judicial después del inicio de labores de la Junta Administradora del Fondo de Jubilaciones y Pensiones del Poder Judicial.* | |
| **RESUMEN RESPUESTA DE LA PERSONA SOLICITANTE A LA COMUNICACIÓN DE LA DEUDA:** | Es el interés de la persona solicitante el reconocimiento del presente estudio para efectos de anualidades y jubilación, ya que así lo manifestó en la respuesta a la comunicación de deuda. | |

Tal y como lo ha indicado el Consejo Superior en los últimos acuerdos, tomando en consideración la competencia que aún conserva el Consejo Superior para conocer de los asuntos relacionados con reconocimiento de tiempo servido para efectos de anualidades, se remite el estudio ***RTFJP nº 2019098, RTFJP nº 2020015, RTFJP nº 2020016, RTFJP nº 2020017, RTFJP nº* 2020018 (fecha de rige 13/03/2019)** para que ese órgano decida lo que corresponda por ser un trámite novedoso, el cual hasta la fecha no está autorizado, tal y como lo dispuso ese mismo órgano, en sesión n° 48-19 del 24 de mayo de 2019, artículo XVIII.

Asimismo, en caso de aprobarse el estudio ***RTFJP nº 2019098, RTFJP nº 2020015, RTFJP nº 2020016, RTFJP nº 2020017, RTFJP nº* 2020018**, se debe trasladar también a aprobación el cálculo del monto a reintegrar, a la Junta Administradora del Fondo de Jubilaciones y Pensiones del Poder Judicial por ser de su competencia. Dicho monto corresponde a la suma de ¢78,093,668.07.”

- 0 -

**Antecedentes**

**a)** La Corte Plena, en el artículo VI de la sesión 45-19 celebrada el 28 de octubre de 2019, tuvo por formalmente constituida la Junta Administradora del Fondo de Jubilaciones y Pensiones del Poder Judicial, a partir del 3 de febrero de 2020; a esos efectos para recibir el juramento constitucional de las personas nombradas como integrantes titulares y suplentes de la referida Junta, se señaló el 27 de enero de 2020.

**b)** Posteriormente, mediante sesión N° 4-2020 celebrada el 27 de enero de 2020, artículo VII, se acogió la solicitud planteada por el máster Montero Zúñiga, por lo que se dispuso a revocar el punto 2) del acuerdo tomado por esa Corte en la sesión N° 45-19 del 28 de octubre del 2019, artículo VI, referente a la fecha rige de la Junta Administradora del Fondo de Jubilaciones y Pensiones del Poder Judicial. Con motivo de lo resuelto en el punto anterior, se tuvo formalmente constituida la citada Junta Administradora a partir del 27 de enero de 2020

**c)** Finalmente, en sesión N° 56-2020 celebrada el 9 de junio de 2020, artículo XXXVI, se dispuso solicitar a la Dirección Jurídica realizar un análisis jurídico actualizado que contemplara el panorama jurídico actual, con el fin de determinar si con la entrada en funcionamiento de la Junta Administradora del Fondo de Pensiones y Jubilaciones del Poder Judicial, se mantendría lo regulado en el “Reglamento para el reconocimiento de tiempo servido en el Poder Judicial, en el Estado y sus instituciones para efecto del pago de anualidades y Jubilación en el Poder Judicial”, o si por el contrario, se encontraba derogado. Lo anterior, con la finalidad de determinar si este Consejo Superior podría aprobar las gestiones de reconocimiento de tiempo para efectos de anualidades, independientemente si la persona interesada gestionara el trámite de reconocimiento de tiempo para efectos jubilatorios.

Además, debería la Dirección de Gestión Humana separar estas solicitudes de reconocimiento de tiempo en dos informes diferentes, es decir, remitir a este Consejo Superior únicamente las gestiones de reconocimiento de tiempo servido para efecto de anualidades y a la Junta Administradora las gestiones de reconocimiento de tiempo servido para efectos jubilatorios, sin ser unificadas en un mismo documento.

Analizada por este Consejo la presente gestión, **se acordó: 1.)** Previamente a resolver lo que corresponda, estar a la espera del informe solicitado a la Dirección Jurídica en sesión N° 56-2020 celebrada el 9 de junio de 2020, artículo XXXVI, sobre el panorama jurídico actual, con el fin de determinar si este Consejo Superior puede aprobar las gestiones de reconocimiento de tiempo para efectos de anualidades. **2.)** Hacer este acuerdo de conocimiento de la licenciada Kristi Paola Arias Mora, Profesional en Derecho 3B de la Sala Primera.

La Dirección de Gestión Humana tomará nota para lo de su cargo.**”**

- 0 -

En relación a lo anterior, en sesión N° 84-2020 celebrada el 28 de agosto de 2020, artículo XVI, al conocerse el informe N°DJ-C-524-2020 del 19 de agosto de 2020, presentado por el máster Rodrigo Alberto Campos Hidalgo, Director Jurídico, referente a si con la entrada en funcionamiento de la Junta Administradora del Fondo de Pensiones y Jubilaciones del Poder Judicial” se mantiene vigente el “Reglamento para el reconocimiento de tiempo servido en el Poder Judicial, en el Estado y sus instituciones para efecto del pago de anualidades y Jubilación en el Poder Judicial” (RTS). Y si el Consejo Superior puede aprobar “las gestiones de reconocimiento de tiempo para efectos de anualidades, independientemente si la persona interesada gestiona el trámite de reconocimiento de tiempo para efectos jubilatorios”, este Consejo, acogió el criterio presentado por el máster Rodrigo Alberto Campos Hidalgo, Director Jurídico interino en oficio N° N°DJ-C-524-2020 y lo hizo de conocimiento de la Dirección de Gestión Humana y de la Secretaría General de la Corte, para que remitieran a este Consejo todas las gestiones pendientes referente al Reconocimiento de Tiempo Servido en el Poder Judicial y en El Estado y sus Instituciones en el entendido que será únicamente para efectos de anualidades.

Al conocerse los informes PJ-DGH-SAS-2133-2020 y DJ-C-524-2020 elaborados por la Dirección de Gestión Humana y Dirección Jurídica, de acuerdo con lo resuelto por la Corte Plena mediante sesión N° 4-2020 celebrada el 27 de enero de 2020, artículo VII, en lo que interesa revocó el punto 2) del acuerdo tomado por la misma en la sesión N° 45-19 del 28 de octubre del 2019, artículo VI, referente a la fecha rige de la Junta Administradora del Fondo de Jubilaciones y Pensiones del Poder Judicial y con motivo de lo resuelto en el punto anterior, se tuvo por formalmente constituida la citada Junta Administradora a partir del 27 de enero de 2020, **se acordó**: **1.)** Reconocer a la servidora Kristi Paola Arias Mora, Profesional en Derecho 3B de la Sala Primera, únicamente para efectos de anualidades, 3 años y 15 días, laborados para el Ministerio de Cultura Juventud y Deportes, 5 años, 2 meses y 11 días, laborados en el Tribunal Supremo de Elecciones; 4 meses y 2 días, laborados en el Ministerio de Obras Públicas y Transportes; 7 años, 9 meses y 1 día, laborados en la Dirección Nacional de Notariado y finalmente 1 mes y 1 día, laborados en el Consejo Nacional de Viabilidad, a partir del 13 de marzo de 2019. **2.)**Trasladar el presente acuerdo a la Junta Administradora del Fondo de Jubilaciones y Pensiones del Poder Judicial a fin de que resuelva lo correspondiente al reconocimiento de tiempo servido en otras instituciones para efectos de jubilación de la servidora Arias Mora.**”**

-0-

Por unanimidad, **se acordó:** Reconocer para efectos de jubilación a la servidora Kristi Paola Arias Mora, Profesional en Derecho 3B de la Sala Primera, 3 años y 15 días, laborados para el Ministerio de Cultura Juventud y Deportes, 5 años, 2 meses y 11 días, laborados en el Tribunal Supremo de Elecciones; 4 meses y 2 días, laborados en el Ministerio de Obras Públicas y Transportes; 7 años, 9 meses y 1 día, laborados en la Dirección Nacional de Notariado y finalmente 1 mes y 1 día, laborados en el Consejo Nacional de Viabilidad, a partir del 13 de marzo de 2019, con la obligación de reintegrar al Fondo de Jubilaciones y Pensiones del Poder Judicial la suma de ¢12,638,285.66 (doce millones seiscientos treinta y ocho mil doscientos ochenta y cinco colones con cinco céntimos), ¢11,854,711.05 (once millones ochocientos cincuenta y cuatro mil setecientos once colones con cinco céntimos), ¢1,854,730.77 (un millón ochocientos cincuenta y cuatro mil setecientos treinta colones con setenta y siete céntimos), ¢51,299,771.30 (cincuenta y un millones doscientos noventa y nueve mil setecientos setenta y un colones con treinta céntimos) y ¢446,169.29 (cuatrocientos cuarenta y seis mil ciento sesenta y nueve colones con veintinueve céntimos), respectivamente, que se le deducirá de su salario bruto en el tanto de 10% mensual hasta la cancelación total, o si lo prefiere, podrá depositarla en las cuentas corrientes números CC-CR77015201001017496172 y CC-CR4501520122900000329 del Banco de Costa Rica, previa coordinación con el Departamento Financiero Contable; el cual tomará nota de lo resuelto para que solicite en favor del Fondo mencionado el traslado de cuotas correspondientes, para cuyos efectos se le enviará copia de los informes elaborados por la Dirección de Gestión Humana, la que también tomará nota para lo que corresponda. Se le previene a la persona interesada, que en el momento en que solicite acogerse al beneficio de jubilación deberá haber cancelado al Fondo de Jubilaciones y Pensiones la totalidad de la suma determinada por la Dirección de Gestión Humana para el reconocimiento de tiempo servido en otras instituciones del Estado. **Se declara acuerdo firme.**

## ARTÍCULO XXVIII

**Documento N° 1017-2020.**

En oficio número PJ-DGH-AP-4035-2020 del 19 de octubre de 2020, la licenciada Olga Guerrero Córdoba, el licenciado Carlos Lizano Alfaro y la licenciada Leda Córdoba Montero, por su orden, Subdirectora interina de Gestión Humana, Jefe interino de Administración de Personal y Coordinadora de la Unidad de Jubilaciones y Pensiones, remitieron el siguiente informe:

“Para los efectos del conocimiento de la Junta Administradora del Fondo de Jubilaciones y Pensiones del Poder Judicial, esta Dirección en fecha 13 de octubre de 2020, recibió la gestión del señor Paulo Agustín Camacho Alpizar, mediante la cual solicita se le otorgue la pensión por el fallecimiento de su esposa la funcionaria judicial fallecida María Gabriela Calvo Ramírez, por lo que a continuación se procede a detallar:

1. **Información personal y laboral de la señora María Gabriela Calvo Ramírez.**

* De conformidad con la información sustraída del Registro Civil, al momento de su deceso la servidora Calvo Ramírez contaba con 42 años, 10 meses y 17 días de edad.
* Estado civil, casada.
* Condición de nombramiento en el Poder Judicial, propietaria.
* Tiempo servido, 19 años, 10 meses y 21 días.

1. **Normativa que regula la gestión.**

Ley N° 9544, Reforma al Régimen de Jubilaciones y Pensiones del Poder Judicial, artículo 224:

“Los servidores judiciales **con veinte o más años de servicio en el Poder Judicial** podrán acogerse a una jubilación ordinaria igual a un ochenta y dos por ciento (82%) del promedio de los últimos veinte años de salarios mensuales ordinarios devengados en su vida laboral, actualizados según el índice de precios al consumidor (IPC), definido por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC), **siempre y cuando hayan cumplido sesenta y cinco años de edad y hayan trabajado al menos treinta y cinco años.”** (Énfasis agregado).

Artículo 229:

[…] “En caso de **muerte de un servidor activo**, la cuantía de la pensión por viudez, unión de hecho, orfandad o ascendencia será proporcional al **monto de pensión que hubiera recibido el fallecido** **de acuerdo con el cumplimiento de requisitos en el momento de la contingencia**…”. (Énfasis agregado).

1. **Conclusión.**

Conforme la normativa que regula la solicitud del señor Camacho Alpizar y del análisis de los antecedentes laborales y personales de la señora María Gabriela Calvo Ramírez al momento de su deceso, se verifica que la exservidora no cumplía con alguno de los requisitos establecidos en el artículo 224 para aprobar un derecho de jubilación, lo cual por consiguiente; no permite desde el componente legal de la solicitud, acceder a la determinación de un monto de pensión.

De esta forma, se pone en conocimiento de la Junta Administradora del Fondo de Jubilaciones y Pensiones, la gestión presentada por el señor Paulo Agustín Camacho Alpizar, para su atención.

(…).”

-0-

**Se acordó por unanimidad:** En razón de lo indicado en oficio número PJ-DGH-AP-4035-2020 del 19 de octubre de 2020, suscrito por la licenciada Olga Guerrero Córdoba, el licenciado Carlos Lizano Alfaro y la licenciada Leda Córdoba Montero, por su orden, Subdirectora interina de Gestión Humana, Jefe interino de Administración de Personal y Coordinadora de la Unidad de Jubilaciones y Pensiones, informar al gestionante señor Paulo Agustín Camacho Alpizar, que no es posible acoger lo que solicita debido a que, en su caso, no se cumple con los requisitos establecidos en el artículo 224 de la Ley Orgánica del Poder Judicial.

La Dirección de Gestión Humana tomará nota para los fines consiguientes. **Se declara acuerdo firme.**

## ARTÍCULO XXIX

**Documento N° 1051-20**

La licenciada Olga Guerrero Córdoba, el licenciado Carlos Lizano Alfaro y la licenciada Carlos Lizano Alfaro, por su orden, Subdirectora interina, Jefe interino de Administración de Personal y Coordinadora de la Unidad de Jubilaciones y Pensiones, en oficio N° PJ-DGH-AP-4871-2020 de 20 de octubre de 2020, remitieron lo siguiente:

“Para los efectos de su conocimiento, se rinde el informe correspondiente a la solicitud de pensión incoada el señor **Cesar Vargas Herrera**, en calidad de esposo de la jubilada judicial fallecida **Olga Rosa Murillo Brenes**, cuyo deceso acaeció el 24 de octubre de 2019.

1. **Origen.**

Esta Dirección en fecha 01 de julio de 2020, recibió la gestión del señor **Cesar Vargas Herrera**, mediante la cual solicita se le otorgue la pensión por el fallecimiento de doña Olga.

Consecuentemente, en fecha 07 de julio de 2020 se remitió el oficio PJ-DGH-AP-2587-2020 dirigido al Departamento de Trabajo Social y Psicología, donde se solicita la valoración socioeconómica del petente.

1. **Valoración socioeconómica practicada.**

(…)

1. **Consideraciones más relevantes del estudio socioeconómico de acuerdo con el criterio de la Profesional en Trabajo Social.**

(…)

1. **Normativa atinente al caso.**

Ley Orgánica del Poder Judicial N° 9544, de interés, estipula lo siguiente:

“Artículo 228- Tienen derecho a pensión por sobrevivencia:

1. *El cónyuge sobreviviente del servidor o jubilado fallecido que dependa económicamente del causante, al momento del fallecimiento.”*

“Artículo 229-

*El monto de las prestaciones de pensión por sobrevivencia en los casos de viudez, unión de hecho, orfandad o ascendencia será proporcional al monto de pensión que recibía el pensionado al momento de fallecer, y en su conjunto este monto no será mayor al ochenta por ciento (80%) de lo que correspondía al causante.”*

1. **Conclusiones.**

* El informe socioeconómico que se le practicó al señor Cesar Vargas Herrera, evidencia que **las obligaciones financieras del núcleo familiar eran compartidas por él y por doña Olga**, razón por la cual se puede establecer en el tema económico una **codependencia entre el valorado y su esposa**.
* Según la consulta realizada por la Unidad de Jubilaciones y Pensiones, don Cesar es jubilado por parte del Régimen de Jubilaciones y Pensiones del Poder Judicial y por lo tanto **cuenta con ingresos estables, aunque insuficientes de acuerdo con el estudio socioeconómico**.
* (…)
* La avanzada edad de don Cesar, la cual requiere de la atención y acompañamiento permanente, hacen que la contratación del servicio doméstico sea una necesidad primerísima para don Cesar, por lo cual los posibles ingresos que puedan representar la aprobación de la pensión son fundamentales para mantener esta asistencia.

1. **Datos de interés.**

* De la revisión del maestro de jubilados, se establece que la señora **Olga Rosa Murillo Brenes** percibía al momento de su deceso la suma en bruto de **[Valor]** mensuales de jubilación.
* Conforme a la normativa que regula la materia de jubilaciones y pensiones, el porcentaje máximo que le correspondería al señor **Cesar Vargas Herrera**, sería del 80% del monto bruto de jubilación que devengaba la jubilada judicial Olga Rosa Murillo Brenes, el cual equivaldría a **[Valor]**mensuales.
* La verificación de los datos recabados del señor Vargas Herrera, señalan que el jubilado devenga un beneficio por parte del régimen de Jubilaciones y Pensiones del Poder Judicial, por un monto de **[Valor]** mensuales en bruto.
* En cuanto a la presentación de la solicitud de pensión, la gestión se recibe en la Unidad de Jubilaciones y Pensiones el **01 de julio 2020; un total de 217 días naturales posteriores al fallecimiento de la jubilada Murillo Brenes**. Lo anterior para que se sirva ser valorado por la Junta Administradora del Fondo, para que, en caso de aprobarse el beneficio, se considere en el establecimiento de la fecha de rige del mismo.

Finalmente, se considera oportuno manifestar que esta solicitud debe ser analizada velando por la sostenibilidad del fondo, considerando en el bienestar colectivo y no individual, de manera que se cumplan los fines de la solidaridad, gradualidad, equidad y sostenibilidad financiera que reiteradamente han señalado los juristas.

Con toda consideración,”

(Documento)

- 0 -

Una vez analizadas la solicitud de pensión incoada por el señor Cesar Vargas Herrera, en calidad de esposo de la jubilada judicial fallecida Olga Rosa Murillo Brenes, así como el dictamen socioeconómico emitido por el Departamento de Trabajo Social y Psicología y el informe N° PJ-DGH-AP-4871-2020 de 20 de octubre de 2020, suscrito por la licenciada Olga Guerrero Córdoba, el licenciado Carlos Lizano Alfaro y la licenciada Carlos Lizano Alfaro, por su orden, Subdirectora interina, Jefe interino de Administración de Personal y Coordinadora de la Unidad de Jubilaciones y Pensiones, todos de la Dirección de Gestión Humana, por lo anterior, de conformidad con el artículo 229 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, **se acuerda por unanimidad**: Acoger la solicitud de pensión que formula el señor Cesar Vargas Herrera, cuya asignación mensual será equivalente al 80% del monto de la jubilación que recibía la jubilada judicial al momento de su deceso, con las deducciones que por ley correspondan. Lo anterior, en el entendido que el otorgamiento será a partir del 1 de julio de 2020, de conformidad con el artículo 37 del Reglamento General del Régimen de Jubilaciones y Pensiones que indica: *“…en los casos en los que la solicitud se presente posterior a ese plazo, el beneficio se otorgará a partir de la fecha de presentación de la respectiva gestión.”*

Hacer este acuerdo de conocimiento de la Dirección de Gestión Humana y del Departamento Financiero Contable. **Se declara acuerdo firme.**

## ARTÍCULO XXX

**Documento N° 738-2020 / 1011-2020.**

En oficio número 9848-2020 del 20 de octubre de 2020, dirigido a la máster Roxana Arrieta Meléndez, Directora de Gestión Humana, con copia a este Junta Administradora, el servidor Rafael Rodríguez Jiménez, Prosecretario General interino de la Secretaría General de la Corte, remitió el acuerdo tomado por el Consejo Superior del Poder Judicial, en la sesión N° 99-2020 celebrada el 15 de octubre de 2020, artículo LVIII, que literalmente dice:

“En sesión N° 93-2020 celebrada el 24 de setiembre de 2020, artículo XL, se tomó nota del oficio N° 640-2020 del 11 de setiembre de 2020, suscrito por la licenciada Ana Lucrecia Ruiz Rojas, Secretaria de la Junta Administradora del Fondo de Jubilaciones del Poder Judicial, en el que hizo de conocimiento la jubilación de la licenciada Maritza Francisca Zamora Solís, Jueza de Pensiones Alimentarias de Heredia, a partir del 16 de setiembre de 2020, el Consejo de la Judicatura sacará a concurso la plaza Nº 6101 de Juez 1 del Juzgado Pensiones Alimentarias de Heredia.

La servidora Olga Marta Salguero Cásares, Coordinadora Judicial del Tribunal de Familia del Primer Circuito judicial de San José, en correo del 7 de octubre de 2020, solicitó lo siguiente:

“…por ser de interés de este despacho, **me permito solicitar que se aclare que la plaza número 6101, corresponde a este despacho y no al Juzgado de Pensiones Alimentarias de Heredia, y se trata de una plaza de Técnico Judicial 3,** la cual era la propiedad de la señora Maritza Zamora Solís, por lo que debe sacarse a concurso en el momento en que la oficina que le corresponda lo considere oportuno. No omito manifestar que el acuerdo de la jubilación de la señora Zamora Solís, no nos fue notificado.”

- 0 -

Una vez analizada la gestión anterior, **se acordó**: **1.)** Tomar nota de la solicitud presentada por la servidora Olga Marta Salguero Cásares, Coordinadora Judicial del Tribunal de Familia del Primer Circuito judicial de San José y hacer de conocimiento de la Junta Administradora del Fondo de Jubilaciones del Poder Judicial. **2.)** Modificar el acuerdo tomado en sesión N° 93-2020 celebrada el 24 de setiembre de 2020, artículo XL, en el sentido que la plaza que se tiene que sacará a concurso es la N° 371089 del Juzgado de Pensiones Alimentarias de Heredia y no como se indicó.

El Centro de Apoyo, Coordinación y Mejoramiento de la Función Jurisdiccional, la Dirección de Gestión Humana, la Sección Administrativa de la Carrera Judicial, tomaran nota para lo que corresponda. **Se declara acuerdo firme.**”

- 0 -

**Se acordó:** Tomar nota de la copia del oficio número 9848-2020 del 20 de octubre de 2020, dirigido a la máster Roxana Arrieta Meléndez, Directora de Gestión Humana, suscrito por el servidor Rafael Rodríguez Jiménez, Prosecretario General interino de la Secretaría General de la Corte, en que remitió el acuerdo tomado por el Consejo Superior del Poder Judicial, en la sesión N° 99-2020 celebrada el 15 de octubre de 2020, artículo LVIII. **2.)** Hacer este acuerdo de conocimiento de la Secretaría General de la Corte con la finalidad que, en lo sucesivo, remita copia de los oficios en que se comunica una jubilación a los despachos a los que pertenecen las personas servidoras que se jubilan. **Se declara acuerdo firme.**

**ARTÍCULO XXXI**

**Documento N° 816-20 / 1015-20.**

En la sesión N° 31-2020 celebrada el 21 de setiembre del 2020, artículo VII, se tomó el acuerdo cuya parte dispositiva dice literalmente lo siguiente:

**Se acordó: 1.)** Tener por conocido el oficio N° 1181-TE-2020 suscrito por los másteres Miguel Ovares Chavarría, Jefe del Macroproceso Financiero Contable, Floribel Campos Solano, Jefa del Proceso de Tesorería y Andrea Valerín Arroyo, Jefa del Subproceso de Egresos, con el que solicitan al Banco de Costa Rica, referirse a las inconsistencias que se han presentado en el pago de las últimas planillas quincenales a favor de las personas jubiladas y pensionadas del Poder Judicial, al momento de aplicación por parte de esa entidad bancaria, así como la respuesta brindada por la entidad bancaria para evitar que a futuro se vuelva a presentar una situación similar. **2.)** Hacer de conocimiento de la Gerencia General del Banco de Costa Rica de la situación presentada y **s**olicitar al Ejecutivo del Banco de Costa Rica, la colaboración para que el protocolo establecido para la acreditación de la planilla de la población jubilada y pensionada se verifique oportunamente y se confirme al Macroproceso Financiero Contable cuando haya sido cancelada totalmente, así como cuando se presenten inconsistencias que no permitan realizar el pago de los beneficios. **3.)** Solicitar al Macroproceso Financiero Contable la revisión del protocolo que mantiene el Banco de Costa Rica con el fin de actualizar el mismo y evitar que a futuro se presente la situación descrita.”

-0-

El licenciado Douglas Soto Leitón, Gerente General del Banco de Costa Rica (BCR), remite oficio GG-10-707-2020 del 20 de octubre de 2020, indicando lo siguiente:

“En atención a su oficio #774-2020, de fecha 14 de octubre de 2020, me permito detallar los siguientes puntos: .

• El BCR por medio de la plataforma de Banca por Internet BCR Comercial, pone a disposición del Poder Judicial y de todos sus clientes el servicio de gestión de pagos que requieran hacer, tanto a cuentas bancarias BCR como de todo el sistema bancario nacional, para la ejecución de dicho proceso se hace uso del servicio del SINPE según lo dispuesto por el BCCR. La ejecución en firme de las transferencias gestionadas por los clientes depende de la disponibilidad del servicio que tengan los diferentes bancos que componen el sistema bancario nacional, así la cosas pueden existir rechazos de transacciones por motivos fuera del alcance del banco, como por ejemplo “banco destino no responde”

• Ante situaciones normales nuestros clientes generan un nuevo proceso de pago de las transferencias rechazadas, en el caso del Poder Judicial por varios años y en forma exitosa el banco ha generado un proceso exclusivo de apoyo operativo al área Financiero Contable y la Dirección Financiera del Poder Judicial, de tal forma que las transferencias rechazadas se proceden a gestionar de nuevo por nuestro personal, amparado por un protocolo previamente aprobado por las partes, de esta forma el beneficiario de la transferencia recibe un servicio más expedito y el proceso operativo del PJ se aliviana.

Sin embargo la segunda quincena del mes de agosto por un error involuntario en la ejecución del protocolo se quedó sin aplicar en una planilla de 3500 registros 7 acreditaciones, cabe indicar que de igual forma no se debitaron de la cuenta del Poder Judicial.

Este incidente fue corregido en su momento y de igual forma se reforzó el protocolo con los involucrados en el proceso a fin de evitar futuras situaciones.

Reforzamos nuestra disponibilidad de poder presentarles nuevamente a ustedes opciones de autogestión para atender este tipo incidentes o bien pensar en nuevas tecnologías, como es el servicio host to host disponible para nuestros clientes. Agradeciendo la confianza en nuestra institución se despide,

-0-

En oficio número SJD-0123-2020, del 2 de noviembre de 2020, el licenciado Pablo Eduardo Villegas Fonseca, Secretario General de la Junta Directiva del Banco de Costa Rica, remitió la siguiente información:

“(…). Me permito acusar recibido de su carta de fecha 14 de octubre del año en curso, dirigida al señor Douglas Soto Leitón, en calidad de Gerente General del Banco, con copia a la Junta Directiva y otros remitentes, mediante la cual se informa acerca del acuerdo tomado por su representada en la sesión n.°31-2020, celebrada el pasado 21 de setiembre.

Dicha misiva fue conocida por la Junta Directiva General, en la sesión n.°42-2020, artículo XXVII, del 20 de octubre del año en curso.

(…).”

- 0 -

**Se acordó por unanimidad** : Tomar nota de la comunicación remitida por el licenciado Douglas Soto Leitón, Gerente General del Banco de Costa Rica (BCR) y el licenciado Pablo Eduardo Villegas Fonseca, Secretario General de la Junta Directiva del Banco de Costa Rica, en oficios N° GG-10-707-2020 del 20 de octubre de 2020 y N° SJD-0123-2020 del 2 de noviembre de 2020. **Se declara acuerdo firme.**

## ARTÍCULO XXXII

**Documento N° 1082-2020**

En sesión N° 35-2020 celebrada el 26 de octubre de 2020, artículo XXVIII, esta Junta Administradora tomó el acuerdo que literalmente dice:

“La máster Kattia Morales Navarro, Directora de Tecnología de la Información y las Comunicaciones, en oficio N° 2084-DTI-2020 de 23 de octubre de 2020, comunicó:

“Esta Dirección recibió el oficio N° 777-2020, en el cual se transcribe el acuerdo tomado por la Junta Administradora del Fondo de Jubilaciones y Pensiones del Poder Judicial, en la sesión N° 33-2020, artículo VIII, en el que se indica:

*“****Se acordó por unanimidad: 1.)*** *Tener por rendido el oficio N° SP-1218-2020 de 29 de setiembre de 2020 y notificado mediante sistema de correspondencia denominado VES el 5 de octubre de 2020, suscrito por la licenciada Rocío Aguilar Montoya, Superintendente de Pensiones, mediante el cual hace de conocimiento de esta Junta el desarrollo de un sistema de información para la carga, procesamiento y generación de indicadores de las carteras de los créditos otorgados por los correspondientes regímenes, con el propósito de automatizar este proceso, de manera que, la Superintendencia de Pensiones, pueda contar con información sobre la morosidad y pérdida estimada de las carteras de crédito. Al respecto la Superintendencia de Pensiones remite el borrador del Capítulo VII denominado “Crédito” del Manual de Información, con el fin de que se emitan comentarios u observaciones en el plazo de diez días hábiles.* ***2.)*** *Hacer este oficio de conocimiento del Macroproceso Financiero Contable y de la Dirección de Tecnología de la Información, para lo que a cada uno corresponda, dentro del plazo otorgado por la Superintendencia.* ***Se declara acuerdo firme****.”*

En atención al punto 2 del acuerdo se debe indicar que, en relación con la carga, procesamiento y generación de indicadores de las carteras de los créditos otorgados por los correspondientes regímenes, la Dirección de Tecnología de Información del Poder Judicial, no puede emitir criterio hasta que el Departamento Financiero Contable con la aprobación de la Junta Administradora del Fondo, traslade a esta Dirección el requerimiento o mejoras que deberían aplicarse a los sistemas de información, ya sea en el Sistema Contable o el Sistema de Carteras Inversiones.”

- 0 -

**Se acordó: 1.)** Tener por recibido el oficio N° 2084-DTI-2020 suscrito por la máster Kattia Morales Navarro, Directora de Tecnología de la Información y Comunicaciones, sobre archivo de crédito que se deben remitir en el 2021. **2.)** Solicitar al Macroproceso Financiero Contable que en plazo de 8 días hábiles remita a esta Junta el requerimiento específico para dar cumplimiento al SP-1218-2020. **Se declara este acuerdo firme.**”

- 0 -

Con base en lo anterior, el máster Miguel Ovares Chavarría, Jefe del Macroproceso Financiero Contable, remitió el oficio N° 0765-FC-2020 del 5 de noviembre de 2020, en atención al acuerdo supracitado, relacionado con el requerimiento específico para el cumplimiento de lo establecido en el oficio SP-1218-2020, el cual se adjunta a continuación:



- 0 -

Una vez analizada la gestión anterior, **se acuerda por unanimidad**: **1.)** Tener por recibido el oficio N° 0765-FC-2020 del 5 de noviembre de 2020, suscrito por el máster Miguel Ovares Chavarría, Jefe del Departamento Financiero Contable, relacionado con el requerimiento específico para el cumplimiento de lo establecido en el oficio SP-1218-2020. **2.)** Conforme a lo anterior, se autoriza al Departamento Financiero Contable, para que coordine con la Dirección de Tecnología de la Información lo que estime pertinente para ajustarse en el tiempo establecido a los requerimientos emitidos por la Superintendencia de Pensiones en el oficio N° SP-1218-2020 de 29 de setiembre de 2020. **3.)** Hacer el presente acuerdo de conocimiento de la Dirección de Tecnología de la Información para lo que corresponda. **Se declara acuerdo firme.**

**---o0o---**

**A las doce horas quince minutos terminó la sesión.**